PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

*CÁMARA FEDERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL*

**DEPARTAMENTO DE JURISPRU-
DENCIA**

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA Nro. 20

SEGURIDAD SOCIAL

AFILIACIÓN

Antigüedad. Ley 18.038, art. 16, inc. b). Caja otorgante.

El recaudo de "antigüedad en la afiliación" que preveía el art. 16, inc. c) de la ley 18.038 - dirigido a evitar la posible captación de beneficios indebidos- debe ceder frente a la existencia de suficientes años comprobados de servicios con aportes; resultando innecesario indagar si los servicios que el organismo previsional cuestiona se encuentran probados. A mayor abundamiento, debe advertirse que el "principio de la caja otorgante" (art. 80, ley 18.037 y 16 inc. c) y 61 de la ley 18.038) perdió eficacia pues la unificación del Sistema de Seguridad Social ha llevado a que las Cajas Nacionales de Previsión desaparezcan como entes jurídicos independientes, lo que torna improcedente todo conflicto destinado a determinar cual debe ser la caja otorgante de la prestación (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. de 11.05.92, "Sala de Bescio, Angela"; Sala II, sent. del 22.06.94, "Verde de Domínguez, Irene").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71270, 22.08.97

"GÓMEZ, EDUARDO ISMAEL c/ I.N.P.S."

(F.-E.-H.)

Trabajadores autónomos. Plazo. Ley 18.038, art. 42, inc. a).

La exigencia de afiliación contemplada en el art. 42, inc. a) de la ley 18.038 no es un requisito ineludible si a la fecha de fallecimiento no habían transcurrido los 50 días de plazo desde la iniciación de las actividades autónomas.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71190, 07.08.97

"FERREYRA DE TUGUES, NORMA GLADYS c/ I.N.P.S."

(F.-E.-H.)

ASIGNACIONES FAMILIARES

Cargos. Impugnación de deuda. Sumas abonadas por nacimiento y matrimonio.

Lo abonado en carácter de nacimiento y matrimonio cabe asimilarlo al régimen de las gratificaciones, en razón de que las instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto - o legislador incluso -, sino de su verdadera esencia jurídica. Es menester señalar la distinción entre gratificaciones habituales o regulares y gratificaciones extraordinarias. En materia previsional, las primeras están sujetas a aportes jubulatorios, consecuencia del carácter remuneratorio de las mismas, conforme lo dispuesto por los arts. 10 y 12 de la ley 18.037. Las segundas, no son consideradas remuneración por no presentar las características de regular ni habitual, propia de las anteriores. En consecuencia, cabe concluir que eventos como el matrimonio y el nacimiento de un hijo son excepcionales en la vida de los beneficiarios. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70385, 18.12.97

"FLEISCHMANN ARGENTINA INCORPORATED c/ C.A.S.F.P.I."

(W.-L.-F.)

Cargos. Impugnación de deuda. Sumas abonadas por nacimiento y matrimonio.

Las sumas abonadas por nacimiento y casamiento tienen carácter remuneratorio conforme surge claramente de lo prescripto por los arts. 21 y 31 de la ley 18.017. En consecuencia, corresponde confirmar el pronunciamiento administrativo que desestimó la impugnación de deuda. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70385, 18.12.97

"FLEISCHMANN ARGENTINA INCORPORATED c/ C.A.S.F.P.I."

(W.-L.-F.)

Zona patagónica. Res. 10/92 S.E.S.S. Fondo de empleo. Ley 24.013.

La Resolución 10/92 de la S.E.S.S. viola lo establecido por los arts. 16, 17, 18 y 86 inc. 2) de la C.N. (texto anterior a la reforma de 1994), porque al exigir un adicional a empleadores radicados en la zona patagónica, afecta el principio de igualdad ante la ley, y los derechos de propiedad y de defensa. Asimismo, vulnera la pirámide normativa a la que alude el art. 31 del texto precitado e incurre en exceso reglamentario.

C.F.S.S., Sala III, sent. 70326, 23.10.97

"GUILFORD ARGENTINA S.A. c/ D.G.I."

(W.-L.-F.)

CONSTITUCIÓN NACIONAL

Leyes. Presunción de legitimidad. Declaración de inconstitucionalidad.

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes, o de alguna de sus partes, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia, y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada "última ratio" del orden jurídico, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas con los mecanismos previstos en la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, resultando procedente únicamente cuando la repugnancia de la norma con la Constitución sea manifiesta, clara e indudable (cfr. C.S.J.N., sent. del 04-05-91, "Pupelis, María Cristina"; sent. del 5-12-92, "Bruno Hnos. S.C. c/ Adm. Gral. de Aduanas").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45413, 15.12.97

"ARIAS, MARIANO c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Leyes. Declaración de inconstitucionalidad.

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes, o de alguna de sus partes, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada "última ratio" del orden jurídico, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas con los mecanismos previstos en la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia resultando procedente únicamente cuando la repugnancia de la norma con la Constitución sea manifiesta, clara e indudable (cfr. C.S.J.N., sent. del 04.05.91, "Pupelis, María Cristina y otros"; ídem sent. del 05.12.92, "Bruno Hnos. S.C. y otro").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45475, 29.12.97

"FRANCALANCIA, ERNESTO c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Leyes. Declaración de inconstitucionalidad. Facultad de los jueces.

Las disposiciones de una ley no pueden ser modificadas por el órgano jurisdiccional pues "el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces -comprensivo de la determinación de su conformidad con los principios y garantías de la Ley Fundamental-, así como en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales y la suplencia de sus lagunas (art. 16 Cód. Civil) no incluye, obviamente, la facultad de instituir la ley misma. No es lícito que los magistrados judiciales argentinos procedan con olvido de su carácter de órganos de aplicación del derecho "vigente" ni que se atribuyan, así sea por invocación de supuestas razones de "emergencia" o de "gravedad del interés público comprometido", potestades legislativas de las que carecen" (cfr. Fallos 308:1848).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45475, 29.12.97

"FRANCALANCIA, ERNESTO c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

DOCENTES

Caja complementaria. Haber. Requisitos. Ley 22.804.

De acuerdo a lo previsto por el art. 4, inc. b) de la ley 22.804, para tener derecho al haber complementario es necesario, entre otros requisitos, acreditar el desempeño de servicios docentes por un tiempo no inferior a 15 años, de los cuales 36 meses consecutivos o no, deben estar comprendidos en el período de 60 meses calendario inmediatamente anteriores al cese en la actividad docente y, por aplicación del art. 2 de la ley referida, sólo deben computarse aquéllos servicios de carácter docente expresamente incluidos en la norma -ver incisos a), b), c) y d) de dicho artículo-. En consecuencia, no acreditando la peticionante otros servicios desempeñados en la actividad docente que los verificados por el organismo actuante (en el caso 11 años, 3 meses y 2 días), debe desestimarse el recurso interpuesto contra la resolución que le denegó la solicitud del haber complementario.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79185, 30.09.97

"RODRIGUEZ, MARÍA SELVA c/ CAJA COMPLEMENTARIA PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE"

(M.-D.-Ch.)

Prestaciones. Acumulación. Ley 23.604. Jubilación ordinaria parcial.

La ley 23.604 estableció una excepción al principio de la jubilación única y circunscribió el ámbito de aplicación de la norma a quienes fueren acreedores al beneficio de jubilación ordinaria. Esta expresión es genérica y la jubilación ordinaria parcial es una especie, respecto a la cual la ley no efectúa discriminaciones. En ese sentido, los Drs. Brito Peret y Jaime han sostenido que "no dejan de ser ordinarias y así lo establecen expresamente las normas respectivas, las jubilaciones que con requisitos diferentes se obtienen conforme con las disposiciones de numerosos regímenes diferenciales y especiales" (cfr. Régimen de Previsión Social - Ley 18.037"). En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó el beneficio de jubilación ordinaria parcial con fundamento en la ley 23.604. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70336, 24.10.97

"SOLARI, ALBERTO VICENTE c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos"

(L.-W.-F.)

Prestaciones. Acumulación. Ley 23.604. Jubilación ordinaria parcial.

La ley 23.604 consagra una excepción al principio de la jubilación única normado por el art. 23 de la ley 14.370, al expresar que "esta excepción procederá exclusivamente para la jubilación ordinaria". En un todo de acuerdo con el carácter excepcional de la norma, su interpretación ha de ser restrictiva y, en tal sentido, no cabe incluir en su ámbito a la jubilación ordinaria parcial prevista por el régimen del art. 52, inc. c) de la ley 14.473, merced al cual se instrumenta un régimen jubilatorio muy específico y singular. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70336, 24.10.97

"SOLARI, ALBERTO VICENTE c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos"

(L.-W.-F.)

Renuncia condicionada. Continuidad laboral. Cómputo. Determinación del haber. Dec. 8820/62.

El dec. 8820/62 autoriza que entre la renuncia condicionada y la definitiva, el titular continúe trabajando y percibiendo sus haberes, sobre los cuales se calculan y depositan los aportes y contribuciones respectivas. De allí que lógico es suponer que ese período y esos aportes sean computados a los fines de determinar su beneficio.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71671, 30.12.97

"AVALOS DE ARRIBALZAGA c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Renuncia condicionada. Determinación del haber. Dec. 8820/62.

La "situación de revista" a la que refiere el art. 4 del Dec. 8820/62 debe tomar en cuenta la antigüedad acreditada a la fecha de la renuncia condicionada a efectos de tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al beneficio pretendido, sin perjuicio que la antigüedad a computar para el cálculo del haber del beneficio otorgado se incremente con la del período trabajado desde aquella dimisión hasta el cese definitivo (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 07.05.92, "Cicciaro, Eduardo"; Sala II, sent. del 06.06.94, "López, Jorge Rubén").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71671, 30.12.97

"AVALOS DE ARRIBALZAGA c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

ESTADO, PERSONAL DEL

Ley 22.955. Haberes previsionales. Determinación. Horas extras. Cómputo. Dec. 3319/83, art. 8.

Dentro del esquema de la ley 22.955 las horas extras pueden considerarse retribuciones variables e incluidas en el haber de pasividad, en la medida que se acredite el cumplimiento de las directivas que da el art. 8 del Dec. 3319/83. No empece a ello lo previsto por la Resolución I.N.S.P. n° 70 (18.06.91), pues la misma no puede desconocer los alcances de la norma que pretende reglamentar.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71613, 30.12.97

"ESTIVILL, IRMA c/ Caja Nacional de Previsión para Personal de Estado y Servicios Públicos"

(F.-H.-E.)

FINANCIACIÓN

Aportes

"Colaboradores" de un sindicato. Relación laboral.

No cabe analizar globalmente la situación de quienes en calidad de "colaboradores" de un sindicato, perciben viáticos y gastos de representación, ya que con carácter previo debe determinarse, concretamente, cada supuesto particular, meritándose muy especialmente, el tipo de tareas cumplidas y la situación laboral con la asociación gremial y la empresa de la que pudieran haber dependido o dependiesen durante el período cuestionado.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71335, 12.09.97

"SINDICATO FOETRA BUENOS AIRES c/ D.G.I."

(F.-H.-E.)

Reducción. Dec. 2609/93 y Dec. 292/95.

La existencia de una diferencia poco significativa (en el caso, \$ 26,21.-) a favor del organismo administrativo, no es causa suficiente para dar por decaído el beneficio de reducción de aportes cuya instrumentación -a través del Dec. 2609/93 y su complementario Dec. 292/95- fue objetivo prioritario de la política económica nacional; máxime si la recurrente cumplió con sus obligaciones previsionales y demostró desde el inicio su firme voluntad de depositar lo que correspondía y, al advertir el error de cálculo y las diferencias entre lo declarado y lo depositado, inmediatamente lo rectificó.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71275, 22.08.97

"IMPASA DISTRIBUIDORA S.R.L. c/ D.G.I."

(E.-H.-F.)

Viáticos. Carácter remunerativo.

La normativa vigente ninguna discriminación efectúa sobre el "quantum" del viático abonado, siendo siempre condición ineludible para excluirlo como salario el comprobante del gasto que se pretende reembolsar. Podrá señalarse que el escaso monto que representa la suma cuestionada (en el caso, \$ 4.- diarios, promedio) es fiel reflejo de un gasto efectivo y que, en tal extremo, la exigencia de comprobante implica una aplicación excesivamente rigurosa de la ley. Sin embargo, ello no es así. La magnitud de los reintegros - aún cuando individualmente puedan ser de poca significación económica- adquiere especial relevancia si se toma en cuenta la cantidad de personal afectado y reiteración o habitualidad del pago, llegando a cifras importantes en un lapso considerable; importes que, en definitiva, sin respaldo alguno, se excluyen del ámbito previsional como base de aportes y contribuciones con evidente detrimento del sistema (ya bastante deteriorado), sin entrar a considerar su incidencia en el nivel remuneratorio efectivo del trabajador. (Del voto de la mayoría. El Dr. Etala votó en disidencia)

C.F.S.S., Sala II, sent. 71395, 30.09.97

"BANCO ROBERTS S.A. c/ I.N.P.S."

(E.-F.-H.)

Viáticos. Carácter remunerativo.

El viático es la suma de dinero que se entrega al dependiente para soportar ciertos gastos que le impone su trabajo fuera de la empresa, generalmente relativos a alojamiento, comida y transportes. Se pueden entregar con o sin cargo de rendir cuentas, según se acuerde con el dependiente una suma fija de la que puede disponer libremente o se le exija la expresión detallada y documentada de cada uno de los gastos. En consecuencia, corresponde concluir que no constituye una ventaja patrimonial para los trabajadores (en el caso, promotores) la suma promedio diaria abonada por la recurrente de \$ 4.-, sino que se trata de un reintegro o compensación de lo que ellos han

desembolsado para efectuar o concretar ventas, es decir, gastos necesarios para el normal desenvolvimiento de las tareas. (Disidencia del Dr. Etala).
C.F.S.S., Sala II, sent. 71395, 30.09.97
"BANCO ROBERTS S.A. c/ I.N.P.S."
(E.-F.-H.)

Cargos

Cooperativas de trabajo. Presunción. Evasión previsional. Prueba.

Para desvirtuar la presunción en favor de la vinculación asociativa respecto de la laboral, debe demostrarse que se está en presencia de una simulación o fraude; demostración de la que no está exento el órgano administrativo cuando pretende imponer un cargo previsional en razón de una supuesta omisión o evasión de esa índole. Por lo tanto, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que los asociados cooperativos revisten el carácter de trabajadores, supuesto de extrema gravedad que requiere de parte de quien efectúa tal imputación, el máximo de prudencia.
C.F.S.S., Sala II, sent. 71517, 27.11.97
"COOPERATIVA DE TRABAJO CERRO CRISTO LTDA. c/ D.G.I."
(F.-H.-E.)

Directores de sociedades anónimas. Relación de dependencia.

Salvo en casos expresamente demostrados, los directores de las sociedades anónimas no se encuentran en relación de dependencia con la misma, y por lo tanto, no están sujetos al régimen previsional para la actividad dependiente.
C.F.S.S., Sala II, sent. 71646, 30.12.97
"MACUA, ALBERTO JESÚS EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO JESÚS MACUA S.A. c/ D.G.I."
(F.-E.-H.)

Directores suplentes de sociedades anónimas. Aportes previsionales. Ley 24.241, art. 2, inc. b), apart. 1).

Los directores suplentes no tienen las mismas obligaciones y responsabilidades de los titulares. Tienen sólo la expectativa de ser llamados a cubrir la vacancia en casos de ausencia de su titular, y no integran el órgano directivo, pues el desempeño de la titularidad es excluyente. Desde el punto de vista previsional, a tenor de lo dispuesto por la ley 24.241, el director suplente no estará obligado al pago de los aportes previsionales en los términos del art. 2, inc. b), apart. 1). Será obligatorio cuando efectivamente esté en el cargo de director.
C.F.S.S., Sala II, sent. 71646, 30.12.97
"MACUA, ALBERTO JESÚS EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO JESÚS MACUA S.A. c/ D.G.I."
(F.-E.-H.)

Gastos de comida. Plenarios de la C.N.A.T.

La C.N.A.T. estableció, a través de acuerdos plenarios, que mediante convenio colectivo se podría atribuir carácter no remunerativo a los gastos de comida no acreditados mediante comprobantes (Plenario n° 247 del 28.08.85, "Aiello c/ Transportes Automotores Chevallier") y, a posteriori, que los valores que los empleadores entregaban a su personal para comidas o refrigerios a consumir fuera del establecimiento, no están comprendidos en el concepto de remuneración previsional (Plenario n° 264 del 27.12.88, "Ángel Estrada y Cía. S.A."). Si bien dichos acuerdos plenarios no son imperativos para la C.F.S.S. - conforme los términos del art. 303 del C.P.C.C.-, deben respetarse

por razones de seguridad jurídica, pues no puede ignorarse que la Cámara Laboral sentó doctrina sobre la materia cuando las cuestiones previsionales eran sometidas a su estudio, es decir, con anterioridad a la sanción de la ley 24.473; y por la evolución propia que ha sufrido el tema sobre la materia, por cuanto el propio Poder Administrador, basándose en los referidos plenarios, sancionó el Dec. 333/93, cuyo objetivo fue la institucionalización de los denominados "beneficios sociales" como contraprestación que recibe el trabajador para mejorar su calidad de vida, sin que ello implique una ventaja patrimonial.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71624, 30.12.97

"OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE ADUANA c/ D.G.I." (E.-F.-H.)

Imputación. Prueba. Deber de las partes.

Si bien es cierto que el organismo que formula una imputación debe demostrar la veracidad de los cargos que impone, también lo es que el particular cuenta con los medios para desvirtuarlos, sin que ello implique, obviamente, obligarlo a producir pruebas diabólicas o de difícil o imposible cumplimiento, sino simplemente coadyuvar con la administración en las tantas veces citada "búsqueda de la verdad material". En ese sentido, la negación de un cargo no puede pretender, por sí sola, tener suficiente entidad para que se deje sin efecto, si no surge evidente que el mismo es arbitrario y no responde a objetivas estimaciones del organismo que lo impone. De allí que frente a situaciones dudosas, las presunciones primeras del ente recaudador pueden convertirse en serias convicciones ante la falta de colaboración del particular, máxime si estas no obedecen a fundadas razones que deban ser tenidas en cuenta y hayan sido temporáneamente expuestas.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71659, 30.12.97

"SORAIDE FLORES, MARIO c/ I.N.P.S." (F.-E.-H.)

Imputación. Prueba. Documentación. Deber del contribuyente.

Es obligación del contribuyente contar con toda la documentación laboral y contable que avale la actividad que lleva a cabo, su modalidad y condiciones particulares. Por eso, ante la falta de documentación, irregularidad en sus registraciones, reticencia en mostrarla ante el reclamo que se le efectúe, normativamente se ha acordado al organismo administrativo la facultad de determinar de oficio la deuda que resulta de todas esas irregularidades detectadas y sobre la base de otros datos que le han permitido vislumbrar la existencia presunta de una evasión previsional.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71659, 30.12.97

"SORAIDE FLORES, MARIO c/ I.N.P.S." (F.-E.-H.)

Profesionales. Encuadramiento laboral. Obra pública. Régimen provincial.

Una norma local que regule el régimen de obra pública en una provincia no es óbice para determinar un encuadramiento laboral, si los elementos que rodean la vinculación permiten considerar al profesional integrado - junto con otros medios personales y materiales- a la empresa, para el logro de sus fines.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71664, 30.12.97

"COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CHACABUCO LTDA. c/ D.G.I." (F.-E.-H.)

Profesionales. Relación laboral. Prueba.

No habiéndose determinado si las tareas que desempeña un profesional (en el caso, ingeniero) se encuentran efectivamente subordinadas jurídicamente respecto de una empresa - por ejemplo si ésta puede imponer sanciones o

penalidades en caso de incumplimiento, más allá de las propias de responsabilidad por mal desempeño de su actividad profesional- y tampoco cual es la modalidad de ejecución de esas tareas, horarios, etc.; o sea, no probadas todas aquellas circunstancias que permiten al juzgador una más clara visión de la realidad, corresponde revocar la resolución por la que se formuló cargos por cotizaciones previsionales omitidas. Ello así porque quien aduce una relación de trabajo es a quien compete demostrarla, sobre todo en situaciones dudosas u oscuras que admiten la existencia de otro tipo de vinculación.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71664, 30.12.97

"COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CHACABUCO LTDA. c/ D.G.I."

(F.-E.-H.)

Profesionales médicos. Relación laboral.

Constituye una hipótesis particular el de la empresa que contrata a una organización de servicios profesionales, pues para que pueda considerarse que hay relación laboral, la contratación debe haber tenido por objeto los servicios personales del profesional. Ello no ocurre cuando lo que se contrata son los servicios de una organización médica, pues en este caso la relación es con la empresa. En definitiva, el análisis conduce a determinar si el servicio es prestado por cuenta ajena dentro de las actividades de la empresa, o si el profesional en forma aislada desarrolla sus funciones con el cliente para casos determinados cuya atención queda desde ese momento a su exclusiva cuenta en un claro régimen de autonomía, a lo que se une el hecho de que pueda desechar las propuestas que no considere aceptable y utilizar auxiliares que considera conveniente, lo que indica la existencia de una organización (cfr. Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", T. I, pág. 709). En consecuencia, debe concluirse que la falta de subordinación económica y técnica hace decaer el concepto de relación de dependencia, circunstancia que se configura cuando los médicos no se encuentran sometidos a órdenes ni directivas de la empresa, no se encuentran a disposición de ella, no cumplen horarios determinados y no guardan habitualidad ni exclusividad.

C.F.S.S., Sala III, sent. 70380, 04.12.97

"COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS LTDA. c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Remiseros. Relación laboral.

La facultad de los remiseros de prestar el servicio a través de peones contratados y pagados por ellos, quita a la prestación gran parte de su contenido personal, tendiendo a delimitarla como servicio de transporte, donde es más importante el vehículo contratado que las condiciones individuales de la persona que realiza el trabajo (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 15.02.80, "Quemurman, Abraham c/ Manuel Tienda León S.A.").

C.F.S.S., Sala III, sent. 70380, 04.12.97

"COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS LTDA. c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Sociedades comerciales. Socios. Relación de dependencia. Art. 27 R.C.T.

El art. 27 del R.C.T. busca subordinar el encuadre jurídico a la realidad social, ya que hace depender la calificación de la mayor o menor autoridad investida por el socio en cuestión, o mejor dicho, de su mayor o menor autonomía fundada en el poder real dentro de la sociedad (cfr. Guibourg, "Los sujetos del contrato de trabajo", L.T. Tº XXIV-1090). En consecuencia, para aceptar que los integrantes de un matrimonio revistieron el carácter de dependientes de la sociedad tendría que acreditarse que recibieron órdenes e instrucciones de un organismo superior, lo que resulta imposible si son los únicos componentes del ente societario, tienen a su cargo - en forma con-

junta- la administración y gerencia y, por lo tanto, su gestión personal no resulta subordinada.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71197, 07.08.97

"CONFECCIONES JEAN JAURES S.R.L. c/ D.N.R.P."

(E.-H.-F.)

Sociedades comerciales. Gerentes. Relación de dependencia.

El socio mayoritario que ejerce el cargo de gerente no es trabajador dependiente aunque dicho ejercicio ocupe toda su actividad personal, porque no recibe órdenes ni instrucciones, ni ejecuta decisiones en las que no haya participado activa y aún preponderantemente (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent del 19.11.90, "Aurelio Cosio Mena y Alberto Cosio"). Dicha tesis es compartida por Krotoschin (cfr. "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Tº I, pág. 125) al expresar que "cuando el gerente es socio no puede ser trabajador dependiente si dispone de la mayoría de las cuotas, tampoco puede serlo si fuese designado en el contrato constitutivo de la sociedad y, aún menos, si la designación fuese condición expresa de la constitución de la sociedad".

C.F.S.S., Sala II, sent. 71197, 07.08.97

"CONFECCIONES JEAN JAURES S.R.L. c/ D.N.R.P."

(E.-H.-F.)

Deudas con las cajas

Desindexación. Ley 24.283. Intereses. Procedencia. Arts. 509 y 622 del Cód. Civil.

Si los intereses aplicados a una deuda se originan en la falta de cumplimiento en término de la obligación que la recurrente tenía con la D.G.I., se justifican en virtud de lo normado por los arts. 509 y 622 del Código Civil, debiendo ser desechado el argumento de que dicho mecanismo resulta prohibitivo por la ley 24.283, ya que dicha normativa tuvo como fin terminar con la indexación originada en períodos hiperinflacionarios en los cuales la aplicación de mecanismos para mantener actualizado el capital originaba resultados injustos y desmedidos, pero no para premiar a los deudores morosos. Al respecto, la C.S.J.N. ha sostenido que "la adopción de un criterio distinto importaría tanto como neutralizar los efectos propios del incumplimiento de una obligación, asimilar conceptos de naturalezas diversas y desconocer el carácter que este Tribunal ha asignado a los intereses en los supuestos en los que, como sucede en la especie, resultaron aplicables como consecuencia de lo dispuesto en las normas de fondo..." (cfr. "sent. del 21.05.96, "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Tucumán, Pcia. de").

C.F.S.S., Sala I, sent. 79304, 03.11.97

"EL CANDIL S.A. c/ D.G.I."

(M.-D.-Ch.)

Desindexación. Ley 24.283. Dec. 589/91, 611/92 y 159/92.

Los decretos que reglamentan las leyes 23.928 y 24.283, respecto de las deudas previsionales (589/91, 611/92 y 159/92), no están sujetos a índices o mecanismos, sino que establecen porcentajes en función del capital adeudado, los que deben ser aplicados cuando no contengan carga indexatoria.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79304, 03.11.97

"EL CANDIL S.A. c/ D.G.I."

(M.-D.-Ch.)

Desindexación. Ley 24.283. Prueba.

La parte que se considera perjudicada por un mecanismo indexatorio irrazonable soporta la carga de acreditar (por ejemplo, a través de pericias con-

tables o formalizadas por datos estadísticos - matemáticos) que ello es así. Dicho de otro modo: deben mediar aportes probatorios si es que se quiere lograr la aplicación en la especie de la ley 24.283; y eso hace que, en principio, y salvo que medien constancia de autos que acrediten "in re ipsa" la falta de razonabilidad indexatoria acusada, los Tribunales no se encuentran en condiciones de aplicar oficiosamente la ley referida (cfr. Peyrano, J., "Principalmente, la ley 24.283 es una norma desindexatoria"; id. "Aspectos procesales de la ley desindexatoria 24.283", Revista La Ley del 21.04.94). Por ello, incumbe al interesado la carga de la prueba respecto de que el capital actualizado supera el valor real y actual de la prestación, lo que supone individualizar el valor actual para compararlo con el capital actualizado, cuya reducción se pide (cfr. C.N.A.Civ., Sala E, sent. del 23.11.94, "Santamaría, Roberto Daniel c/ Nogueira, Hugo Manuel y otro").

C.F.S.S., Sala I, sent. 79304, 03.11.97

"EL CANDIL S.A. c/ D.G.I."

(M.-D.-Ch.)

Impugnación de deuda. Actividad pesquera. Relación laboral.

El C.C.T. celebrado entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y la Sociedad de Patrones Pescadores, cuya obligatoriedad fue expresamente alegada y reconocida por la recurrente, despeja cualquier duda sobre la existencia de una verdadera relación de trabajo entre el patrón/armador y el tripulante/marinero. No empece a ello la forma en que se pacte o establezca la remuneración. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución por la que se formularon cargos sobre las sumas percibidas por los tripulantes, remunerados "a la parte del producido de la actividad pesquera".

C.F.S.S., Sala II, sent. 71505, 14.11.97

"SARACENO, JOSÉ c/ D.N.R.P."

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Depósito previo. Caución. Ofrecimiento genérico. Improcedencia.

No habiendo objetado el recurrente la validez de las leyes 18.820 y 21.864, ni argumentado hallarse comprendido en las situaciones de salvedad previstas para supuestos de modo excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación (cfr. fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62; 296:40 y 57; 307:1753), corresponde declarar desierto el recurso interpuesto, ya que la omisión del depósito previo no puede suplirse con un genérico ofrecimiento de caución.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79281, 31.10.97

"ASOCIACIÓN DE ESCUELAS LINCOLN c/ D.G.I."

(M.-Ch.-D.)

Depósito previo. Devolución. Intereses. Improcedencia.

Resulta improcedente la solicitud de intereses sobre suma depositada, por cuanto el organismo previsional no le incumbe la mora, ni ha privado a la empresa de capital alguno, correspondiendo el depósito a una exigencia legal impuesta en mérito al principal "solve et repete".

C.F.S.S., Sala II, aclar. sent. 71219, 07.10.97

"LA EDUCACIÓN ARGENTINA S.A. c/ D.G.I."

(E.-H.-F.)

Impugnación de deuda. Desistimiento. Facilidades de pago. Dec. 493/95. Depósito previo. Devolución.

El dec. 493/95 tuvo en mira posibilitar al contribuyente la cancelación de sus deudas en condiciones más favorables que las que pudieran resultar de un pago íntegro y al contado, siempre que desistiera en forma expresa y sin

condición alguna de la impugnación, así como de todo reclamo de reintegro o repetición. En consecuencia, al acogerse la recurrente al referido decreto demostró su intencionalidad de abonar su obligación a través de los mecanismos instituidos por el Poder Ejecutivo en el mismo, por lo que corresponde proceder a la devolución del depósito previo, por ser la naturaleza jurídica del mismo una condición de admisibilidad formal del recurso judicial, y no una mera forma de pago de la deuda.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46620, 30.12.97

"CENTRO UNIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO c/ D.G.I."

(F.-H.-E.)

Impugnación de deuda. Desistimiento. Facilidades de pago. Dec. 493/95. Depósito previo.

La intención del legislador al subordinar al dec. 493/95 el desistimiento de todo reclamo de reintegro o repetición, no puede ser entendida como una manera de favorecer el enriquecimiento del organismo recaudador en detrimento del contribuyente, ni favorecer la proliferación de causas judiciales tendientes a esclarecer este aspecto. Por el contrario, debe preservarse la norma de manera que se revele con su aplicación la finalidad perseguida - propiciar el cumplimiento de las obligaciones previsionales mediante un sistema financiado con reducción de los litigios en curso- y no cristalizar un abuso del derecho como el señalado. Por ello, no debe constituir el principio solve et repete un castigo a los contribuyentes que pretendan saldar su carga al sistema a través de los planes de facilidad de pago instaurados mediante el decreto citado, pues su función de protección es contra aquellos contribuyentes de mala fe que, a través de los medios legales, intenten dilatar su cumplimiento al sistema previsional.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46620, 30.12.97

"CENTRO UNIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO c/ D.G.I."

(F.-H.-E.)

Impugnación de deuda. Imposibilidad de pago. Fuerza mayor.

Si bien no existió una arbitrariedad del poder político al disponer el congelamiento y suspensión del reintegro de todos los depósitos a plazo fijo en todas las entidades bancarias (28/12/89), si provocó un perjuicio a la recurrente que se vio imposibilitada de abonar los aportes previsionales del mes de enero de 1990, con la consiguiente disminución de su derecho. En consecuencia, corresponde tener por válida la excepción de fuerza mayor esgrimida.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71219, 13.08.97

"LA EDUCACIÓN ARGENTINA S.A. c/ D.G.I."

(E.-H.-F.)

Impugnación de deuda. Pago por error. Arts. 724, 727, 729 y conc. Código Civil.

Debe tenerse por válido el pago que, por error, el recurrente efectuó utilizando una boleta de un tercero que tenía su mismo domicilio. El Código Civil prevé que el pago puede ser realizado por el propio deudor o un tercero, y el acreedor está obligado a aceptarlo (arts. 724, 727, 729 y conc.); disposiciones que cobran plena vigencia en el caso, dado que el organismo reconoció tanto el pago como la coincidencia del importe que configuraba la obligación del apelante. Es decir, el sistema previsional no se vio perjudicado en modo alguno; antes bien, fue desinteresado oportunamente y esa circunstancia fue comunicada por el deudor y constatada por el órgano administrativo. De allí pues, que fácilmente podría haber subsanado, con los medios a su alcance, dicha situación, y no someter al contribuyente (y en definitiva a la administración toda) al largo y dispendioso camino de la repetición de lo que se pagó de esa forma, generando al mismo tiempo una deuda en cabeza

de aquél - en realidad inexistente- sustancialmente incrementada punitivamente por los efectos de una mora, también inexistente.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71669, 30.12.97

"CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ D.G.I."

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Principio "solve et repete". Finalidad.

En las particulares circunstancias jurídicas que enmarcan la reforma del Estado, la desregulación y la emergencia financiera del ente que debe afrontar el pago de las prestaciones previsionales, reactualiza el aporte de la doctrina italiana respecto del principio "solve et repete". Mediante el mismo, se procura asegurar la efectiva recaudación e impedir dilaciones y jerarquizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales (cfr. Chiovenda, "Principios de Dcho. Procesal Civil, T. II, pág. 69 y las citas efectuadas en "La regla del Solve et repete" de Rodolfo Amaya; E.D., T. 40, pág. 713 y siguientes).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70341, 24.10.97

"ROMANO, JOSÉ FRANCISCO c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Impugnación de deuda. Principio "solve et repete". Constitucionalidad.

La aplicación del principio "solve et repete" no constituye una violación del art. 75, inc. 22 de la C.N., por cuanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su art. XXVIII se refiere al deber de obediencia de la ley, y el art. XXXVI establece el deber de pagar impuestos. Tampoco viola el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, dado que - en el caso- el actor ejerció el derecho a ser oído y articuló las defensas que estipuló convenientes. Además, el pago de las obligaciones requeridas está destinado a satisfacer prestaciones de carácter alimentario, es decir, ligadas a los derechos humanos de los titulares de beneficios. Apoya dicha tesitura lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A." del 21.12.89 (publicada en RDT, 1991, pág. 1705, con comentario de la Dra. Lucía Pawlowski), donde el Máximo Tribunal sostuvo que no se infringía la Convención Americana de Derechos Humanos y la ley 23.054.

C.F.S.S., Sala III, sent. 70341, 24.10.97

"ROMANO, JOSÉ FRANCISCO c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Impugnación de deuda. Principio "solve et repete". Excepción. Prueba.

La carga de la prueba radica en quien, por su conocimiento directo de los hechos, está en mejores condiciones para producirla y no puede pretenderse que la administración se encargue en todos los casos de demostrar la falencia de negativas o respuestas genéricas (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 17.05.95, "Alejandro Llauró e Hijo S.A."). En ese orden de ideas, debe concluirse que un certificado que contiene manifestaciones subjetivas y sin sustento fáctico - ya que no se acompañan pruebas tendientes a acreditar el ejercicio de acciones conducente al cobro de las sumas presuntamente adeudadas -, sumado al hecho de que no se adjunten balances de los últimos ejercicios ni se demuestre la existencia de causales ajenas a la empresa y no atribuibles a presuntas causas de administración imputables a ella, no constituyen prueba suficiente para acreditar la precariedad económica alegada.

C.F.S.S., Sala III, sent. 70341, 24.10.97

"ROMANO, JOSÉ FRANCISCO c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Impugnación de deuda. Reclamo entre organismos estatales. Ley 19.983.

Las prescripciones de la ley 19.983 que establecen pautas para resolver las reclamaciones pecuniarias entre organismos estatales, sometiendo a la potestad del Procurador del Tesoro de la Nación la decisión de tales controversias

cuando no medie acuerdo entre los organismos afectados (ver art. 1 del referido ordenamiento), no se han visto alteradas por la sanción de la ley 23.473, cuyo artículo 8 no excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer en procesos ordinarios o especiales contra los organismos de previsión social.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46348, 14.11.97

"HIDROELÉCTRICA NORPATAGÓNICA S.A. c/ D.G.I."

(H.-E.-F.)

Impugnación de deuda. Recursos. Ley 18.820. Acción de amparo. Improcedencia.

La no utilización del sistema recursivo específicamente previsto por la ley 18.820 para posibilitar la revisión judicial de los actos administrativos en ocasión de una determinación de deuda en materia de aportes y contribuciones de la seguridad social, obsta a la utilización de la vía excepcional del amparo.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45103, 26.09.97

"FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR INTEGRAL c/ D.G.I."

(D.-Ch.-M.)

Impugnación de deuda. Socios gerentes de S.R.L.

Corresponde revocar la resolución que desestimó la impugnación de deuda formulada contra el acta de inspección por la que se formuló un cargo por aportes omitidos respecto de los retiros efectuados por los socios gerentes de una S.R.L., si de las probanzas aportadas no puede inferirse que estos se encuentren en relación de dependencia, reciban órdenes o instrucciones, ni ejecuten decisiones de las que no hayan participado activa y preponderantemente; máxime si tampoco existen constancias que, amén de su carácter societario, hubieren cumplido en algún período o en alguna forma trabajos de los tipificados por el art. 27 de la L.C.T., única razón por la cual estarían ligados al plexo de obligaciones del art. 10 de la ley 18.037 (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 30.03.94, "Herdabol S.R.L.").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71494, 06.11.97

"SUELOS Y FUNDACIONES S.R.L. c/ I.N.P.S."

(E.-H.-F.)

Impugnación de deuda. Socios gerentes de S.R.L.

Para sostener que entre la S.R.L. y el socio gerente hay relación de empleo, sería necesario un vínculo de subordinación entre los gerentes respecto de la asamblea o reunión de socios. El gerente que integra el órgano directivo, como tal, no está subordinado, y no existiendo subordinación no hay una relación de trabajo en los términos de los arts. 21 y 22 de la L.C.T. (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.11.96, "La Estancia S.R.L.").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71494, 06.11.97

"SUELOS Y FUNDACIONES S.R.L. c/ I.N.P.S."

(E.-H.-F.)

HABERES PREVISIONALES

Movilidad

Denegación. Impugnación. Ley 24.463, art. 15. Caducidad. Ley 19.549, art. 25. Improcedencia.

Estableciendo la Constitución el derecho al cobro de jubilaciones móviles (art. 14 bis), la defensa de caducidad contemplada por el art. 25 de la ley 19.549 no resulta operativa cuando la decisión administrativa fue impug-

nada por la vía procesal establecida por el art. 15 de la ley 24.463 en tiempo oportuno; y mediante la defensa referida se pretende el cómputo del plazo desde la fecha de otorgamiento del beneficio jubilatorio y no, como corresponde, desde la fecha en que se emitió la resolución denegatoria del reajuste pretendido.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46544, 30.12.97

"DE JESÚS, JOAQUÍN c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Reconocimiento. Bonos de consolidación. Ley 23.982. Incumplimiento de la A.N.Se.S. Acción de amparo.

Para que el titular solicite que se suscriban y/o coloquen a su nombre los títulos Bocones en los términos a que aluden los arts. 10 y 11 de la ley 23.982, no resulta imperioso utilizar la vía de ejecución de sentencia, y si permisible optar por la acción amparista, ya que se trata de un afiliado previsional que logró el dictado de una sentencia ordenatoria de su beneficio (en el caso, en el año 1992), que no hace otra cosa que acudir a uno de los mecanismos de cancelación que la propia ley ha establecido como alternativa para el acreedor insatisfecho. (Del voto del Dr. Etala).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46030, 16.09.97

"SCOTTO, ENRIQUE c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Reconocimiento. Bonos de consolidación. Ley 23.982. Incumplimiento de la A.N.Se.S. Acción de amparo.

La fuente que torna exigible el derecho del titular que persigue - sobre la base de un crédito líquido consolidado en virtud de la ley 23.982- la entrega o colocación a su orden de bonos de consolidación, no tiene origen en una sentencia judicial - no obstante ésta haya existido- sino que el derecho tiene causa legal. Nada agrega ni resta a la cuestión la existencia previa de una litis. Quien fuera acreedor de un crédito líquido, exigible y consolidado, sin haber logrado tal reconocimiento en una instancia judicial previa, vería amparado su derecho, en caso de sucederse similar situación, a través de la vía del amparo (art. 43 C.N.); por tal motivo, no se advierte como razonable un distinto tratamiento. Las leyes 23.982 y 24.130 no contienen ninguna disposición que restrinja el reconocimiento expreso que realiza el Estado Nacional de las deudas que asume y manda consolidar. Ellas constituyen una precisa y terminante manda de obediencia a la autoridad competente para cumplir con su directiva. Por su naturaleza la ley debe ser cumplida estrictamente, siendo inadmisibles e intolerables en un régimen constitucional la utilización en sede administrativa de vías de hecho encaminadas a burlar la voluntad del legislador. En consecuencia, conforme lo dispuesto por la Constitución Nacional (art. 14 bis., 18, 43, 75 inc. 22), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8); Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 21 y 25); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2, párrafo 3, inc. a y concordantes), corresponde confirmar la decisión del "a quo" que hizo lugar a la acción de amparo, y ordenó a la A.N.Se.S. proceder a colocar a nombre del actor bonos de consolidación de la deuda pública, conforme el crédito oportunamente reconocido por sentencia judicial. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46030, 16.09.97

"SCOTTO, ENRIQUE c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Pago

Retroactivo. Dec. 1054/96. Vigencia.

Conforme lo normado por los arts. 1 y 2 del Decreto 1054/96, va de suyo que la aplicación de futuro de esas disposiciones (cualquiera sea el juicio de valor que merezcan) no compromete la cancelación de los créditos ya reconocidos hasta entonces por el organismo, con fecha cierta de pago.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66931, 16.10.97

"FRANCISCO, ANGÉLICA c/ A.N.Se.S"

(F.-L.-W.)

Retroactivo. Inexistencia de fondos. Deber del organismo administrativo.

Cabe suponer que, previo al dictado de la resolución que reconoció el derecho a la jubilación por invalidez, fijó la fecha inicial de pago, liquidó el haber judicial y el retroactivo acumulado, e hizo saber al titular en que fecha debía concurrir a la entidad bancaria, el organismo debió constatar la existencia de fondos suficientes para hacer frente al pago comprometido si es que, conforme aduce, su accionar se ajustó a las pautas de la ley 24.156; de modo que, la tardía percepción de la inexistencia de aquéllos, constituye una negligencia que no debe pesar en contra del beneficiario. Admitir lo contrario, lejos de afianzar el estado de derecho, sembraría de inseguridad jurídica la relación entre titulares de beneficios y el órgano de la administración responsable de la prestación.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66931, 16.10.97

"FRANCISCO, ANGÉLICA c/ A.N.Se.S"

(F.-L.-W.)

Retroactivo. Dec. 332/97. Inaplicabilidad.

Corresponde confirmar la resolución del "a quo" que declaró inaplicable el dec. 332/97 (que extendió la autorización concedida a la A.N.Se.S. por el Dec. 1054/96 a suspender los pagos) toda vez que el beneficio había sido otorgado antes de la entrada en vigencia de aquél. Ello así porque, conforme lo normado por el art. 18 de la ley 19.549, el acto administrativo regular del que nacen derechos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa, una vez que el mismo ha sido notificado al interesado. En consecuencia, lo decidido por el organismo en forma unilateral, importa una abierta violación al art. 14 bis de la C.N.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46514, 30.12.97

"MINA CASALLAS, MARÍA AMPARO c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Reajuste

Denegación. Demanda. Ley 24.463, art. 15. Acogimiento voluntario. Competencia.

Si el titular dedujo demanda contra la A.N.Se.S. a fin de impugnar la resolución que desestimó el reajuste de haberes solicitado, acogiéndose voluntariamente a lo normado por el art. 15 de la ley 24.463 y sin objetar la validez constitucional del art. 24 de ese cuerpo normativo (al cual refiere el fallo de la C.S.J.N. "Hussar, Otto" del 10/10/96), corresponde declarar la competencia del juez de primera instancia para continuar entendiendo en las actuaciones.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45095, 26.09.97

"ALBORNOZ DE VEGA, DORA ESTELA c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Caso "Chocobar".

En el período comprendido entre la fecha de otorgamiento del beneficio (en el caso, 05.03.93) y el 31 de marzo de 1995, por aplicación de la doctrina de la C.S.J.N. in re "Chocobar, Sixto Celestino" (27.12.96), y a tenor de lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24.463, la movilidad del haber se determinará en función de los criterios sustentados en dicho fallo.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79196, 01.10.97

"TUMINI, JOSÉ RAFAEL c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Caso "Chocobar".

A partir del 01 de abril de 1995, por aplicación de la doctrina de la C.S.J.N. in re "Chocobar, Sixto Celestino" (27.12.96), la movilidad del haber será la que surja por aplicación de lo establecido en el art. 7 de la ley 24.463 (cfr. considerando 49, fallo referido).

C.F.S.S., Sala I, sent. 79196, 01.10.97

"TUMINI, JOSÉ RAFAEL c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Caso "Chocobar".

Toda vez que a partir del 01 de abril de 1995 y hasta la actualidad subsiste una situación análoga a la puesta de resalto por el Alto Tribunal en el considerando 47 del fallo "Chocobar, Sixto Celestino" (27.12.96), corresponde ordenar la determinación de la movilidad a partir de esa fecha y hasta tanto el Parlamento cumpla con el mandato autoasignado en el art. 7, apartado 2, de la ley 24.463, conforme las pautas fijadas en el considerando 48 del fallo referido.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79196, 01.10.97

"TUMINI, JOSÉ RAFAEL c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16. Cuestión de puro derecho.

Corresponde confirmar la decisión que declara la cuestión de puro derecho, ya que el apelante al sostener que con ello se impediría a las partes hacer valer su derecho y sustanciar las pruebas ofrecidas en el expediente administrativo, no advierte que aquellas corren agregadas por cuerda por haber sido remitidas por su propia representada. En consecuencia, los agravios vertidos devienen abstractos y no bastan para motivar la revocatoria de lo actuado. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66943, 16.10.97

"HOFFMANN, ROBERTO c/ A.N.Se.S"

(L.-W.-F.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16. Cuestión de puro derecho.

La excepción contemplada por el art. 16 de la ley 24.463 permite al ente previsional plantear la limitación de recursos del Régimen de Reparto, siendo éste un aspecto que necesariamente, ha de dilucidarse en la etapa de conocimiento, toda vez que constituye un elemento imprescindible para evaluar la validez constitucional de las normas atacada por el actor. Ello permite concluir que la excepción de marras se trata de una defensa en el cual el demandado alega una circunstancia extintiva relacionada con el fundamento de la pretensión del actor, y que en la medida en que ella sea probada, quedaría en claro la validez jurídica de las normas legales atacadas y consiguientemente, la inexistencia del derecho en el cual el demandante fundamenta su pretensión. En consecuencia, corresponde revocar el auto que declara la cuestión de puro derecho, y declarar la procedencia de la defensa esgrimida por el A.N.Se.S. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66943, 16.10.97

"HOFFMANN, ROBERTO c/ A.N.Se.S"

(L.-W.-F.)

Reducción

Acto unilateral de la Administración. Medida cautelar. Procedencia.

Si bien en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria - lo que trae aparejado en principio, que los recursos judiciales mediante los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecución de tales actos -, es posible admitir que en determinados casos y cumplidos ciertos requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentre un adecuado equilibrio en la suspensión cautelar de dichos actos administrativos, como en el caso en que el derecho en debate es de naturaleza alimentaria (cfr. Cám.Cont.Adm.Fed., Sala V, "Craviotto Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio De Justicia de la Nación -, sent. del 20.11.96).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45175, 30.09.97
"LEPEZ, ADELA DEL ROSARIO c/ A.N.Se.S."
(M.-D.-Ch.)

Porcentaje. Limitación.

La reducción de los haberes previsionales encuentra sustento en lo dispuesto por el art. 46, inc. d) de la ley 18.037, precepto que encuentra su correlato en el art. 34, inc. d), segunda parte, de la ley 18.038. Frente al imperativo legal, la resolución que se dicte en la órbita de la administración no puede exceder la limitación o margen de descuento (20% del haber mensual de la prestación), so pena de ser violatoria de los preceptos constitucionales que hacen a la seguridad social y al fin perseguido; máxime si no se ha demostrado dolo o intencionalidad del particular que percibió en forma incorrecta haberes provenientes del régimen autónomo y dependiente.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71656, 30.12.97
"GIL, EZEQUIEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Porcentaje. Limitación.

El titular irregular de prestaciones provenientes del régimen autónomo y dependiente no tiene derecho a la percepción de ambos, pero sí a que su haber se reajuste en función de los servicios y aportes realizados. Una vez determinado, será sobre ese importe que se efectivizará el descuento de ley (cfr. art. 46, inc. d) de la ley 18.037 y art. 34, inc. d, segunda parte, de la ley 18.038) mientras subsista la deuda.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71656, 30.12.97
"GIL, EZEQUIEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Retroactivo

Dec. 332/97. Conjeturas. Medidas cautelares. Improcedencia.

Las manifestaciones que efectúa en su libelo la apelante, en cuanto a que en el futuro podría tener dificultades en cobrar el retroactivo, ya que en la actualidad no se le estarían abonando a los beneficiarios las sumas adeudadas en concepto de retroactividades en virtud del Dto. 332/97, es meramente conjetural y no puede ser interpretado como peligro en la demora requerido por el art. 230 del C.P.C.C. a efectos de la procedencia de la medida cautelar.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45422, 22.12.97

"BASSO, ESTELA MARÍA CRISTINA c/ A.N.Se.S."
(D.-Ch.-D.)

JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA

Ley 18.037, art. 65, última parte. Limitación. Fuerzas Armadas y de Seguridad.

No es posible efectuar una interpretación amplia de la disposición contemplada en el art. 65, última parte, de la ley 18.037, por cuanto aparece clara la intención del legislador de proteger en situaciones excepcionales, la contingencia de vejez mediante la acreditación de requisitos mínimos y un beneficio también reducido, en relación con la jubilación ordinaria, en cuyo supuesto aparece razonable la limitación impuesta legalmente para su goce, independientemente de que el organismo otorgante de la prestación que perciben los interesados, esté o no comprendido en el régimen de reciprocidad (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 14.09.94, "Vitale, Jorge Héctor"). Al respecto, la doctrina ha señalado que el artículo en cuestión se refiere, fundamentalmente, a los retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a otras prestaciones nacionales, provinciales y municipales ajenas al sistema de reciprocidad jubilatoria del Dec. Ley 9316/46, es decir, a aquellos que en principio podrían dar origen a una acumulación de beneficios por no regir, a su respecto, lo dispuesto en materia de prestación única -art. 23 ley 14.370- (cfr. Brito Peret y Jaime, "Régimen de Previsión Social", pág. 147). (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71206, 07.08.97

"CAMBLOR, FELIX c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Ley 18.037, art. 65, última parte. Limitación. Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El art. 65 de la ley 18.037 establece, sin excepción alguna, la incompatibilidad absoluta entre el goce de la prestación por edad avanzada y la percepción de cualquier otro beneficio nacional, provincial o municipal (cfr. Brito Peret y Jaime, "Régimen de Previsión Social. Ley 18.037", pág. 286); y los beneficios que se otorgan en el ámbito castrense no dejan de ser prestaciones de carácter y/o naturaleza previsional, otorgadas en razón del derecho a un estado de pasividad (retiro militar) que puede ser voluntario o forzado, pero que siempre nace como contrapartida de una efectiva prestación de servicios. (Del voto del Dr. Etala).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71206, 07.08.97

"CAMBLOR, FELIX c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Ley 18.037, art. 65, última parte. Limitación. Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Nuestro sistema positivo tiene como objetivo no dejar en desamparo a ciertos sujetos ante la contingencia de vejez, y el titular de un beneficio militar no puede reputarse desamparado. Al respecto, y puesta en tela de juicio la validez constitucional del art. 65 de la ley 18.037, la C.S.J.N. sostuvo que la incompatibilidad en él establecida no es irrazonable ni consagra una desigualdad contraria a la ley suprema, en la medida que la jubilación por edad avanzada contempla una situación excepcional, como lo es la presentada por personas que no pueden computar los años de servicios requeridos para obtener alguna prestación ordinaria (sent. del 17.06.82, "Franquelo, Francisco"). (Del voto del Dr. Etala).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71206, 07.08.97

"CAMBLOR, FELIX c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

JUBILACIÓN POR INVALIDEZ

Carácter transitorio. Revocación. Facultad del organismo administrativo.

Sin poner en duda el carácter transitorio de la jubilación por invalidez, ni tampoco la facultad que le compete al organismo de revocarla cuando se acredita la capacitación laboral del beneficiario, la naturaleza tuitiva del derecho de la seguridad social exige extremar la prudencia en la interpretación de la ley a fin de que no se desnaturalice la letra y el espíritu de la norma.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46251, 30.10.97
"PAPADOPULOS, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S."
(E.-F.-H.)

Cese laboral. Ley 18.037, art. 43. Vigencia. Dec. 2433/93. Ilegalidad.

El Dec. 2433/93 - reglamentario del art. 156 de la ley 24.241 - al puntualizar que los supuestos contemplados en los párrafos 2 y 3 del art. 43 de la ley 18.037 serían de aplicación hasta la entrada en vigencia del Libro I de la referida ley 24.241 (15.07.94), incurre en un abuso reglamentario y corresponde decretar su ilegalidad por desnaturalizar la voluntad legislativa, constituyéndose en un valladar al reconocimiento de derechos previsionales acordados por la ley. En consecuencia, producido el cese laboral del titular vigente la ley 18.037 y consolidada su incapacidad dentro de los cinco años siguientes, tiene derecho al goce de la jubilación por invalidez y corresponde su otorgamiento, ya que admitir la tesis contraria importaría avasallar un derecho adquirido.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71602, 30.12.97
"VITELLI, MARGARITA ALICIA c/ A.N.Se.S."
(H.-F.-E.)

Competencia. Ley 24.241, art. 49. Ley 24.463.

A partir de la sanción de la ley 24.463, el legislador introdujo reformas sustanciales en materia de competencia previsional, estableciendo un procedimiento de impugnación de las resoluciones emanadas de la A.N.Se.S. por intermedio de demandas de conocimiento pleno - art. 15 de la ley referida - ante los Juzgados de Primera Instancia de la Seguridad Social. No obstante ello, aquella reforma no ha alcanzado al régimen de procedimiento de los retiros por invalidez, que cuenta con un proceso específico en materia de impugnaciones ante la C.F.S.S., conforme lo dispuesto por el art. 49 de la ley 24.241.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46251, 30.10.97
"PAPADOPULOS, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S."
(E.-F.-H.)

Decisión judicial. Cosa juzgada. Impugnación. Comisión Médica Central. Improcedencia.

Resulta improcedente que un órgano de carácter administrativo realice observaciones o impugne decisiones del Tribunal Judicial que obra como instancia revisora, so pena de usurpar funciones que le son ajenas e, incluso, incumplir las decisiones emitidas por los magistrados judiciales en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional. En consecuencia, resulta notoria la improcedencia de la observación efectuada por la Comisión Médica Central respecto de la decisión adoptada por la C.F.S.S., máxime cuando el decisorio goza de la eficacia y virtualidad de la cosa juzgada judicial, que es uno de los

pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración, ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, forman parte del orden público con jerarquía superior (cfr. C.S.J.N., sent. del 12.04.88, "Rocca, Licio"). (Del voto del Dr. Etala).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46362, 14.11.97

"BERMÚDEZ, OSVALDO HÉCTOR c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Decisión judicial. Cosa juzgada. Impugnación. Comisión Médica Central. Improcedencia.

Por mandato legal (ver pto. 2, art. 49, ley 24.241), se atribuye a la Comisión Médica Central la realización de un acto complejo, necesario para la efectivización de la sentencia recaída. Dicho acto complejo se compone de la previa participación del referido organismo para determinar el tratamiento de rehabilitación psicofísica y de capacitación laboral que deberá seguir el afiliado y, recién entonces, de la intervención del organismo correspondiente (A.N.Se.S. o A.F.J.P., según se trate del régimen de capitalización o de reparto) para cumplimentar el resto del acto que concede el beneficio. En tales circunstancias, el planteo efectuado por la Comisión Médica Central respecto de la decisión adoptada por el Tribunal, sin causa que lo justifique ni elementos que permitan variar el criterio judicial, a la par de resultar temerario, linda con la conducta que contemplan los arts. 239 y 249 del Código Penal. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46362, 14.11.97

"BERMÚDEZ, OSVALDO HÉCTOR c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Extinción o suspensión del beneficio. Medida cautelar. Procedencia.

El art. 232 del C.P.C.C. ha previsto el derecho a peticionar medidas urgentes en sede judicial a aquellos que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho hubiesen podido sufrir un perjuicio inminente o irreparable. Por ello, cuando lo que se pretende es la restitución del beneficio de jubilación por invalidez que le fuera suspendido al titular, siendo éste un derecho de carácter alimentario, debe considerarse configurado el peligro en la demora a que se refiere el art. 230 del C.P.C.C.; sin perjuicio de continuar el trámite de la causa.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46251, 30.10.97

"PAPADOPULOS, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

Incapacidad. Desventaja laboral. Finalidad de la ley.

Si bien es cierto que quien es portador de una incapacidad se encuentra en desventaja en el mercado de trabajo respecto de quienes están sanos, ello por sí solo no es suficiente para acceder al beneficio por invalidez. De otro modo, si cada vez que existiera una incapacidad se otorgara el beneficio, en la práctica se estaría dejando de lado la finalidad de la ley que tiende a la protección de quienes se encuentran en la imposibilidad de obtener trabajo debido a su estado de salud (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 30.4.90, "Billares, Celia").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71411, 06.10.97

"CÁCERES, ASTERIO BENJAMÍN c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Incapacidad inferior al mínimo. Ley 24.241, art. 48. inc. a). Factores complementarios. Dec. 1290/94.

Corresponde hacer lugar al reclamo cuando, si bien la peticionante no acredita el 66% o más de incapacidad - lo que permitiría calificarla sin más como "total" en los términos del art. 48, inc. a) de la ley 24.241 - nada impide atribuirle ese carácter si la misma es así definida por el Cuerpo Médico Forense, en lo que constituye una adjetivación acorde a las constancias del caso. Lo afirmado encuentra su sustento en el Dec. 1290/94, según el cual "el concepto de invalidez excede los límites de la incapacidad física, psíquica o psicofísica, puesto que a ésta se le agregan otros factores como la edad, el nivel de preparación y la incidencia de la tarea específica" que, en su conjunto, reciben el nombre de "factores complementarios" (en el caso, nivel educativo y posibilidad para realizar tareas habituales); a lo que cabe adunar, en concepto de "factor compensador", lo que se juzgue corresponda atribuir a la impresión de deterioro general que para la inserción laboral presenta la accionante (en el caso, amputación bajo rodilla de pierna izquierda y debilidad mental leve). Dicha solución se compadece con el fin protectorio del régimen previsional en que se enmarca el derecho reclamado, y de no otorgarse el beneficio pretendido, se vulneraría el espíritu tutelar que debe animar la aplicación de disposiciones como la mencionada respecto de quien reclama, a la vez que al obligarla a continuar en actividad para procurarse el sustento propio en condiciones inadecuadas para ello, se la expondría a la realización de esfuerzos inapropiados y al riesgo de un mayor deterioro, en manifiesta contradicción con el mandato contenido en el Preámbulo de la Constitución Nacional de promover al bienestar general. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70352, 06.11.97

"CARMONA DELEON, LINDA c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Incapacidad inferior al mínimo. Ley 24.241, art. 48. inc. a).

Corresponde confirmar lo resuelto por la Comisión Médica Central que denegó el beneficio de retiro por invalidez por no reunir la peticionante las condiciones exigidas por el art. 48, inc. a) de la ley 24.241, si el dictamen del Cuerpo Médico Forense le asigna a la recurrente un porcentaje inferior al mínimo establecido por la norma referida (en el caso, 55%) y las argumentaciones vertidas por ésta carecen de peso para determinar variaciones a las conclusiones a las que llegan los facultativos actuantes. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70352, 06.11.97

"CARMONA DELEON, LINDA c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Incapacidad posterior al cese. Ley 18.037, art. 43.

Tanto la doctrina como la legislación y la jurisprudencia han coincidido en que el derecho a las jubilaciones han de regirse por la ley vigente a la fecha de la desvinculación laboral, salvo que existiera una disposición expresa en contrario. Por ello, si el peticionante cesó durante la vigencia de la ley 18.037 y la incapacidad se produjo dentro de los cinco años posteriores, aunque ya rigiera el sistema previsional instituido por la ley 24.241, corresponde confirmar la sentencia por la que se le acordó el beneficio por invalidez con fundamento en la normativa del art. 43 de la referida ley 18.037. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70276, 07.10.97

"VERGARA, JULIO RAMÓN c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Incapacidad posterior al cese. Ley 18.037, arts. 27 y 43, 2do. párrafo. Ley 24.241, arts. 16 y 156.

Corresponde revocar la sentencia que otorgó el beneficio de jubilación por invalidez a quien, habiendo cesado bajo la vigencia de la ley 18.037, se incapacitó dentro de los cinco años posteriores, pero bajo la vigencia de la ley 24.241. Ello así porque la aplicación armónica de lo dispuesto por los arts. 27 y 43, 2do. párrafo, de la ley 18.037, conducen a concluir que al momento de producirse el cese laboral no nació un derecho adquirido, sino tan sólo un derecho en expectativa, supeditado a la vigencia de ese régimen. El referido art. 27 condiciona el acceso a la jubilación en lo sustancial, a la legislación vigente a la fecha de cesación en el servicio "salvo disposición expresa en contrario" y, en el caso, las disposiciones en contrario son, por un lado, el art. 16 de la ley 24.241, que derogó la ley 18.037, sus complementarias y modificatorias, y por el otro, el art. 156 de la misma ley, que declaró supletoriamente aplicables las disposiciones de aquélla que no se opongan ni sean incompatibles con la ley fundacional del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, habida cuenta que dentro de éste, para ser acreedor al retiro voluntario por invalidez, se requiere estar prestando servicios al momento de incapacitarse y ser aportante regular o irregular con derecho, de acuerdo a los arts. 27, 97 y conc. de la ley citada. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70276, 07.10.97

"VERGARA, JULIO RAMÓN c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Persona humana. Porcentaje de incapacidad. Ley 24.241, art. 48.

La persona humana es un todo integral en el que la sana crítica debe contemplar no sólo la simple suma aritmética de disminuciones sectoriales sino la totalidad de la individualidad del sujeto, entendida esta como un conjunto de valores físicos y espirituales que no pueden ser desvinculados de la gama de factores que sociológicamente incide en ellos (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 09.10.95, "Montero Rodríguez, Marina c/ La Buenos Aires New York Life Seguros de Vida S.A. y otros"). Por ello, ante la apremiante situación del peticionante (en el caso, enfermo terminal de cáncer), cuyo cuadro clínico aparece suficientemente demostrado en autos, corresponde tener por acreditada la incapacidad con jerarquía invalidante a los fines previsionales en los términos del art. 48 de la ley 24.241.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71507, 14.11.97

"PEGASANO, AGUSTÍN FEDERICO c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Revocación del beneficio. Apelación. Rechazo. Accionar abusivo de la C.M.C.

El accionar de la Comisión Médica Central que rechaza el recurso intentado excede en demasía las facultades que la ley 24.241 (art. 49, inc. 4) le confiere, toda vez que corresponde a los jueces efectuar juicios respecto a la admisibilidad, tanto formal como sustancial, de las apelaciones interpuestas por el afiliado, debiendo el organismo limitarse a receptor la apelación y elevar las actuaciones a la Cámara dentro del plazo de 48 hs. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70330, 23.10.97

"GENOVESE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S."

(W.-L.-F.)

Revocación del beneficio. Demanda. Ley 24.463, art. 15. Procedencia.

No se advierte perjuicio alguno para los intereses de la A.N.Se.S. en el hecho de que la causa continúe tramitando ante el juez "a quo" (en el caso, el actor ante la revocación del beneficio de jubilación por invalidez oportunamente acordado, inició demanda conforme los lineamientos del art. 15 de la ley 24.463, y la demandada opuso la excepción de incompetencia, alegando que la normativa aplicable es la que surge de los arts. 48 y 49 de la ley 24.241)

toda vez que, como parte del proceso, podrá articular todas las pretensiones de que intente valerse, interviniendo en la producción de la prueba pericial solicitada por el actor, con plena garantía del debido proceso para ambas partes, lo que permitirá arribar al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva con el fin de afianzar el valor justicia. (Del dictamen Fiscal a que adhiera la Sala).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70330, 23.10.97

"GENOVESE, HUMBERTO c/ A.N.Se.S."

(W.-L.-F.)

Suspensión del beneficio. Comisiones médicas. Ley 24.241, arts. 48 y sig. Dec. 55/94, art. 1, pto. 4). Medida cautelar. Procedencia.

A partir de la vigencia del Libro I de la ley 24.241 -15.07.94- son de aplicación sus disposiciones (arts. 48 y sig. y dec. 55/94, art. 1, punto 4) que han reemplazado el sistema de los dictámenes de los profesionales médicos dependientes del propio organismo, en base a los cuales se pronunciaba el Ente otorgando, denegando o extinguiendo prestaciones de invalidez (arts. 33, 35, 36 y 37 ley 18.037 y arts. 20, 21, 23 y 24 ley 18.038). En consecuencia, cuando la A.N.Se.S. considera que el titular de un beneficio de invalidez está rehabilitado, debe recurrir al procedimiento regulado por la ley citada para, previo a disponer la suspensión o extinción del beneficio, requerir la intervención de la Comisión Médica pertinente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.03.96, "Tucillo, Dino"). Por ello, surgiendo de autos que la resolución extinguiendo el beneficio fue dictada sin habersele dado previa participación alguna al recurrente, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, previa caución juratoria, ordenar a la A.N.Se.S. que restablezca en el goce del beneficio al titular.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45235, 30.10.97

"VELÁZQUEZ, JUAN BAUTISTA c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Suspensión del beneficio. Deber del organismo administrativo. Acción de amparo. Procedencia.

Lo dispuesto por el art. 18 de la C.N. y las directivas de la ley 19.549, vedan toda posibilidad de que la administración incurra en un accionar lesivo o ponga en ejecución un acto estando pendiente algún otro recurso administrativo, lo que obliga a proyectar la naturaleza tuitiva de las normas previsionales en beneficio de quienes se encuentran comprendidos en una resolución que afecta sus derechos jubilatorios que sólo puede resultar operativa una vez firme y/o consentida por el interesado (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 15.11.95, "Zandorín, Eduardo Francisco"). En virtud de ello, y encontrándose configurados los requisitos de la verosimilitud del derecho - ya que existió una resolución administrativa anterior a favor del peticionante que le concedió el beneficio de jubilación por invalidez- y el peligro en la demora - ya que la suspensión del beneficio puede derivar en serio riesgo para la subsistencia del afiliado -, corresponde acoger favorablemente la acción de amparo intentada y ordenar a la A.N.Se.S. que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada, continúe con el pago de prestación previsional suspendida y restituya al titular el servicio de la Obra Social que le fuera suprimida.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46547, 30.12.97

"FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

JUBILACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO

Otorgamiento condicional. Suspensión. Acción de amparo. Improcedencia.

Sí el retiro voluntario (en el caso, conforme los términos de la ley 4.785 de la Pcia. de Catamarca) fue concedido en forma condicional y sujeto a revocación o extinción, de comprobarse que los servicios no concordaban con los registros obrantes en la institución, al suspenderse la prestación no puede decirse que la A.N.Se.S. obró arbitrariamente, toda vez que el otorgamiento fue a título precario. Sobre el particular, el propio legislador estableció que el acto administrativo podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario (art. 18, 2do. párrafo, ley 19.549). En consecuencia, corresponde confirmar la resolución del juez "a quo" que rechazó la acción de amparo iniciada, ya que nada afectaba la posibilidad de cuestionar lo decidido en sede administrativa siguiendo los lineamientos de las leyes rituales (24.463 y 24.655), lo que permitía un proceso amplio de ofrecimiento de prueba tendiente a corroborar que los servicios que en su oportunidad fueron denunciados, y en base a los cuales se les había concedido la prestación, sí habían existido.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46160, 13.10.97

"HERRERA, BLANCA VICENTA Y OTROS c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

LEYES PREVISIONALES

Interpretación. Derechos adquiridos. Alcance.

El principio de que no existe derecho adquirido frente a la mutación de la legislación previsional alcanza sólo a las personas que aún se encuentran en actividad, pero no a los que ya han cesado en la prestación de sus servicios al momento de entrar en vigencia una nueva ley.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71595, 30.12.97

"LOZANO, NELIDA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES

Haberes previsionales. Reducción. Ley 24.018, art. 34. Dec. 78/94.

El dec. 78/94 que deroga las disposiciones de la ley 24.018, no afecta de modo alguno los derechos adquiridos al amparo de una ley anterior, sino que, por el contrario, deja sin efecto la disposición excepcional y transitoria que reducía el haber de pasividad por el lapso de cinco años (art. 34 ley citada). En consecuencia, habiendo transcurrido el tiempo estipulado, se debe ordenar a la A.N.Se.S. que abone nuevamente al titular el importe previsional que le corresponda de conformidad con la ley vigente a la fecha del cese, y en base a la cual le fuera otorgado el beneficio.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71513, 27.11.97

"DICIO, HÉCTOR GABINO c/ A.N.Se.S."

(H.-F.-E.)

Haberes previsionales. Ley 18.464. Derechos adquiridos.

Si el beneficio de jubilación original fue otorgado bajo el amparo de la ley 18.464, que fijaba un haber de pasividad equivalente al 85% del de actividad y sin topes máximos, dicha normativa debe ser respetada por la Administración Pública, toda vez que ni el legislador ni el juez podrían en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso

el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawetz, Alberto). Admitir la tesis contraria llevaría a una confiscación del haber de pasividad en un grado que sería lesivo de derechos adquiridos.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45887, 11.08.97

"ARRASCAETA DE FELIX, ALBERTO c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Haberes previsionales. Reducción. Ley 24.018, art. 34. Restablecimiento. Acción de amparo. Procedencia.

No puede hablarse de caducidad de la acción amparista cuando el titular sólo pudo interponerla al advertir que, vencido el lapso de cinco años de baja virtual de su haber de pasividad - conforme lo impuesto por el art. 34 de la ley 24.018- no iba a serle restablecida su prestación primitiva y, ante tal situación, interpuso la acción de amparo frente a la omisión administrativa que se prolongó en el tiempo.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45887, 11.08.97

"ARRASCAETA DE FELIX, ALBERTO c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA

Beneficio jubilatorio. Edad. Fecha de cese. Norma aplicable. Decretos 1645/68 y 82/94.

El Dec. 82/94 se refiere a la fecha en la cual comienza a aplicarse la ley 24.241 en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, esto es, a partir del 01 de marzo de 1994. Por consiguiente, todos los afiliados que cesaren en la actividad antes de esa fecha, caerán bajo el régimen del Dec. 1645/78 para el cómputo de los años de edad y de servicios requeridos para la obtención de la jubilación. En consecuencia, habiendo cesado la peticionante, en el caso, el 15.06.93, le corresponde la aplicación del referido Dec. 1645/78, porque era la norma vigente a esa fecha. El criterio contrario llevaría a una inseguridad jurídica contraria a principios basales del derecho y jurisprudencia que, en materia de Seguridad Social, resultaron y resultan indiscutibles, lo cual se traduciría en infinidad de nuevas controversias de difícil dilucidación. (Del dictamen fiscal al que adhiere la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70286, 08.10.97

"GÓMEZ, MARÍA ANA c/ I.M.P.S."

(W.-L.-F.)

Beneficio jubilatorio. Edad. Fecha de cese. Norma aplicable. Decretos 1645/68 y 82/94.

Corresponde confirmar la resolución que denegó el beneficio de jubilación ordinaria por considerar no acreditada por quien demanda la edad exigida por el art. 37 del Dec. 1645/68, modificado por el art. 158, inc. 2) de la ley 24.241, aplicable al ámbito del ex I.M.P.S. por el art. 4 del Dec. 82/94. Ello así porque de la aplicación armónica de lo dispuesto por los arts. 18 y 37 del Dec. citado en primer término, se desprende que al cese laboral (en el caso, producido el 15.06.93) no se consolidó en el patrimonio de quien acciona el derecho a acceder al beneficio al cumplir los 55 años de edad. La analogía de aquellas disposiciones con lo dispuesto por los arts. 27 y 43, 2do. párrafo, de la ley 18.037 - con excepción de que la edad debía alcanzarse dentro de los dos años del cese y no de los cinco, como acontecía en el régimen nacional -, conducen a concluir que al momento de producirse el cese laboral no

nació un derecho adquirido, sino tan solo un derecho en expectativa, ya que el referido art. 18 condiciona el acceso a la jubilación, en lo sustancial, a la legislación vigente a la fecha de cesación en el servicio "salvo disposición expresa en contrario" - tal como acontece con el art. 27 de la ley 18.037- y, en el caso, la disposición en contrario es el inc. 2 del art. 158 de la ley 24.241 que, sin distinción alguna, elevó en dos los años de los trabajadores dependientes para acceder a la jubilación a partir del 01.02.94. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70286, 08.10.97

"GÓMEZ, MARÍA ANA c/ I.M.P.S."

(W.-L.-F.)

Cese. Beneficio jubilatorio. Ley aplicable. Decretos 1645/78 y 82/94.

Es un principio indiscutible que el derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de cesación de servicios (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.10.92, "Gionot de Pereyra, Blanca"; sent. del 27.12.96, "Chocobar, Sixto Celestino"; Brito Peret y Jaime, "Régimen de Previsión Social - Ley 18.037", pág. 128/9); y ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatarse o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que el principio de no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawetz, Alberto"; sent. del 12.09.96, "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Pcia. de Bs. Aires"). El criterio opuesto conllevaría - como lo señala el Dr. Rodríguez Fox en el dictamen n° 8118 del 21.05.97, "Kohan, Jaime Alberto"- "a una inseguridad jurídica contraria a principios basales del derecho y jurisprudencia que en materia de Seguridad Social resultaron y resultan indiscutibles, lo cual se traduciría en infinidad de nuevas controversias de difícil dilucidación". En consecuencia, habiendo la titular cesado en sus labores con anterioridad al 01.03.94 (fecha a partir de la cual rigen las disposiciones de la ley 24.241 en el ámbito municipal conforme el Dec. 82/94), corresponde aplicar a su respecto las previsiones del Dec. 1645/78.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71416, 16.10.97

"ALBELO, HAYDEE PETRONA c/ I.M.P.S."

(E.-F.-H.)

Haberes previsionales. Reajuste. Categoría laboral. Equivalencia.

Habiendo desaparecido la categoría profesional alcanzada al momento del cese, para proceder al reajuste del haber previsional corresponde aplicar la doctrina de la C.S.J.N. en los casos "Benzi, Rolando" (sent. del 13.08.85) y "Bisso, Victorio" (sent. del 10.12.85) donde se sostuvo que, a fin de otorgar una equivalente a la detentada al cese, correspondía ordenar al Instituto considerar la relación porcentual que el contenido económico de la categoría según la cual se liquidó el beneficio guardaba con respecto a la más alta del escalafón vigente a la época de la desvinculación laboral, y encuadrar el beneficio dentro de aquélla de tal suerte que mantenga actualmente la misma relación porcentual obtenida de la operación indicada.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71262, 21.08.97

"DEL VALLE ANDRADA, NEMESIO ISIDRO c/ I.M.P.S."

(F.-E.-H.)

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Caja otorgante

Unificación del sistema.

El principio de la caja otorgante (ley 18.037, art. 80 y ley 18.038, art. 16, inc. b) ha perdido, en la actualidad, gran parte de su utilidad práctica, pues la unificación del Sistema de Seguridad Social ha llevado a que las Cajas Nacionales de Previsión desaparezcan como entes jurídicos independientes, lo que torna improcedente todo conflicto destinado a determinar cual debe ser la caja otorgante de la prestación (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 11.05.92, "Sala de Brescio, Angela"; Sala II, sent. del 22.06.94, "Verde de Domínguez, Irene"). Como bien lo ha señalado el Dr. Laclau (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 28.03.91, "Pellegrini, María Concepción"), el mencionado principio debe ceder ante toda situación que lleve a una irreversible desprotección previsional del interesado, sin haber mediado culpa o dolo por parte de éste.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71222, 13.08.97

"MANONI, NÉLIDA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Unificación del sistema. Ley 18.037, art. 80.

El art. 80 de la ley 18.037 ha perdido, en la actualidad, gran parte de su utilidad a partir de la consolidación de un sistema único de seguridad social, en el que las cajas nacionales desaparecieron como entes jurídicos independientes. Por ello, la cuestión planteada respecto de la competencia para entender en el pedido de jubilación ordinaria deviene abstracta (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 11.05.92, "Sala de Brescio, Angela"); correspondiendo devolver las actuaciones al organismo de origen a fin de que se dicte una nueva resolución, con prescindencia de la aplicación del referido art. 80, evaluando las pruebas acompañadas a fin de acreditar los servicios invocados por la peticionante.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71486, 06.11.97

"PÉREZ, MARGARITA c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

Fondo compensador

Competencia. Ley 24.655.

Si bien la jurisprudencia ha señalado que la C.N.A.S.S (hoy C.F.S.S.) carece de competencia originaria para sustanciar y decidir cuestiones ajenas al diseño competencial prevista por el art. 8 de la ley 23.473, lo que ha llevado a estimar que la justicia laboral sería competente para entender en reclamos deducidos contra un Fondo Compensador, lo cierto es que tal doctrina no puede mantenerse tras la sanción de la ley 24.655 de creación de los Juzgados de Primera Instancia de la Seguridad Social, a los que se debe declarar competente para entender en dichas actuaciones.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46592, 30.12.97

"VALASSINA, NÉSTOR ARMANDO c/ FONDO COMPENSADOR PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TELEFÓNICOS"

(H.-E.-F.)

Solicitud del beneficio

Negativa del organismo. Acción de amparo. Procedencia.

Es criterio reiterado por nuestro Máximo Tribunal que en materia previsional, sólo puede llegarse al desconocimiento de derechos con suma cautela pues lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad (cfr. "Ballante María"), habida cuenta que "... la seguridad social tiene como objetivo fundamental proteger integralmente a la familia y evitar el desamparo de quie-

nes, por su edad y modo de vida, no están en condiciones de proveer a su sustento" ("Liyán, María del Carmen"). Igualmente ha sostenido que "... los organismos previsionales no son partes contrarias, sino que deben brindar a los administrados el asesoramiento necesario para que obtengan los beneficios previsionales reconocidos por las leyes (cfr. sent. del 27.11.90, "Figueroa Manuel R. c/ Caja de Jub., Subs. y Pens. del Pers. del Bco. Prov. de Bs. As.). Las precedentes consideraciones llevan a concluir que es procedente la vía del amparo frente a la negativa del organismo a recibir una solicitud de beneficio.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45430, 22.12.97

"FERREYRA, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

Doctrina de los actos propios.

Resulta contrario a la doctrina de los actos propios -a la cual la jurisprudencia atribuyó valor operativo- (cfr. C.S.J.N., sent. del 19.08.93 "Bidone, Guillermo c/ Estado Nacional"; S.C.J.B.A., sent. del 23.12.85, "Castilla de Bertres c/ Moyano, José; S.C. Mendoza, sent. del 05.05.90, "Arrigoni, Raúl c/ Dirección General de Escuelas") y al principio consagrado en el art. 929 del Cód. Civil, que la recurrente, alegando su propia torpeza, pretenda hacer valer una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (En el caso, la peticionante solicitó la jubilación ordinaria declarando una fecha de inicio de actividades y, posteriormente, alegando error y falta de asesoramiento adecuado, formuló una nueva solicitud denunciando haber realizado otras tareas que omitió declararlas con anterioridad).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71326, 12.09.97

"WAIMAN, BÁRBARA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos"

(E.-F.-H.)

PENSIÓN

Carácter alimentario. Medida cautelar. Procedencia.

Dado el carácter alimentario que posee el beneficio de pensión, la falta del mismo puede llegar a insolventar o menguar de tal manera el patrimonio de la actora que se tornaría ilusorio el derecho a los alimentos. Por ello debe actuarse con suma prudencia al momento de decidir sobre el otorgamiento o no de la medida cautelar.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45304, 27.11.97

"GARCÍA SUAREZ, AMALIA BLANCA AMÉRICA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Concurrencia. Concubina. Intervención como tercero. Alcances.

La decisión del Tribunal de correrle traslado a la conviviente del causante del memorial de agravios presentado por la viuda, lo es con el objeto de que pueda esgrimir las defensas que estimara corresponder como tercero posible interesado en el resultado del proceso. Es decir que su participación en la causa que ventila el derecho de la viuda, debe limitarse al control de aquellos aspectos que pudieran alcanzarla con los efectos de la cosa juzgada; pero no puede utilizar este juicio para plantear defensas que hacen a su propio derecho de pensión.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46123, 09.10.97

"MORENO, MARTA ELSA c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

Hijos

Fallecimiento del causante. Ley vigente. Ley 24.241, art. 161, 2do. párrafo.

Si bien es cierto que en materia previsional la ley que rige es la vigente al momento de la muerte del causante - en el caso, ley 24.241-, no es menos cierto que dicha norma en el párrafo 2do. de su art. 161 prevé un supuesto especial cuando dice: "El derecho a pensión de los causahabientes de los afiliados que a la fecha de entrada en vigor de esta ley fueran titulares de jubilación o tuvieran derecho a ella de conformidad con las leyes vigentes a esa fecha, se regirá por dichas leyes". En consecuencia, encontrándose fehacientemente demostrado que la peticionante cumplía con los requisitos indicados por el art. 26, inc. c) de la ley 18.038 y que el causante al momento del fallecimiento se encontraba gozando del beneficio de jubilación, corresponde otorgar la pensión solicitada.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79379, 21.11.97

"ERHAT, LEA TERESA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Otros beneficiarios

Hermanos. Fallecimiento del causante. Ley vigente. Leyes 18.037 y 24.241.

Si bien la enumeración del art. 53 de la ley 24.241 no incluye entre los potenciales beneficiarios de una pensión a los hermanos del causante, con lo dispuesto por el art. 161 de ese mismo cuerpo normativo, el legislador pretendió salvaguardar, en la etapa de transición entre el antiguo régimen previsional y el instaurado por la ley 24.241, los derechos adquiridos por los causahabientes en virtud de lo prescripto por las leyes 18.037 y 18.038. En consecuencia, si el causante obtuvo su jubilación al amparo de la ley 18.037, el referido art. 161 de la ley 24.241 resulta aplicable cuando quien peticiona el beneficio es un hermano mayor de 18 años, incapacitado, ya que el mismo se encuentra incluido entre las personas con derecho a pensión según los arts. 38 y 39 de la ley 18.037. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Laclau. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70338, 24.10.97

"RUSSIAN, ELELI YSIDRO c/ A.N.Se.S."

(F.-W.-L.)

Hermanos. Fallecimiento del causante. Ley vigente. Leyes 18.037 y 24.241.

El Dec. 433/93 al referirse al art. 161 de la ley 24.241, sólo alude a la primera parte del mismo y no al derecho a pensión. El legislador ha contemplado distintas situaciones en el muy genéricamente calificado "período de transición", y en el art. 161, 2do. párrafo, contempla la de quienes son beneficiarios o tienen derecho a la prestación, de conformidad con las leyes vigentes a ese entonces y no expande sus efectos a quienes cumplieron esos recaudos posteriormente. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar al beneficio de pensión del hermano del causante que se había jubilado al amparo de la ley 18.037. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Wassner. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70338, 24.10.97

"RUSSIAN, ELELI YSIDRO c/ A.N.Se.S."

(F.-W.-L.)

Hermanos. Fallecimiento del causante. Ley vigente. Leyes 18.037 y 24.241.

El art. 53 de la ley 24.241 no contempla entre los causahabientes con derecho a pensión a la totalidad de las personas antes comprendidas en el art. 38, inc. 5) de la ley 18.037, o su equivalente de la ley 18.038. Así las cosas,

si bien el principio general en materia previsional es que los beneficios se rigen por la ley vigente al cese de tareas o, tratándose de pensiones, por la ley vigente al deceso del causante, ha de entenderse que dicha legislación solo resulta aplicable si, a esas fechas, se reúnen todos los requisitos establecidos por la legislación en vigor. Por otra parte, las disposiciones del art. 161, de la ley 24.241, por la que se introdujeron importantes modificaciones en la legislación nacional en materia de previsión social para el período de transición que se extendió hasta la entrada en vigor del S.I.J.P., rigieron desde la promulgación de la ley 24.241 mediante el Dec. 2091/93 (13/10/93), con la salvedad de los arts. 158, 159 y 165, que se aplicaron a partir del 01/02/95 (cfr. art. 191, inc. d, ley citada; y art. 1, Dec. 2433/93). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia que hizo lugar al pedido de pensión del hermano del causante si el fallecimiento de éste se produjo cuando ya se encontraba vigente el S.I.J.P., que comenzó a regir el 14/07/94. (Disidencia del Dr. Fasciolo)

C.F.S.S., Sala III, sent. 70338, 24.10.97

"RUSSIAN, ELELI YSIDRO c/ A.N.Se.S."

(F.-W.-L.)

Nietos. Orfandad. Ley 18.037, art. 38, inc. d).

Si el causante subvenía totalmente las necesidades del menor (en el caso, hijo de padre desconocido que se hallaba a cargo del abuelo conforme la guarda otorgada por un Tribunal de Menores), aún cuando a los efectos técnicos no se cumpla con el requisito de orfandad previsto por el art. 38, inc. d) de la ley 18.037, debe concluirse que se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de pensión. Así lo ha entendido reiteradamente la jurisprudencia al sostener que el requisito de orfandad debe equipararse a la desprotección o a la falta de ingresos y recursos propios, pudiendo - de ser el caso- ser dejado de lado de acreditarse estos últimos (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.05.85, "Battilana, María Alicia"; sent. del 15.04.82, "Oswald, Ramona Delfina"; C.N.A.T., Sala VI, sent. del 30.11.88, "Romano, Gabriela Valeria"; C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 08.03.94, "Remedi, Alejandro").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71578, 22.12.97

"SCIARRA, LUCAS c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicio Públicos"

(F.-H.-E.)

Viuda

Incapacidad. Comisiones Médicas. Insania. Arbitrariedad del organismo administrativo.

El principio general consagrado por el Código Civil es que se presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario (arts. 140 y 3616). Por ello, si la incapacidad reconocida por las Comisiones Médicas (y consentida por la A.N.Se.S.) lo es fundamentalmente por limitaciones visuales, que el organismo sin fundamento alguno haya dispuesto supeditar el pago "... a la presentación de la insania", aparece "prima facie" como arbitrario; correspondiendo, en consecuencia, acoger la medida cautelar requerida - previa caución juratoria- hasta tanto se resuelva definitivamente el fondo de la cuestión (arts. 195 y conc. C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45467, 29.12.97

BRAGGIO, GRACIELA NELIDA c/ A.N.Se.S."

(D.-Ch.-M.)

PRESTACIONES

Acumulación

Doble beneficio. Ley 23.604. Análisis. Deber del organismo administrativo.

Resulta huérfana de todo sustento la dogmática afirmación contenida en los considerandos de la resolución de la A.N.Se.S. (por la que se dio de baja la prestación) según la cual "no se encuentran cumplidos los extremos legales previstos en la ley 23.604", sin indicar a cual de ellos se refiere. La dilucidación de ese punto reviste máxima importancia para legitimar lo dispuesto, ya que del articulado de la ley aludida se concluye que en su espíritu anida la voluntad del legislador de hacer excepción al principio de prestación única que rige nuestro sistema previsional, de modo que aquellos que se hubieren desempeñado en diversos ámbitos por tiempo prolongado con observancia del deber de aportar, puedan acceder a jubilaciones ordinarias que compensen su esfuerzo. En tal sentido, los Fundamentos de la propia ley aclaran que "es de toda equidad reconocer el derecho a dos jubilaciones ordinarias exclusivamente a quienes aportaron siempre como para acceder en forma independiente a dicha prestación en cada Caja donde se acreditara la edad, los servicios y los aportes en sus requisitos integrales".

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66754, 18.09.97

"SCHAY, ELADIA c/ A.N.Se.S."

(F.-L.)

Ley 23.604. Jubilación única.

Tanto del texto del articulado de la ley 23.604 como de sus fundamentos, se concluye que en su espíritu anida la voluntad del legislador de hacer excepción al principio de prestación única que rige nuestro sistema previsional, de modo que aquellos que se hubieren desempeñado en diversos ámbitos por tiempo prolongado con observancia del deber de aportar, puedan acceder a jubilaciones ordinarias diversas que compensen su esfuerzo. En consecuencia, y en tanto el art. 19 de la C.N. sostiene que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, debe concluirse que asiste razón a quien reclama a optar entre obtener el reajuste de una prestación ya otorgada (en el caso, en la esfera municipal) por el cómputo de servicios prestados en ámbito ajeno (en el caso, nacional) o, en su defecto, solicitar otro beneficio por estos últimos, al amparo de la referida ley 23.604. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia.)

C.F.S.S., Sala III, sent. 70280, 07.10.97

"RODRÍGUEZ DE ROZLOSNIK, ESTRELLA c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos"

(L.-F.-W.)

Ley 23.604. Jubilación única.

Corresponde confirmar la resolución administrativa que denegó la jubilación ordinaria solicitada al amparo de la ley 23.604 por no encuadrar en la excepción al principio de la jubilación única, si del informe evacuado por el Instituto Municipal de Previsión Social surge que la peticionante goza de un beneficio obtenido en ese régimen, cuyo monto es susceptible de mejora con la inclusión de los servicios prestados en el ámbito del Estado Nacional. (Disidencia del Dr. Lacalu).

C.F.S.S., Sala III, sent. 70280, 07.10.97

"RODRÍGUEZ DE ROZLOSNIK, ESTRELLA c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos"

(L.-F.-W.)

Edad

Ley 18.037, art. 43. Vigencia. Dec. 2433/93. Ilegalidad.

El Dec. 2433/93 - reglamentario del art. 156 de la ley 24.241 - al puntualizar que los supuestos contemplados en los párrafos 2 y 3 del art. 43 de la ley 18.037 serían de aplicación hasta la entrada en vigencia del Libro I de la referida ley 24.241 (15.07.94), incurre en un exceso reglamentario porque impone la aplicación de una nueva ley a situaciones de hecho configuradas con anterioridad a su sanción. Ello es ilegítimo ya que la función constitucional de un decreto reglamentario no es más que la de regular la forma de aplicación de una ley y no la de modificar su texto ni su sustancia, cuestiones privativas del Congreso de la Nación. En consecuencia, producido el cese laboral del titular vigente la ley 18.037, corresponde que obtenga su prestación previsional al amparo de dicho cuerpo normativo si cumplió la edad exigida dentro del plazo de cinco años que el art. 43 de la norma de referencia le otorga para requerir el beneficio.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71595, 30.12.97

"LOZANO, NELIDA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Pérdida o suspensión del beneficio

Facultad del organismo administrativo. Derecho de defensa.

Si bien es cierto que en los supuestos de nulidad absoluta, la autoridad administrativa cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios, aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento, también lo es que ello es a condición de que los hechos o actos que las determinan resultaren "fehacientemente probados" y que los organismos previsionales actúen con extrema cautela, atendiendo la necesidades que tales beneficios satisfacen, la edad y eventuales consecuencias personales en los beneficiarios a los que debe dársele adecuada participación en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados (cfr. C.S.J.N., sent. del 15/10/96, "Castellanos, Jaime Enrique c/ C.N.P.P.E. y S.P.").

C.F.S.S., Sala I, sent. 79192, 01.10.97

"ZAPATA, LIDIA NELLY c/ A.N.Se.S."

(D.-Ch.-M)

Acción de amparo. Derecho de defensa.

La vía del amparo resulta idónea cuando, en principio, no corresponde necesariamente decidir sobre el fondo de la cuestión planteada, sino verificar simplemente si el organismo denunciado antes de resolver afectando haberes de prestaciones en vías de cumplimiento, dio adecuada posibilidad de participación en los procedimientos al beneficiario.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79192, 01.10.97

"ZAPATA, LIDIA NELLY c/ A.N.Se.S."

(D.-Ch.-M.)

Acción de amparo. Principio de bilateralidad.

Si en el trámite de otorgamiento del beneficio rige el principio de la bilateralidad, no es posible admitir - como bien lo señala el Máximo Tribunal -, que otorgada la prestación y en vías de cumplimiento, sin dar participación alguna al interesado, se disponga unilateralmente su modificación en perjuicio de este último.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79192, 01.10.97

"ZAPATA, LIDIA NELLY c/ A.N.Se.S."

(D.-Ch.-M.)

Acto unilateral de la Administración. Medida cautelar. Procedencia.

Surgiendo de autos que el beneficio ha sido extinguido unilateralmente por el organismo administrativo, sin dar una adecuada participación al interesado para posibilitarle la prueba y alegación sobre los aspectos cuestionados, y teniendo en cuenta que en el trámite de otorgamiento del beneficio rige el principio de bilateralidad y que su extinción afecta la subsistencia misma, lleva a tener por acreditados "prima facie" los requisitos establecidos para la procedencia de la medida cautelar solicitada (art. 230 incs. 1º y 2º del C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45173, 30.09.97

"ORTIZ IRAMAIN, ALEJANDRO RODOLFO c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Vías de hecho de la administración. Medidas cautelares. Procedencia.

Surgiendo de autos que el actor percibía el rubro reclamado y que el organismo no dictó acto administrativo alguno - resolución fundada como la exige la normativa aplicable- en aras de ejercer las facultades excepcionales que le reconoce el art. 15, 2do. párrafo, de la ley 24.463 con adecuada y previa intervención del beneficiario, fundamentando su actuar sólo en un dictamen de una de sus dependencias, debe concluirse que su comportamiento importa vías de hecho, la que está expresamente vedada en los términos del art. 9 de la ley 19.549. En consecuencia, corresponde confirmar lo resulto por el "a quo" que hizo lugar a la medida cautelar, ya que lo que persigue el titular es que se le mantenga el pago íntegro del haber jubilatorio que percibía con anterioridad a la unilateral decisión.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45284, 17.11.97

"CHURRARIN, CONSTANCIO c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Facultad del organismo administrativo. Ley 18.037, art. 48. Ley 24.241, art. 15. Derecho de defensa en juicio.

En interpretación del art. 48 de la ley 18.037 -hoy art. 15 de la ley 24.241- tiene dicho nuestro tribunal cimero "... que si bien es cierto que en los supuestos de nulidad absoluta, la autoridad administrativa cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento, también lo es que ello es a condición de que los hechos o actos que las determinan resultaren "fehacientemente probados" y que los organismos previsionales actúen con extrema cautela, atendiendo las necesidades que tales beneficios satisfacen, la edad y eventuales consecuencias personales en los beneficiarios a los que debe dársele adecuada participación en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados (cfr. sent. del 15/10/96, "Castellanos, Jaime Enrique c/ C.N.P.P.E.y S.P."); y todo ello en resguardo de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45421, 22.12.97

"VULCANO, PASCUAL c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

Principio de bilateralidad. Doble beneficio. Medida cautelar. Procedencia.

Si en el trámite de otorgamiento del beneficio rige el principio de bilateralidad, no es posible admitir que otorgada la prestación y en vías de cumplimiento, sin dar participación alguna al interesado se disponga unilateralmente su modificación en perjuicio de éste. Por ello, si la resolución por la que se revocó uno de los beneficios previsionales que regularmente percibía el titular y dispuso la formulación de un cargo por los haberes percibidos indebidamente afectando la prestación que se le mantiene, fue dictada sin

habérsele dado previa participación, corresponde acoger la medida de no innovar solicitada.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45421, 22.12.97

"VULCANO, PASCUAL c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

Acto administrativo. Derecho de defensa.

El acto administrativo en virtud del cual se otorga el beneficio jubilatorio esta precedido por la actividad del peticionante y del órgano resolutor. El juego armónico de ambas acciones, signadas por el hecho que el postulante al beneficio tiene un rol activo en cuanto denuncia servicios y explícita prueba para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, se completa por la actividad del órgano otorgante quien tiene la peculiaridad de instar a que, en caso de dudas o oscuridad se produzcan nuevas pruebas o se aclaren situaciones. Por ello, en oportunidad de otorgarse el beneficio jubilatorio, se le reconoce al peticionante un derecho que indudablemente tiene resguardo por la C.N. (art. 17) y que, para dejarlo sin efecto, se deben observar los recaudos indispensables de oír a la persona a quien se le priva del mismo, a fin de que ejercite el derecho constitucional de defensa (art. 18 C.N.)

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45332, 03.12.97

"MARTÍNEZ CARUNCHO, MARÍA c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Facultad del organismo administrativo. Derecho de defensa.

Si bien es cierto que en los supuestos de nulidad absoluta, la autoridad administrativa cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento, también lo es que ello es a condición de que los hechos o actos que las determinan resultaren "fehacientemente probados" y que los organismos previsionales actúen con extrema cautela, atendiendo las necesidades que tales beneficios satisfacen, la edad y eventuales consecuencias personales en los beneficiarios a los que debe dársele adecuada participación en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados (cfr. C.S.J.N., sent. del 15/10/96, "Castellanos, Jaime Enrique c/ C.N.P.P.E.y S.P."). Si ello no ocurre, estamos ante la afectación del ejercicio de derechos amparados por la Carta Magna y que indudablemente justifica la acción del afectado de concurrir a los estrados judiciales para hacer cesar ese accionar ilegal.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45332, 03.12.97

"MARTÍNEZ CARUNCHO, MARÍA c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Acción de amparo. Procedencia. Ley 24.241, art. 15. Ley 18.037, art. 48.

Si bien el art. 43 de la C.N. requiere para la procedencia del amparo que no exista otro medio judicial más idóneo, también prescribe que el acto u omisión de autoridad pública o particulares, revista el carácter de arbitrario o de ilegalidad manifiesta. En este orden de ideas, el principio general en materia de nulidades de actos administrativos aparece consagrado en el art. 17 de la ley 19.549. Cuando el acto administrativo ha generado prestaciones que están en vías de cumplimiento sólo se podrá impedir su subsistencia mediante declaración judicial de nulidad. El art. 15 de la ley 24.241 es una excepción a dicha norma y como tal deber ser de interpretación estricta. Tal ha sido el criterio interpretativo que invariablemente mantuvieron tanto la justicia del trabajo, como luego la C.F.S.S. con respecto al art. 48 de la ley 18.037, que es su antecedente inmediato (ver "La anulación del acto previsional por razones de ilegitimidad" por A. L. Pawlowski de Posse, D.T. 1994, pág. 422).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45332, 03.12.97

"MARTÍNEZ CARUNCHO, MARÍA c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Resolución administrativa. Bilateralidad. Acción de amparo. Procedencia.

Aunque exista una resolución de la A.N.Se.S. por la que se dispuso la extinción del beneficio, al no haber el organismo respetado el principio de bilateralidad, en virtud del cual debió escuchar al interesado, se estaría frente a una decisión semejante a vías de hecho de la Administración, razón por la cual cabe aceptar la acción de amparo intentada. El hecho que el art. 15 de la ley 24.463 prevea el camino de la acción sumaria para situaciones en que haya existido resolución del organismo previsional no está en contradicción con ello, habida cuenta que los valores en juego tienen jerarquía superior respecto de la forma que establece la norma procesal indicada.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45332, 03.12.97

"MARTÍNEZ CARUNCHO, MARÍA c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Acción de amparo. Improcedencia.

Si de las declaraciones vertidas por la accionante se desprende que, lejos de esclarecer los hechos debatidos, sólo aportan nuevos e inquietantes interrogantes, dejando entrever circunstancias confusas y harto sospechosas en orden a la regularidad del procedimiento que precede a la obtención del beneficio - lo cual en modo alguno ayudan a formar la convicción del Juzgador a la luz de las graves denuncias formuladas por la Administración- cabe concluir que para dilucidar los hechos debatidos es necesario mayor debate y la producción de otros medios de probatorios. En consecuencia, si bien la suspensión de un beneficio de carácter alimentario debe constituir una medida extrema, resulta prudente - atento las particularidades del caso- postular la confirmación de la resolución de la A.N.Se.S. de suspender el beneficio por irregularidades, toda vez que el conocimiento y decisión del tema excede largamente el acotado marco procesal que prevé el régimen del amparo para tutelar los derechos y garantías de los particulares amenazados o violados por actos públicos o privados manifiestamente arbitrarios o ilegales (art. 43 C.N.).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71217, 07.08.97

"DIZ, VILMA SUSANA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Ley 18.037, art. 48. Ley 24.241, art. 15. Deber del organismo administrativo.

Si bien es cierto que frente a un caso de nulidad absoluta el organismo previsional cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar las resoluciones que otorgan beneficios jubilatorios (art. 48 ley 18.037 y 15 ley 24.241), ello es a condición de que dicha nulidad resulte de hechos o actos "fehacientemente probados" y presupone que se haya dado a los interesados participación adecuada en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados, en resguardo de la garantía de defensa en juicio - art. 18 de la C.N.; art. 1, inc. f, ley 19.549- (cfr. C.S.J.N., sent. del 12.12.96, "Trama, María Alejandra").

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46522, 30.12.97

"PÉREZ, ANGELITA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Medida cautelar. Procedencia.

El carácter alimentario que ostenta el beneficio jubilatorio y la edad del titular acreditan, "por sí mismo", el peligro en la demora exigido para la procedencia de la medida cautelar solicitada ante el acto administrativo que decretó la nulidad de la prestación oportunamente otorgada. En ese sentido, el Alto Tribunal ha señalado reiteradamente que "los jubilados son ciudadanos

y habitantes que al concluir su vida laboral acreditan su sustento, en principio absolutamente, a la efectiva percepción de las prestaciones que, por mandato constitucional, le corresponden" (cfr. Rolón Zappa, Víctor, sent. del 30.09.86).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46522, 30.12.97

"PÉREZ, ANGELITA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Principio de bilateralidad. Medida cautelar. Procedencia. Dec. 1287/97.

Extinguido el beneficio del titular en forma unilateral por el organismo administrativo, sin darle una adecuada participación para posibilitarle la producción de prueba y alegación sobre los aspectos cuestionados, y teniendo en cuenta que en el trámite de otorgamiento del beneficio rige el principio de la bilateralidad y que por su extinción podría afectarse la subsistencia misma del interesado, deben tenerse por acreditados, prima facie, los requisitos establecidos para la procedencia de la medida cautelar solicitada, máxime si se considera el carácter alimentario de la prestación y su tutela en virtud de normas de rango constitucional (art. 14 bis C.N.). Coadyuva en ese sentido la sanción del Dec. 1287/97 - reglamentario del art. 15 de la ley 24.241 - que, previo al ejercicio de las facultades otorgadas a la A.N.Se.S. para suspender, revocar, modificar o sustituir una resolución otorgante de prestaciones previsionales, impone la notificación y emplazamiento del beneficiario para que pueda intervenir en un proceso administrativo, previo al dictado de la resolución que corresponda, la que siempre podrá ser susceptible de impugnación judicial con arreglo a lo dispuesto por el art. 14 de la ley 24.463.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71640, 30.12.97

"GANDINI, LUIS ARMANDO c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

RETIROS Y PENSIONES MILITARES

Competencia. Ley 13.593, art. 28. Ley 24.655, art. 2, inc. c).

Dentro del actual esquema procesal, debe considerarse que el art. 28 de la ley 13.593 ha sido implícitamente modificado por el art. 2, inc. c) de la ley 24.655 y, en consecuencia, frente a un recurso de apelación interpuesto en los términos del art. 28 de la norma citada en primer término ante la denegatoria de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, debe concluirse que la cuestión tramitará ante la Primera Instancia del Fuero. Sentado ello, y a los fines de resguardar el derecho que asiste al presentante en los términos del art. 18 de la C.N., teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria del derecho en cuestión y, por último, evitar dispendiosas tramitaciones que podrían implicar un perjuicio para él, corresponde ordenar se adecue el procedimiento en los términos de lo dispuesto por las leyes 24.463 y 24.655. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45488, 30.12.97

"MÓNACO, JOSÉ ROBERTO Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal"

(M.-Ch.-D.)

Competencia. Ley 13.593, art. 28. Vigencia.

Las leyes 23.473, 24.463 y 24.655, si bien fueron fijando pautas de competencia en materia de Seguridad Social, así como también en los procedimientos a seguir ante la C.F.S.S. con la inequívoca finalidad de superar los vaivenes competenciales respecto a esa rama del derecho, no hicieron mención

alguna en cuanto a la derogación del art. 28 de la ley 13.593, razón por la cual cabe concluir que el mismo sigue vigente. (Disidencia del Dr. Díaz).
C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45488, 30.12.97
"MÓNACO, JOSÉ ROBERTO Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal"
(M.-Ch.-D.)

Competencia. Ley 13.593, art. 28. Vigencia.

Una de las finalidades que tuvo en cuenta el legislador al sancionar las leyes 23.473, 24.463 y 24.655 ha sido la de unificar en un fuero todas aquellas cuestiones cuyo objeto participara de la naturaleza de la seguridad social, atendiendo al criterio de especialización. Lógica derivación de ello es que la mención que hace el art. 28 de la ley 13.593 a la "Cámara Federal de la Capital de la República", frente a la realidad normativa y de organización judicial, se refiere a la Cámara Federal de la Seguridad Social, tanto en lo que respecta a su denominación cuanto a la materia de que se trata. (Disidencia del Dr. Díaz).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45488, 30.12.97
"MÓNACO, JOSÉ ROBERTO Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal"
(M.-Ch.-D.)

Competencia. Ley 13.593, art. 28. Vigencia.

El art. 28 de la ley 13.593 no ha sido derogado por la legislación posterior; ergo, mantiene plena vigencia, y la Cámara Federal de la Capital de la República a la cual hace referencia no es otra que la hoy Cámara Federal de la Seguridad Social. (Disidencia del Dr. Díaz).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45488, 30.12.97
"MÓNACO, JOSÉ ROBERTO Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal"
(M.-Ch.-D.)

RETIROS Y PENSIONES POLICIALES

Haberes previsionales. Reajuste. C.F.S.S. Competencia material. Incompetencia en razón del grado.

Tras la sanción de la ley 24.463 la C.F.S.S. resulta competente, en razón de la materia, para entender en las causas derivadas de peticiones de carácter previsional en las que es parte la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (cfr. dec. ley 15943/46 de creación de dicho organismo, ratificado por ley 13.593). No obstante ello, resulta incompetente en razón del grado para entender en actuaciones donde se persigue el reajuste del haber de pasividad, toda vez que dicha cuestión no se encuentra incluida dentro de la competencia originaria de la misma prevista por el art. 39 bis del dec. ley 1285/58, modificado por ley 24.463. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el art. 2, inc. c) de la ley 24.655, corresponde remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas a fin de que sea sorteado a la Primera Instancia del fuero.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46024, 02.09.97
"MENDILHARZU, JUAN JOSÉ c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal"
(H.-F.)

SEGURIDAD SOCIAL EN GENERAL

Sistema previsional. Carácter. Derechos y obligaciones.

El sistema previsional en nuestro país es de carácter contributivo, inspirado en un principio de solidaridad social y que si bien implica la existencia de derechos, también impone obligaciones a cumplir, derivándose de ello que quienes las incumplen carecen luego de derecho para reclamar la asistencia previsional. Ello obedece a la necesidad de preservar el régimen financiero del sistema evitando que aquellos que evaden su obligación de afiliarse o consienten el incumplimiento del empleador, pretendan luego un beneficio jubilatorio (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 28.09.89, "Berttana, Angélica R. c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71193, 07.08.97

"MACCARONE, NATALIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

SERVICIOS

Reconocimiento. Trabajadores en negro. Blanqueo. Ley 24.018, art. 12. Dec. 2725/91.

Lo prescripto por el art. 12 de la Ley Nacional de Empleo está destinado a promover la regularización de las relaciones laborales no registradas o insuficientemente registradas, pero de ningún modo puede desprenderse de su texto una interpretación perjudicial para los derechos de quien, durante ese tiempo, prestó servicios. Coadyuva en ese sentido lo dispuesto por el art. 4, inc. 7 del Dec. Reg. 2725/91, al facultar al organismo de aplicación para disponer las medidas necesarias para verificar la real prestación de los servicios denunciados.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71227, 13.08.97

"GIMENEZ DE ESTIGARRIBIA, MARÍA HIPOLICA c/ I.N.P.S."

(F.-E.-H.)

PROCEDIMIENTO

ACCIÓN DE AMPARO

Apelación. Plazo. Ley 16.986, art. 15. Omisión del Oficial Notificador.

Habiendo omitido el Oficial Notificador colocar la hora en la cédula entregada al amparista, el plazo establecido en el art. 15 de la ley 16.986 se debe contar a partir de la hora 24 del día en que se practicó el acto (cfr. Rivas, A. A., "El amparo", pág. 310; Sagües, N. P., "Acción de amparo", pág. 499; C.N.C.A.F., Sala V, sent. del 06.05.96, "Traglia, Rafaela c/ P.E.N."; Sala I, sent. del 12.11.96, "De la Fuente, M.A. c/ Jefe del Estado Mayor General del Ejército").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45170, 30.09.97

"CUCH, JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Costas al organismo administrativo. Ley 16.986.

La ley 16.986 tiene su propia regulación en materia de costas. Si bien el art. 14 establece como regla que las costas se deben imponer al vencido, como modo de estímulo al cese de la "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" cuya existencia es requisito del amparo, exime de las mismas si cesara el acto u omisión en que se fundó la presentación antes del plazo fijado para la contestación del informe previsto en el art. 8 de la ley. En consecuencia, no habiéndose adecuado la conducta de la accionada a la eximente de la norma en cuestión, no existe razón alguna para que no deba soportar las costas del juicio.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45225, 30.10.97

"OVIEDO, JULIO ALBERTO c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Cuestión futura. Dec. 332/97. Improcedencia.

No corresponde considerar en el ámbito excepcional de la acción de amparo el planteo marcadamente conjetural que constituye una cuestión de "puro futuro". La C.S.J.N. así lo señaló in re "Cía. de Seguros India c/ Caja de Previsión para Bancarios": "Si la acción versa sobre hechos del porvenir, no es admisible" (Fallos 248:443). Por ello, no resultando de autos la existencia y eficacia del acto administrativo que daría fundamento al derecho que se aduce otorgado, y por consiguiente el virtual alcance o aplicación al recurrente de los términos del Dec. 332/97 - por cuya inconstitucionalidad acciona-, corresponde confirmar la resolución del "a quo" que dispuso el rechazo "in limine" de la acción de amparo interpuesta.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45170, 30.09.97

"CUCH, JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Demanda. Requisitos. Ley 16.986, art. 6. Domicilio real.

Habiendo cumplido los actores con todos los requisitos necesarios para iniciar la acción de amparo - conforme lo establecido por el art. 6 de la ley 16.986- con excepción de la denuncia del domicilio real, derivar de esa omisión el tenerlos por desistidos del proceso aparece como un exceso ritual.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45253, 17.11.97

"GUERRERO, MIGUEL Y OTROS c/ P.E.N."

(Ch.-M.-D.)

Procedencia.

A tenor del nuevo art. 43 de la C.N., la acción de amparo no puede ya tener un carácter residual, sino que debe considerárselo la vía principal y excluyente de otras carentes de celeridad cuando se advierte la existencia de un accionar arbitrario o ilegítimo, como son los casos en que el Estado no ha honrado sus compromisos económicos, lo que violenta principios de rango constitucional (arts. 14 bis, 17, 18, 43, 74 inc. 22) y la previsiones de distintos Tratados Internacionales de jerarquía constitucional (art. 8 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45947, 19.08.97

"CABRERA, OSCAR VIRGILIO c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Seguro de desempleo. Ley 24.013, art. 112.

El organismo incurre en vías de hecho vedadas a la administración por el art. 9, inc. a) de la ley 19.549, cuando no emite acto administrativo que respalde lo actuado sino que, por el contrario, se pronuncia mediante una nota simple que no puede, en modo alguno, equipararse a una resolución expresa y fundada (en el caso, denegando el seguro de desempleo - art. 112, ley 24.013-). Por ello, y teniendo en cuenta el contenido alimentario del derecho solicitado, resulta admisible la acción de amparo incoada.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45479, 29.12.97

"GUELLER, ELSA JUDITH c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Solicitud del beneficio. Negativa del organismo.

Es criterio reiterado por nuestro máximo tribunal que en materia previsional, sólo puede llegarse al desconocimiento de derechos con suma cautela pues lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad (cfr. "Ballante, María), habida cuenta que "... La seguridad social tiene como objetivo fundamental proteger integralmente a la familia y evitar el desamparo de quienes, por su edad y modo de vida, no están en condiciones de proveer a su sustento" ("Liyan, María del Carmen"). Igualmente ha sostenido que "... los organismos previsionales no son partes contrarias, sino que deben brindar a los administrados el asesoramiento necesario para que obtengan los beneficios previsionales reconocidos por las leyes (cfr. sent. del 27.11.90, "Figueroa Manuel R. c/ Caja de Sub. Jubs. y Pens del Per. del Bco. Prov. de Bs. As."). Las precedentes consideraciones llevan a concluir que es procedente la vía del amparo frente a la negativa del organismo a recibir una solicitud del beneficio.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45430, 22.12.97

"FERREYRA, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

APODERADOS Y GESTORES

Art. 48 C.P.C.C. Recursos. Apelación. Facultad del Tribunal de Alzada.

Si la cuestión del "gestor" procesal no fue materia de agravios ni fue planteada por ninguna de las partes, ello encierra una suerte de valladar para el Tribunal de Alzada, el cual - como es sabido- debe fundar las resoluciones bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de "congruencia" (C.P.C.C., art. 34, inc. 4). Es decir que la Cámara debe ceñirse a lo que fue "materia de agravios" (C.P.C.C., art. 271 in fine), estándole expresamente vedado "fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (C.P.C.C., art. 277); salvo aquellos su-

puestos en que hubiesen sido propuestos pero omitidos en la sentencia de primera instancia, en cuyo caso podrá la Alzada pronunciarse "siempre que se solicitare al expresar agravios" (C.P.C.C., art. 278). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46619, 30.12.97

"RECOFSKY, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Art. 48 C.P.C.C. Perfeccionamiento de la personería.

Las nulidades procesales son "relativas", principio del que no escapa la nulidad de que habla el art. 48 del C.P.C.C. (cfr. Falcón, Enrique, "Código Procesal...", T. I, pág. 374, parág. 49.9.9), de tal suerte que la misma puede ser convalidada, ora a través del otorgamiento tardío del poder, ora mediante la "ratificación de la gestión realizada por el gestor, circunstancia que origina "el perfeccionamiento de la personería en el proceso (cfr. obra. citada, pág. 373, parág. 49.9.8). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46619, 30.12.97

"RECOFSKY, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Art. 48 C.P.C.C. Derechos previsionales.

La C.S.J.N. ha desaconsejado la aplicación estricta de soluciones ritualistas que pugnen con los derechos de la seguridad social, señalando que la negligencia del profesional que no acredite su matriculación no puede jugar en perjuicio del derecho del jubilado a contar con la revisión judicial suficiente del acto administrativo impugnado (cfr. sent. del 16.06.92, "Costa, Ricardo Leopoldo"). Dicho criterio fue ratificado al disponerse que la negligencia del abogado que no acató la intimación de acreditar la personería invocada, ni el desorden administrativo que impidió la oportuna agregación de poderes otorgados, pueden obrar en perjuicio del jubilado que pide justicia (cfr. sent. del 16.06.92, "Freigedo, Horacio David"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46619, 30.12.97

"RECOFSKY, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Art. 48 C.P.C.C. Recursos. Apelación. Facultad del Tribunal de Alzada.

Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto si el letrado que suscribe el memorial no posee poder del actor para actuar. Tal circunstancia, al tratarse de una cuestión procesal previa a la resolución del fondo de la cuestión, impide al Tribunal entrar a considerar lo resuelto por el "a quo". (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46619, 30.12.97

"RECOFSKY, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Inconducta procesal. Castigo. Deber del juez.

Se torna imperativo reprimir con severidad y eficacia la inconducta procesal, evitando la obstrucción del curso de la justicia, en cuanto la temeridad y la malicia afectan gravemente la función jurisdiccional. "El primer agraviado con la inconducta es el juez, pues trata de desviarlo en su tarea destinada a pronunciar una sentencia justa, mediante el planteamiento de afirmaciones engañosas o incidentes infundados" (cfr. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág. 186); y tiene el deber de sancionar al improbus litigatur (Fallos 282:356). Por ello, desde el momento que constituye un deber del juez (art. 34, inc. 5 y art. 163, inc. 8 del C.P.C.C.) corresponde castigar el incumplimiento procesal en que incurre el

apoderado de la recurrente a los deberes procesales de buena fe, lealtad y probidad; máxime si dicha actividad procesal se verificó a expensas de quien se debate diariamente frente a la necesidad de vivir dignamente, en un estado crítico de salud.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71507, 14.11.97

"PEGASANO, AGUSTÍN FEDERICO c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Otorgamiento de poderes. Res. nº 30 C.F.S.S. Interpretación.

Si bien es cierto que la C.F.S.S. por Resolución nº 30 (16.12.96) estableció los criterios a seguir para el otorgamiento de poderes, y que en el punto 2) reglamentó lo atinente a aquellos que fueran presentados en una causa con radicación anterior - caso en el que deben ser presentados ante el Juzgado en trámite-, no es menos cierto que lo dicho por la Excma. Cámara lo es a la luz de ciertos principios rectores que no pueden ser soslayados. Al respecto, la C.S.J.N. varias veces se ha expedido afirmando que si bien las normas deben ser respetadas para asegurar así el derecho de todos los justiciables, también deben ser interpretadas con el mismo fin (cfr. Fallos 292:387 "Fezza, Francisco"; 293:94 "García de Cuesta, Marcelina Angela"; 286:93 "Noriega, María Antonia", entre otros). Ello así, la negativa a dar acogimiento a la presentación realizada por el actor (en el caso, se acreditó personería mediante un poder otorgado ante el Juzgado Federal de Jujuy el que fue considerado ineficaz por el Juzgado Federal de la Seguridad Social interviniente), resulta revestida de un excesivo rigor formal, incompatible con el derecho de defensa, conclusión particularmente relevante si se atiende al hecho que "... la naturaleza alimentaria del beneficio en debate impone a los jueces actuar con suma cautela a fin de que no se vean ilusorios los preceptos constitucionales que ampara la materia en debate" (Cfr. Fallos 288: 439; 291:245; 294:94 y sent. del 26.07.91, "Montes de Victores, Vila").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45508, 30.12.97

"PONCE, JULIO HERMENEGILDO c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Poder. Plazo. Perentoriedad.

El plazo de cuarenta días para acompañar el poder, o para que la parte ratifique lo actuado, es perentorio. Transcurrido éste, se produce, como principio, la caducidad automática del derecho a convalidar las actuaciones del gestor. Asimismo, la justificación de la personería con posterioridad al vencimiento del término, no purga la nulidad de la actuado (cfr. Roland Arazi y Carlos Eduardo Fenochietto en "Régimen del Código Civil y Comercial de la Nación - Revisado y comentado -, pag. 100).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66996, 22.10.97

"POLONI, HUMBERTO ADOLFO c/ A.N.Se.S."

(W.-L.-F.)

Temeridad y malicia. Multa procesal. Art. 45 C.P.C.C. Solidaridad.

Debe concluirse que existió temeridad en el impugnante que litigó sin razón valedera -teniendo conciencia de la propia sin razón-, formulando reiterados planteos carentes de fundamentos científicos, y se alzó contra la autoridad técnica e imparcial de informes que satisfacen plenamente la finalidad con que fueron encomendados; y que ha habido malicia al valerse indebidamente de un recaudo procesal enderezado a resguardar la defensa en juicio, cual es el derecho de impugnar, para utilizarlo en contra de la finalidad que lo inspira, obstaculizando de tal manera el proceso con el objeto de dilatar la sentencia. En consecuencia, corresponde aplicar en forma solidaria al letrado apoderado y a la empresa recurrente, una multa procesal (art. 45 C.P.C.C.) equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total que

arroje la suma a liquidar al peticionante desde la solicitud del beneficio, la que formará parte del monto del juicio a los fines arancelarios.
C.F.S.S., Sala II, sent. 71507, 14.11.97
"PEGASANO, AGUSTÍN FEDERICO c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Art. 78 C.P.C.C. Ley 24.463, art. 21.

El objetivo del beneficio de litigar sin gastos previsto en los arts. 78 y sgtes. del C.P.C.C. es impedir que quien pretenda el reconocimiento judicial de un derecho no pueda ejercer la acción correspondiente por carecer de recursos para afrontar los gastos que demande la misma. Por ello, a la luz de lo dispuesto por el art. 21 de la ley 24.463, resulta atendible el planteo efectuado por la accionante tendiente a obtener dicho beneficio, ya que de aplicarse la mencionada disposición sin que el mismo le fuera otorgado, tendrá que soportar las costas que haya generado su parte.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46322, 14.11.97
"SCAFFINO, NÉLIDA ROSA"
(F.-H.-E.)

Finalidad. Ley 24.463, art. 21. Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia.

La petición de litigar sin gastos responde al trámite de los procesos especiales realizados con un fin objetivo, tal cual es el de lograr la autorización de que la parte beneficiada se encuentre exenta - total o parcialmente- del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna (art. 84 C.P.C.C.); y no puede servir de pivote procesal para lograr la declaración de inconstitucionalidad de una directiva como la fijada por el art. 21 de la ley 24.463, cuestión que deberá ser dilucidada en el proceso principal por el juzgador.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46611, 30.12.97
"DE MAIO, CONCEPCIÓN"
(E.-H.-F.)

Planteo. Art. 78 C.P.C.C. Gastos anteriores. Preclusión.

Para que el beneficio de litigar sin gastos proceda, deben tenerse en cuenta no sólo las circunstancias económicas del peticionante, sino la temporalidad del planteo. El C.P.C.C., en su art. 78, autoriza a la parte interesada a solicitarlo antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso. Pero, habiendo sido requerido durante el proceso ya en trámite, la resolución que lo concede no alcanza a los gastos de justicia que se hubieran devengado con anterioridad a su solicitud, como consecuencia del principio de preclusión (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, sent. del 27.02.92, "Gulluscio, Mario c/ Microómnibus Seis S.A.").

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46116, 30.09.97
"COOPERATIVA DE TRABAJO PAIDOS LIMITADA c/ D.G.I."
(F.-H.-E.)

Tasa de justicia. Planteo extemporáneo.

Aún cuando el beneficio de litigar sin gastos puede solicitarse en cualquier estado del proceso (C.P.C.C., art. 78), ello no implica que se retrotraigan sus efectos a estadios anteriores a la concreta petición del mismo. Si el beneficio se solicita con posterioridad no sólo al planteamiento del recurso, sino a la intimación del pago de la tasa de judicial, cualquier decisión al respecto es irretroactiva frente al tributo devengado en su totalidad y pendiente de pago. En consecuencia, si lo que se pretende es la eximición del pago de la tasa ju-

dicial y con ese fin se promovió el beneficio de litigar sin gastos, resulta extemporáneo su planteo y, por lo mismo, debe ser rechazado (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 15.04.97, "Cooperativa de Trabajo Ser Limitada").

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46116, 30.09.97

"COOPERATIVA DE TRABAJO PAIDOS LIMITADA c/ D.G.I."

(F.-H.-E.)

CADUCIDAD

Art. 310, inc. 2, C.P.C.C. Inactividad procesal. Presunción.

La presentación de un oficio para su visado comporta instar el procedimiento y, por ende, interrumpir los plazos de caducidad de la instancia. La falta de constancia en el expediente o la pérdida del mismo por circunstancias ajenas a la voluntad del interesado no puede, en principio, perjudicarlo. Ello así toda vez que el fundamento de la institución estriba en la presunción de abandono de la instancia como consecuencia de una inactividad procesal prolongada.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45957, 22.08.97

"TESTONI, SILVIA SUSANA c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Art. 310, inc. 2) C.P.C.C. Interrupción.

Corresponde confirmar la resolución que declaró de oficio perimida la instancia, conforme lo dispuesto en el art. 310, inc. 2 del C.P.C.C., si entre el último acto procesal de la actora y el momento en que dejó nota por no encontrar el expediente en letra, transcurrió un prolongado período de tiempo sin que realizara actos impulsivos. Ello así porque "... para interrumpir el curso de la caducidad de la instancia, se debe demostrar un interés jurídico en la prosecución de la causa, promoviendo actuaciones que gocen de aptitud para hacer avanzar el trámite en el momento procesal en que se manifiestan" (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 15.11.90, "Darakjian, Ana M. c/ Ahijado, Pablo S.).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45176, 30.09.97

"GUERRA, RAMONA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Declaración de oficio. Improcedencia.

Corresponde revocar la decisión del "a quo" que, de oficio, declaró la caducidad de instancia sin que la misma fuera articulada como defensa o excepción alguna, ni peticionada por la parte demandada. Así lo ha resuelto la C.S.J.N. al sostener que la caducidad de la acción - cuestión eminentemente renunciante como excepción a interponer por la demandada- no puede ser declarada de oficio por los jueces, ya que ello importaría suplir la actividad de las partes con grave desmedro de la garantía de defensa en juicio (Fallos 311:1181; 310:2709; 313:328).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45412, 15.12.97

"RIGLESTEIN DE POGGI, LEONOR c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Declaración de oficio. Improcedencia. Ley 24.655, art. 7.

El art. 7 de la ley 24.655 dispuso que las causas comprendidas en el art. 15 de la ley 24.463 que se encontraran radicadas ante la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal u otros fueros, debían pasar de inmediato a los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social. En consecuencia, correspondía a los Srs. Jueces de aquéllos fueros disponer de oficio el pase de las actuaciones a los nuevos tribunales y no, como en el caso

de autos, aplicar de oficio la caducidad de instancia por haber transcurrido en exceso el plazo establecido en el art. 310, inc. 2, del C.P.C.C. (Del voto del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46619, 30.12.97

"RECOFSKY, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Interrupción. Interés particular.

Para que un acto tenga habilidad interruptiva de la perención debe estar inexorablemente dirigido al desenvolvimiento efectivo de la relación procesal principal, y no produce ese efecto la actividad que persigue exclusivamente la satisfacción de un interés particular de uno de los litigantes (en el caso, dejar nota al no encontrar el expediente en letra, acto que no conduce a ningún avance en el expediente).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45176, 30.09.97

"GUERRA, RAMONA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Límites. Haberes mal liquidados. Prescripción. Ley 19.549, art. 25. Inaplicabilidad.

La caducidad es una sanción o pena administrativa que se aplica al particular cuando no ha cumplido con las obligaciones a su cargo (cfr. Hutchinson, "Régimen de procedimientos administrativos", pág. 147). Tal figura - en principio y salvo voluntad expresa del legislador- resultaría inoperante dentro del campo previsional por resultar los derechos que las leyes crean en tal disciplina personalísimos, intransferibles, inalienables e irrenunciables (cfr. art. 14 bis C.N.; art. 82 ley 28.037; art. 14 ley 24.241; Bidart Campos, "Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino", T. I, pág. 429; Goñi Moreno, "Derecho de la Previsión Social", T. II, pág. 489; Brito Peret y Jaime, "Régimen Previsional", pág. 150). No puede, en consecuencia, tal defensa oponerse a la pretensión del justiciable que solicita la rectificación de su haber de pasividad, ya que el mismo puede ser mal liquidado por múltiples cuestiones (error administrativo, desidia del ente obligado, reajuste mal practicado) y si un trabajador advierte que, en principio, su haber de pasividad está mal liquidado, no existe otro límite a su derecho que el establecido por el instituto de la prescripción liberatoria en los límites y en las condiciones del art. 82 de la ley 18.037, sin que pueda jugar la figura del art. 25 de la ley 19.549.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45897, 11.08.97

"GRAFFI, OMAR EMIR c/ A.N.Se.S."

(H.-F.-E.)

Pedido de búsqueda. Interrupción.

Si bien es cierto que el pedido de búsqueda del expediente interrumpe la caducidad, la misma no procede si la presentación fue posterior al auto declarativo de aquélla, el que, por lo tanto, carece de idoneidad para purgar la perención dispuesta.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45176, 30.09.97

"GUERRA, RAMONA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Plazo. Cómputo de días inhábiles.

Tratándose de un plazo de meses y no de días, el vencimiento opera conforme a los arts. 25 y 26 del Código Civil. A mayor abundamiento, "con relación al cómputo de los días inhábiles, cabe destacar que el art. 156 del C.P.C.C. rige únicamente respecto de los plazos establecidos por dicho código, o sea plazos legales - emanados de las normas de procedimiento- y no respecto de los judiciales, convencionales o legales, estipulados por las leyes

de fondo. Del mismo modo, tratándose de plazos de meses determinados por los Códigos Procesales, se incluirán los días inhábiles" (cfr. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado", T. I, pág. 585).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45475, 29.12.97

"FRANCALANCIA, ERNESTO c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Proceso previsional. Improcedencia.

El carácter alimentario de la pretensión previsional y los principios que informan el derecho de la Seguridad Social (irrenunciabilidad, universalidad, imprescriptibilidad) tornan inaplicable la figura de la caducidad de la instancia dentro del marco del proceso previsional. Ello por cuanto admitir la tesis contraria importaría desconocer la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales y la tutela constitucional de que gozan - art. 14 bis y 75, inc. 23, C.N.- (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 18.09.97, "Lanata, Norberto Abel"). (Del voto del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46619, 30.12.97

"RECOFSKY, JUAN JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Reasignación de juzgado. Acordada 75/96 C.S.J.N.

La circunstancia de que el expediente haya salido del Tribunal para la reasignación de juzgado dispuesta por la Acordada 75/96 de la C.S.J.N., no priva a las partes de continuar con los diferentes actos procesales que conducirán la causa a su etapa final. La suspensión de la caducidad exige que la parte haya solicitado la devolución del expediente y el tribunal haya expresado su oposición, siendo innecesaria la reiteración (cfr. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sent. del 03.08.94, "García Lacerca, Federico c/ Llamas, Osvaldo").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45176, 30.09.97

"GUERRA, RAMONA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Resolución pendiente. Art. 313, inc. 3), C.P.C.C.

La solicitud de caducidad de instancia no puede tener favorable acogida cuando la cuestión encuadra en lo dispuesto por el art. 313, inc. 3), del C.P.C.C., que prescribe que no se producirá la caducidad "cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que éste Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero".

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67317, 29.12.97

"JULIO C. SUSPERREGUY S.A. c/ D.G.I."

(L.-F.-W.)

Transferencia masiva de causas. Notificación. Declaración de oficio. Improcedencia.

Las singulares circunstancias que culminaron con la masiva transferencia de causas que estaban tramitándose en la primera instancia del fuero Contencioso Administrativo (diversas acordadas tanto de la Corte Suprema como de la C.F.S.S.), llevan a concluir que el Juzgado Federal de la Seguridad Social interviniente, por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 135, inc. 15) del C.P.C.C., debió notificar por cédula la providencia que hace saber el nuevo juez que va a conocer. El hecho de que la notificación por cédula no se hubiera efectuado de oficio obsta a la caducidad dispuesta por el juez interviniente (cfr. Cám. Nac. de Apel. en lo Civ. y Com. Fed., Sala I, sent. del 28/12/93, "Tenas S.A. c/ SOMISA").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45265, 17.11.97
"ALMADA, MARÍA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S."
(M.-Ch.-D.)

COMPETENCIA

Conflicto negativo. Dec. ley 1285/58, art. 24, inc. 7). Interpretación.

La recta interpretación del inc. 7) del art. 24 del Decreto-ley 1285/58, en cuanto dispone que será la cámara de apelaciones del juzgado que previno la llamada a resolver el conflicto negativo de competencia que pudiere suscitarse, ha de entenderse circunscripta a los jueces involucrados en la controversia, con exclusión del órgano de alzada correspondiente al primer juzgado que hubiere tomado intervención en la causa si aquel ha quedado marginado de la cuestión.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67221, 04.12.97
"MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y OTROS c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI)"
(F.-L.-W.)

Conflicto negativo. Ley 24.655. Acordada N° 75/96 C.S.J.N.

Ante el conflicto negativo de competencia suscitado, y habida cuenta que las actuaciones no han tenido radicación ni en el Juzgado Nacional del Trabajo, ni el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ni tampoco en el Juzgado Federal de la Seguridad Social, atento las respectivas declaraciones de incompetencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley 24.655 y la Acordada N° 75/96 de la C.S.J.N., por razones de economía, celeridad y especialidad, corresponde asignar competencia al Juzgado Federal de la Seguridad Social para proseguir el trámite.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45310, 27.11.97
"FERNÁNDEZ, ÁNGEL c/ A.N.Se.S. "
(D.-M.-Ch.)

Incumplimiento contractual.

El reclamo por incumplimiento de un contrato celebrado entre el I.N.P.S. (antecesor de la A.N.Se.S.) y la actora es ajeno a la competencia de este fuero y constituye materia propia para el conocimiento de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67319, 29.12.97
"ASOCIACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES UNIDOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE TRABAJO - A.N.Se.S."
(F.-W.-L.)

Medida cautelar. Sucesorio. Fuero de atracción. Improcedencia.

El fuero de atracción del juicio sucesorio es, por definición, pasivo. Es decir, funciona respecto de demandas intentadas contra la sucesión, o sea, cuando ésta es demandada. En cambio, cuando los herederos ejercen acciones que hubieren correspondido al difunto, se aplican las reglas comunes de competencia (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, sent. del 01.06.79, "Casana, Oscar U. c/ Dalo Sur S.S."; Sala A, sent. del 14.11.67, "Dolheguy, Luis E. y otros"). En consecuencia, cuando lo solicitado por el titular es el despacho de una medida cautelar contra la A.N.Se.S., no es aplicable el fuero de atracción como excepción a las reglas de competencia, toda vez que la sucesión no actúa como actora ni como demandada, ni mantiene ningún grado de conexidad con el tema estrictamente previsional que se debate.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46052, 18.09.97

"SQUIAVONE, ANUNCIACIÓN ROSA c/ A.N.Se.S."
(H.-E.-F.)

Organismos del Estado. Reclamo pecuniario. Ley 19.983.

Cuando se está en presencia de una entidad en la que el Estado Nacional tiene interés y participación (en el caso, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica), resulta de aplicación lo dispuesto por la ley 19.983 que reglamenta las reclamaciones pecuniarias entre organismos del Estado, sometiendo a la potestad del Procurador del Tesoro de la Nación la decisión de tales controversias si no media acuerdo entre ellos (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 29.10.93, "Encotel c/ C.N.P.E. y S.S."). En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la C.F.S.S. para entender en la cuestión traída a su conocimiento. (Del voto del Dr. Fernández, en minoría).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71308, 05.09.97

"I.N.V.A.P. c/ D.G.I."

(E.-H.-F.)

Radicación. Acordada 75/96 C.S.J.N.

El art. 7 de la ley 24.655, en cuanto ordena el pase de las causas en trámite ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a los Juzgados de Primera Instancia de la Seguridad Social, sólo refiere a los trámites pendientes de resolución ante la primera instancia, ya que no existe ninguna disposición legal de la que se desprenda que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal pierda competencia, como instancia revisora, frente a las decisiones adoptadas por los jueces de su mismo fuero. En consecuencia, habiéndose declarado incompetente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal corresponde remitir las actuaciones a la C.S.J.N. a sus efectos.

C.F.S.S., Sala II, sent. 46051, 19.09.97

"MARTÍNEZ ZIVIRIA, HUGO y otros c/ ESTADO NACIONAL"

(H.-E.-F.)

Radicación. Acordada 75/96 C.S.J.N.

Si de las constancias de la causa se desprende que la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó sentencia y sólo queda pendiente de resolución el recurso de apelación, no cabe más que concluir que aquella se encuentra radicada ante dicho fuero y alcanzada por los términos del inc. b) de la Acordada 75 de la C.S.J.N. (26.11.96). En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la C.F.S.S. y remitir las actuaciones a la C.S.J.N.

C.F.S.S., Sala I, sent. 46051, 18.09.97

"MARTÍNEZ ZIVIRIA, HUGO y otros c/ ESTADO NACIONAL"

(H.-E.-F.)

Radicación. Acordada 75/96 C.S.J.N. Cámara de Apelaciones del Trabajo.

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 75 (26/11/96) estableció los parámetros a tener en cuenta a los fines de lo dispuesto en el art. 7 de la ley 24.655, a partir de esa fecha. En particular, y respecto a los expedientes radicados ante el fuero del trabajo, dicha acordada estableció una clara línea divisoria al decir que "Las causas continuarán tramitando ante los Tribunales en que se encuentren actualmente radicadas, hasta su completa terminación" (art. 2). En consecuencia, tratándose de una actuación que se encuentra comprendida en este supuesto, corresponde devolver las actuaciones a la Excma. Cámara Nacional Apelaciones del Trabajo, invitándola a reasumir su competencia o de lo contrario, remitirlas a la Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45474, 29.12.97

"TRIBARNE, LEÓN MIGUEL c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

COSTAS

Acción de amparo. Imposición al organismo. Cuestión abstracta.

Si la A.N.Se.S. con su mora dio lugar a la acción de amparo, en consecuencia, y pese a que la cuestión debatida se haya tornado abstracta, debe confirmarse la imposición de costas dispuesta por el Juez "a quo" a la accionada vencida.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46155, 13.10.97

"ABENDAÑO, ROSALIO c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Acción de amparo. Imposición al organismo administrativo.

Atento el especial régimen regulatorio en el que se encuadra la acción de amparo (ley 16.986), corresponde confirmar la decisión del "a quo" que impuso las costas al organismo administrativo. (Del voto del Dr. Herrero).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46341, 14.11.97

"PAZ, ALFREDO SABIEN c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Acción de amparo. Imposición al organismo administrativo.

No existen dudas que en la acción de amparo rige el principio general de que las costas "se imponen al vencido", ya que la propia ley 16.986 lo recepta en su art. 14. Ello no sólo se sustenta en un criterio de justicia distributiva, sino también en la convicción republicana que la ley, consecuencia de la soberanía popular, no se establece para ser cumplida únicamente por los ciudadanos, sino que cabe primordialmente el acatamiento pleno de sus disposiciones al Estado, ya que ella constituye un modo de limitar el poder autoritario en resguardo de los derechos individuales. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46341, 14.11.97

"PAZ, ALFREDO SABIEN c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Acción de amparo. Ley 24.463, art. 21.

No encuadrando el caso en las previsiones de la ley 24.463, resulta inaplicable al mismo el art. 21 de dicha normativa. La mención que efectúa el referido artículo sobre el modo en que se distribuirán las costas, no habilita una interpretación hartamente generosa y comprensiva de situaciones que escapen a las específicas connotaciones que dieron origen a la sanción de la norma. (Del voto del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46341, 14.11.97

"PAZ, ALFREDO SABIEN c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Acción de amparo. Ley 24.463, art. 21.

Si en una acción de amparo se concluyera que la ley 24.463 prevalece en su aplicación por sobre el principio general que en materia de imposición de costas contemplan tanto el Código ritual en su art. 68 como la propia ley 16.986, se vulneraría el art. 16 de la C.N. en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, y se lesionaría el derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente. (Del voto del Dr. Fernández)

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46341, 14.11.97

"PAZ, ALFREDO SABIEN c/ A.N.Se.S."
(H.-E.-F.)

Acción de amparo. Imposición. Organismo administrativo. Ley 16.986, art. 14.

Si bien el art. 14 de la ley 16.986 establece como regla que las costas se deben imponer al vencido, como modo de estímulo al cese de la "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" -cuya existencia es requisito del amparo- exime de las mismas si cesara el acto u omisión en que se fundó la presentación antes del plazo fijado para la contestación del informe previsto por el art. 8 de la ley citada. En consecuencia, si la conducta del organismo no se adecuó al eximente referido, no existe razón alguna para que no deba soportar las costas del juicio.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79439, 30.12.97

"ECHART, ULIVO ROBERTO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Amparo por mora de la administración. Imposición al organismo administrativo.

Si por la mora en que incurrió la A.N.Se.S. la recurrente se vio obligada a iniciar el amparo, corresponde confirmar la condena en costas que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del C.P.C.C., el "a quo" impuso al organismo. Ello así, toda vez que la aplicabilidad de las normas contenidas en el capítulo II de la ley 24.463 se limita al procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la A.N.Se.S., situación que no se configura cuando justamente lo que se pretende es obtener ese acto administrativo que permita seguir adelante con el trámite.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46293, 11.11.97

"ASSAYAS DE MALDONADO, MIRTA c/ A.N.Se.S."
(E.-H.-F.)

Amparo por mora de la administración. Ley 24.463, art. 21.

Conforme lo dispuesto por el art. 26, inc. e) de la ley 24.463 y los arts. 2, inc. d) y 4, inc. a) de la ley 24.655, el amparo por mora de la administración se encuentra comprendido en los términos de la ley 24.463. Siendo esto así, en materia de costas corresponde la aplicación del art. 21 de la ley de 24.463, que dispone que en todos los casos las costas serán por su orden.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45324, 27.11.97

"CHIODI, ISIDORO c/ A.N.Se.S."
(M.-Ch.-D.)

Amparo por mora de la administración. Ley 24.463, art. 21.

Resulta ajeno al alcance del art. 21 de la ley 24.463 el supuesto en que, quien formuló un reclamo en sede administrativa, se ve constreñido a urgir la resolución por la dilatada inactividad del organismo, y una vez vencidos los plazos legalmente previstos para que la administración se pronuncie -situación no subsanada siquiera ante el pedido de pronto despacho- lo obligó a iniciar el amparo por mora. Ello así pues, de lo contrario, quien reclama se vería doblemente afectado por el incumplimiento, toda vez que no podría acceder al derecho que pretende, ni ejercer la posibilidad que el art. 15 de la ley referida le acuerda de impugnar judicialmente una decisión adversa, por un lado; en tanto que para vencer la rémora administrativa debería asumir en forma exclusiva el pago de los honorarios correspondientes a su patrocinio letrado, circunstancia que, en muchos casos, le dificultaría o impediría la posibilidad misma de ejercer esta acción. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67328, 29.12.97

"LUONI, JORGELINA c/ A.N.Se.S."

(F.-L.-W.)

Amparo por mora de la administración. Ley 24.463, art. 21.

El art. 21 de la ley 24.463 no reconoce excepción alguna al principio de que las costas sean por su orden. Resulta evidente que el legislador ha privilegiado el interés de la masa de beneficiarios del sistema previsional en su conjunto, puesto que para el pago de las costas se sustrae una cantidad de dinero del fondo común utilizado para pagar los diversos beneficios que el sistema acuerda. La solución adoptada podrá ser materia de objeciones, pero la misma es propia de una valoración política a la que ha de sujetarse el magistrado, puesto que ella, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, es privativa del legislador. Por otra parte, ha de advertirse que si bien el art. 23 de la ley 24.463 faculta a los jueces para aplicar "sanciones pecuniarias" en el caso de los amparos por mora, dicho precepto se refiere al incumplimiento en término de las sentencias que se dicten en esas ocasiones y no al pago de las costas que la citada tramitación pueda haber originado. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67328, 29.12.97

"LUONI, JORGELINA c/ A.N.Se.S."

(F.-L.-W.)

Ejecución de sentencia

El principio general en materia de costas es que las mismas "se imponen al vencido". El fundamento del instituto y valor esencial sobre el cual se construye el principio radica en el hecho objetivo de la derrota, ya que las circunstancias subjetivas, la conducta observada en el litigio, su buena o mala fe, carecen de influencia para determinar la imposición de costas. Ello en virtud a que la aplicación de costas al vencido importa una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr. Morello, Sosa, Berizonce; "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires y de la Nación, comentados y anotados") pues, de otro modo, los gastos efectuados se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (cfr. C.N.A.Civ., Sala "E", sent. del 07.10.83, E.D. 108-147; ídem Sala "D", sent. del 24.02.84, L.L. 1984-C-158).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Ejecución de sentencia

En los procesos en que pretende el cumplimiento forzado por parte de la A.N.Se.S. de una sentencia que le ha sido desfavorable, no hay dudas que en el tema costas se debe aplicar el principio general de que "se imponen al vencido". El mismo no sólo se sustenta en un criterio de justicia distributiva, sino también en la convicción republicana que la ley -consecuencia de la soberanía popular- no se establece para ser cumplida únicamente por los ciudadanos, sino que cabe primordialmente el acatamiento pleno de sus disposiciones al Estado, ya que ella constituye un modo de limitar el poder autoritario en resguardo de los derechos individuales.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad.

Los procesos de ejecución de sentencia no encuadran en las previsiones de la ley 24.463 y, por ende, resulta inaplicable a los mismos la manda del art. 21. Es decir, la mención que efectúa el artículo señalado sobre el modo en que se distribuirán las costas, no habilita a una interpretación harto genero-

sa y comprensiva de situaciones que escapan a las específicas connotaciones que dieron origen a la sanción de la norma.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Ejecución de sentencia. Art. 68 C.P.C.C. Ley 24.463, art. 21.

La razonabilidad no es otra cosa que la proporción adecuada entre el medio elegido y el fin buscado. Si de la confrontación normativa entre el art. 68 y siguientes del C.P.C.C. y el art. 21 de la ley 24.463, se concluyera que éste prevalece en su aplicación por sobre el principio general que contempla el código ritual en materia de imposición de costas, se vulneraría el art. 16 de la C.N., en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, y se lesionaría el derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Excepciones. Rechazo. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad.

Rechazadas las excepciones de defecto legal e incompetencia planteadas por el organismo en la contestación de demanda, deviene en extremo injusto aplicar la directiva contenida en el art. 21 de la ley 24.463, ya que se trata de una hipótesis no alcanzada por las disposiciones del art. 15 de dicho cuerpo normativo.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46147, 13.10.97

"LIENDRO, JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(H.-F.-E.)

Imposición. Valoración. Ley 24.463, art. 21.

La imposición de las costas en un proceso se basa en una valoración justa, coherente y consecuente de las circunstancias, hechos y derechos debatidos en la litis. En consecuencia, no debe resultar de una decisión arbitraria o caprichosa, sino que debe atender a los mandatos constitucionales de afianzar la justicia, de igualdad ante la ley, de protección de la propiedad y de la defensa en juicio. Por ello, surgiendo en forma palmaria y evidente la intención dilatoria y contraria a derecho del planteo efectuado por el organismo administrativo, sería en extremo injusta la aplicación del art. 21 de la ley 24.463, máxime cuando las cuestiones en debate revisten naturaleza alimentaria, las que merecen una protección especial por mandato constitucional.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46292, 11.11.97

"DELL ACUA, OFELIA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Imposición. Ley 24.463, art. 21.

Sólo se impone la aplicación del art. 21 de la ley 24.463 cuando, a criterio del juzgador, sea legítimo el planteo efectuado por el perdedor.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46292, 11.11.97

"DELL ACUA, OFELIA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Impugnación de dictámenes de la C.M.C. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad.

Los casos en que se impugnan dictámenes de la Comisión Médica Central no encuadran en las previsiones de la ley 24.463 y, por ende, resulta inaplicable a los mismos lo dispuesto por el art. 21. La mención que efectúa dicho

artículo sobre el modo en que se distribuirán las costas, no habilita a una interpretación hartamente generosa y comprensiva de situaciones que escapan a las específicas connotaciones que dieron origen a la sanción de la norma referida.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71507, 14.11.97
"PEGASANO, AGUSTÍN FEDERICO c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Jubilación por invalidez. Ley 24.241, art. 49. Art. 68 C.P.C.C.

No configurándose el supuesto contemplado en el punto 4to. del art. 49 de la ley 24.241, debe aplicarse en forma supletoria el art. 68 del C.P.C.C., e imponer las costas a la parte vencida.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71446, 24.10.97
"VÁZQUEZ, FRANCISCO JAIME c/ A.N.Se.S."
(H.-E.-F.)

Jubilación por invalidez. Revocación de la decisión administrativa.

En los casos que se revoca la resolución del organismo administrativo que denegó la jubilación por invalidez, para la imposición de costas corresponde aplicar el principio rector en la materia, consagrado en el art. 68 del C.P.C.C.: que las costas "se imponen al vencido". Tal principio importa una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr. Morello, Sosa, Berizonce; "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires y de la Nación, comentados y anotados") pues, de otro modo, los gastos efectuados se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (cfr. C.N.A.Civ., Sala "E", sent. del 07.10.83, E.D. 108-147; ídem Sala "D", sent. del 24.02.84, L.L. 1984-C-158).

C.F.S.S., Sala II, sent. 71681, 30.12.97
"MÉNDEZ, JUAN MIGUEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Jubilación por invalidez. Revocación de la decisión administrativa. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad.

Los casos en que se revoca la resolución del organismo administrativo que denegó la jubilación por invalidez, no encuadran en las previsiones de la ley 24.463 y, por ende, resulta inaplicable a los mismos lo dispuesto por el art. 21. La mención que efectúa el artículo señalado sobre el modo en que se distribuirán las costas, no habilita a una interpretación hartamente generosa y comprensiva de situaciones que escapan a las específicas connotaciones que dieron origen a la sanción de la norma.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71681, 30.12.97
"MÉNDEZ, JUAN MIGUEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Jubilación por invalidez. Revocación de la decisión administrativa. Art. 68 C.P.C.C. Ley 24.463, art. 21.

La razonabilidad no es otra cosa que la proporción adecuada entre el medio elegido y el fin buscado. Si de la confrontación normativa entre el art. 68 y siguientes del C.P.C.C. y el art. 21 de la ley 24.463 se concluyera que éste prevalece en su aplicación por sobre el principio general que contempla el código ritual en materia de imposición de costas, se vulneraría el art. 16 de la C.N., en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, sin que halle justificación un tratamiento dispensatorio al vencido por la sola circunstancia de ser el Estado Nacional; habría lesión al derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente tan sólo por ser su contrario el Estado Nacional.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71681, 30.12.97
"MÉNDEZ, JUAN MIGUEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Ley 24.463, art. 21. Alcance.

El "hecho objetivo de la derrota" se encuentra consagrado en el art. 68 del C.P.C.C., norma que establece un principio general que debe ceder ante la especificidad del art. 21 de la ley 24.463. Al respecto tiene dicho la C.S.J.N. que "establecer un régimen específico de imposición de costas no resultaría violatorio de la igualdad ante la ley, del derecho de propiedad, ni del principio de reparación integral" (cfr. sent. del 19/12/89, "Estado Nacional c/ Textil Escalada S.A.").

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45324, 27.11.97
"CHIODI, ISIDORO c/ A.N.Se.S."
(M.-Ch.-D.)

Ley 24.463, art. 21. Interpretación estricta.

Una de las modificaciones que dispuso en forma original y novedosa la ley 24.463, fue que en todos los casos las costas serán soportadas por su orden (art. 21). Al ser una norma de excepción dentro del campo procesal, ya que le hace soportar parte de los gastos que una contienda judicial genera al vencedor, su interpretación debe ser estricta.

C.F.S.S., Sala I, sent. 79439, 30.12.97
"ECHART, ULIVO ROBERTO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Revocación de la decisión administrativa. Principio objetivo de la derrota.

No debe ser la naturaleza jurídica de la persona objeto del litigio - sea como reclamante, sea como demandado-, la índole del mismo - eminentemente oneroso -, o la finalidad perseguida - revisión de una resolución generalmente sancionatoria producto de una labor inquisitiva y controversial- la que justifique apartarse del principio objetivo de la derrota en materia de imposición de costas.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71681, 30.12.97
"MÉNDEZ, JUAN MIGUEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

Revocación de la decisión administrativa. Calidad de parte. Interés.

La administración no es ajena a la acción judicial puesta en marcha por el administrado cuando pretende la revisión de sus actos, ya que "el control judicial es el enjuiciamiento de la actividad administrativa por órganos independientes y sin subordinación... El administrado, en el control judicial, contienda con la Administración, como otra parte en forma de litigio y en relación de igualdad..." (cfr. Fiorini, "Derecho Administrativo", T. II, pág. 587 y ss.). Por ello, en esos supuestos, la administración es traída a juicio como sujeto pasivo de la pretensión del recurrente en cuanto órgano emisor de la resolución de que se agravia y cuya legitimidad cuestiona, resolución que es consecuencia de un procedimiento administrativo previo que necesariamente debe revestir todas las garantías del debido proceso. Tampoco puede discutirse que no exista en dicho ente administrativo interés en la sentencia que se dicte, pues en caso contrario, perdería sustento su vocación recursiva que le permite llegar, incluso, ante el Máximo Tribunal de Justicia.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71681, 30.12.97
"MÉNDEZ, JUAN MIGUEL c/ A.N.Se.S."
(F.-E.-H.)

DEMANDA

Ampliación. Procedencia.

Toda vez que la parte actora puede modificar la demanda antes que esta sea notificada, no puede entenderse que le esté vedado su ampliación previo al traslado (art. 331 C.P.C.C. al que remite el art. 486 del mismo ordenamiento).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45177, 30.12.96

"ASPIAZU, JOSÉ OSCAR c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Contestación. Ampliación de plazo. Art. 158 C.P.C.C.

Aún en la hipótesis de que el juzgador haya omitido aplicar el plazo para la contestación del traslado de la demanda en razón de la distancia, ello no es óbice para que la misma sea presentada dentro del lapso total que legalmente corresponde (art. 158 C.P.C.C.). La omisión de ampliar el plazo no obsta a la eficacia de la contestación de la demanda, toda vez que esa ampliación procede sin necesidad de decisión judicial expresa, porque es automática.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46625, 30.12.97

"GALVAN, ROSA DEL ROSARIO c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Contestación. Plazo. Ampliación. Art. 158 C.P.C.C.

La normativa del art. 158 del C.P.C.C. alcanza a toda diligencia que deba realizarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juez de grado o tribunal, de lo cual se sigue que es suficiente que concorra esa circunstancia para que la ampliación sea procedente, es automática. (conf. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial, Anotado, Concordado y Comentado", Tº II, pag. 115).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45408, 15.12.97

"AVELLANEDA, GERARDO NICOLÁS c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Contestación. Plazo. Ampliación. Art. 158 C.P.C.C.

Si en el perentorio plazo concedido por el Juez interviniente conforme lo normado por el art. 158 del C.P.C.C., no se contestó la demanda, se debe dar por perdida la facultad no ejercida oportunamente, resultando intrascendente que se haya presentado o no el escrito pidiendo la suspensión de términos, si en él ni siquiera se invoca la existencia de circunstancia alguna de las características previstas en el tercer párrafo del art. 157 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45408, 15.12.97

"AVELLANADA, GERARDO NICOLÁS c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Contestación. Plazo. Ampliación. Art. 158 C.P.C.C.

Si en el perentorio plazo concedido por el Juez interviniente conforme lo normado por el art. 158 del C.P.C.C., no se contestó la demanda, se debe dar por perdida la facultad no ejercida oportunamente, resultando intrascendente que se haya presentado o no el escrito pidiendo la suspensión de términos, si en él ni siquiera se invoca la existencia de circunstancia alguna de las características previstas en el tercer párrafo del art. 157 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45408, 15.12.97

"AVELLANADA, GERARDO NICOLÁS c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Contestación. Plazo. Ley 24.463, art. 24. Cómputo.

Si bien el plazo de seis meses para contestar demanda y ofrecer pruebas, que por única vez el art. 24 de la ley 24.463 otorgó a la A.N.Se.S., se trata de un plazo procesal, y como tal debería regirse por lo dispuesto por los arts. 152 y 156 del C.P.C.C., la propia ley señaló que debía contarse en meses y no en días, por lo cual el vencimiento opera conforme a los arts. 25 y 26 del Código Civil.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45321, 27.11.97

"FERNÁNDEZ DE GARCÍA, ANA OBDULIA c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Contestación. Presentación en otro juzgado. Error inexcusable.

La jurisprudencia ha expresado que es inexcusable el error consistente en presentar en otro juzgado o secretaría un escrito judicial vinculado a un expediente cuya radicación se encuentra claramente determinada en la notificación dirigida a la parte que lo cometió (cfr. C.N.A.Com., Sala B, sent. del 13.11.89, "Waisgrais, Claudio c/ Federación Patronal Coop. de Seg. Ltda.; sent. del 23.12.88, "Cristalería San Carlos S.A. c/ Berman Cristal S.R.L."; sent. del 03.04.79, "La Foresta S.C.A. c/ Jaro S.R.L."). En consecuencia, el error en que incurrió el organismo al presentar la contestación de demanda en un juzgado distinto al de la causa, dada su gravedad en orden a la perentoriedad de los plazos procesales y a la naturaleza preclusiva de la serie procesal, impide se la exima de la consecuencia negativas de su propia conducta irregular; resultando insuficiente argumentar "sobrecarga de trabajo", ya que ello es un factor inherente a la organización interna del organismo demandado, y cae bajo la responsabilidad de los funcionarios a quienes se encomienda su manejo.

C.F.S.S., Sala II, sent. 46048, 18.09.97

"BELGRANO, JULIO CESAR c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

Daños y perjuicios. Arts. 1067, 1069, 1072, 1078, 1113 y conc. Cód. Civil. Competencia del fuero civil.

La acción de daños y perjuicios promovida contra una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con motivo de una afiliación no voluntaria, fundada en los art. 1067, 1069, 1072, 1078, 1113 y conc. del Código Civil., es de competencia del fuero civil, ya que la responsabilidad endilgada deriva del hecho ilícito (art. 43, decreto-ley 1285/58; C.N.A.Civ., Sala "F", in re "Zamorano, Gabriel Enrique c/ Jacarandá S.A. A.F.J.P., sent. del 17-09-90).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45313, 27.11.97

"MULLER, HUMBERTO MARIANO c/ MÁXIMA S.A. A.F.J.P."

(M.-D.-Ch.)

Interposición tardía. Reapertura de la instancia.

La firmeza del acto administrativo que se deriva de la demanda interpuesta tardíamente, y por ello desestimada, no implica la imposibilidad de deducir un nuevo reclamo por la vía de reapertura de instancia, toda vez que los derechos de la seguridad social devienen irrenunciables por expreso mandato del art. 14 nuevo de la Constitución Nacional.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66942, 16.10.97

"GUARDIA, JOSÉ MARCELINO c/ A.N.Se.S."

(F.-L.-W.)

Ley 24.463, art. 15. Acogimiento voluntario. Competencia.

Habiéndose acogido la actora voluntariamente a lo normado en el art. 15 de la ley 24.463, sin objetar fundadamente la validez constitucional del art. 24 de ese cuerpo normativo -al cual se refiere el caso decidido por la C.S.J.N. "Hussar Otto c/ A.N.Se.S.", sent. del 10/10/96-, corresponde declarar la

competencia del Sr. Juez Federal interviniente para continuar entendiendo en la causa.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45181, 30.09.97

"VÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Ley 24.463. Acogimiento voluntario. Competencia.

Si al iniciar demanda y ofrecer prueba, el peticionante adecuó su pretensión voluntariamente y sin reservas ni cuestionamiento puntual alguno a las disposiciones de la ley 24.463, no es posible desconocer sus efectos (teoría de los actos propios). En consecuencia, no resulta de aplicación la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Hussar Otto c/ A.N.Se.S." (10/10/96), correspondiendo devolver las actuaciones al Juzgado de origen a fin de continuar su trámite.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45243, 03.11.97

"CARICATO, RAFAEL NORBERTO c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Notificación. Copias para traslado. Art. 120 C.P.C.C. Documentación en poder del organismo.

Si la circunstancia de que el expediente administrativo no haya sido aún acollarado a las actuaciones se debe a causas ajenas a la parte actora (en el caso, ésta notificó por oficio a la demandada del requerimiento, lo que fue reiterado al correrse traslado de demanda), le resulta inoponible la exigencia del art. 120 del C.P.C.C., toda vez que éste no obliga a acompañar copia para traslado de documentos que no se han presentado. Ello así, máxime cuando es el propio organismo quien, al tener en su poder las actuaciones administrativas, se encuentra en mejor situación para ejercer la defensa ya que nada le impide su consulta. En consecuencia, cabe concluir que la propia torpeza de la recurrente es la que le impide ejercer plenamente su defensa dentro de los plazos perentorios e improrrogables previstos por la normativa procesal que la ley 24.463 declara aplicable, por lo que corresponde confirmar la resolución del "a quo" que rechazó in limine el planteo de nulidad de la notificación por no haberse agregado copia de la resolución que se ataca en la demanda.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67172, 21.11.97

"GARABOA, RICARDO c/ A.N.Se.S."

(F.-W.-L.)

Notificación. Domicilio legal. A.N.Se.S. Nulidad. Improcedencia.

La posible invalidez de los actos del proceso deben juzgarse atendiendo a la finalidad que, en cada caso concreto, están destinados a satisfacer, de manera tal que la declaración de nulidad no procede cuando, aún siendo defectuoso, el acto ha logrado cumplir su objetivo. En consecuencia, la circunstancia de no haber sido notificada la demanda en el domicilio legal de la A.N.Se.S. sito en la Capital Federal, no puede llevar por si solo a privar de los efectos propios al acto; máxime si se considera que los recaudos exigidos tienden a hacer efectiva la garantía que asegura la posibilidad del correcto ejercicio de los derechos, y que los mismos se ven resguardados por el conocimiento real de la existencia del juicio (cfr. C.N.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 29.06.93, "Di Prospero, Mariana c/ Telefónica de Argentina"); circunstancia que resulta indudablemente acreditada en el caso de autos, ya que el organismo compareció en el proceso promoviendo el incidente de nulidad.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46366, 14.11.97

"TORRES, PEDRO ELISEO c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Notificación. Días y horas inhábiles.

La circunstancia formal de haber sido notificada la demanda en día y hora inhábil no puede llevar por sí sola a privar de efectos propios al acto de notificación, pues ello implicaría decretar la nulidad por la nulidad misma, la cual no existe.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46537, 30.12.97

"CORONA, LEONARDO c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Notificación. Días y horas inhábiles.

La indefensión debe concretarse en una situación de la cual fluya necesariamente la imposibilidad de la parte de hacer valer los derechos que le corresponden, quedando de esta manera sin protección y causándole un perjuicio irreparable. Dicha circunstancia no se configura por el sólo hecho de que la accionada haya sido notificada en día y hora inhábil, dado que ello no le impedía contestar la demanda.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46537, 30.12.97

"CORONA, LEONARDO c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Omisión de un recaudo procesal. Excesivo rigor formal.

Si bien es cierto que el art. 337 del C.P.C.C. en forma expresa faculta al Juez a rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, no lo es menos la naturaleza alimentaria de una pretensión previsional y los principios que informan el derecho de la Seguridad Social, cuyo carácter de irrenunciable e imprescriptible se encuentra dentro del marco de una disciplina regulada por disposiciones de orden público (cfr. arts. 14 bis. y 75, inc. 23 C.N. y C.F.S.S., Sala II, sent. del 27.09.95, "Hussar, Otto"). Por ello, resulta un excesivo rigor formal la denegación del acceso a la instancia judicial por omisión de un recaudo procesal (en el caso, no acreditación de la representación invocada en los términos de los arts. 46 y 47 del C.P.C.C.). Una postura contraria equivaldría a una evidente frustración en el ejercicio de derechos que cuentan con amparo constitucional.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46050, 18.09.97

"JEREZ DE ARAUJO, DORA c/ ESTADO NACIONAL - Ministerio de Defensa"

(H.-E.-F.)

Plazo. Ley 24.463, art. 15. Ley 19.549, art. 25 inc. a).

El plazo de caducidad de la acción a que alude el art. 15 de la ley 24.463, con remisión al art. 25, inc. a) de la ley 19.549, se computa contando 90 días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución de la A.N.Se.S. que dispuso la adecuación al trámite dispuesto por el referido art. 15 de la ley 24.463. (Del voto del Dr. Wassner).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67177, 21.11.97

"ORDOÑEZ, LEONCIO c/ A.N.Se.S."

(L.-W.-F.)

Plazo. Ley 24.463, art. 15. Interpretación.

Sin perjuicio de la defectuosa redacción del art. 15 de la ley 24.463 en cuanto introduce la confusa referencia al plazo de caducidad para demandar, se considera que la limitación temporal que allí se establece no resulta inconstitucional ni novedosa, habida cuenta que el art. 9 de la ley 23.473 cuanto el art. 14 de la ley 14.236, establecían plazos para recurrir que, en función del domicilio del demandante, podían resultar incluso menores al ahora vigente. Así las cosas, la desafortunada mención del término caducidad habrá de entenderse como una equívoca referencia del legislador a la perentoriedad del plazo para demandar, y no como una absoluta imposibilidad de volver a accionar en defensa del derecho cuyo reconocimiento se pretende.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66942, 16.10.97
"GUARDIA, JOSÉ MARCELINO c/ A.N.Se.S."
(F.-L.-W.)

Reajuste. Liquidación. Excepción de defecto legal. Improcedencia.

Resulta absurdo pretender que quien demanda se vea constreñido a precisar el importe reclamado sin tener a su alcance las constancias del trámite administrativo en el que obran los datos y cálculos practicados por el organismo para la determinación de su importe. Así las cosas, contrariamente a lo insinuado por la parte demandada -que tiene en su poder aquel expediente-, es ella la que se encuentra en mejor situación para ejercer su defensa ya que nada le impide consultar esas actuaciones, sin que se vea afectada a su respecto la garantía del debido proceso por la omisión que ataca, ni sea necesario que el juzgado requiera la remisión de aquellas como medida previa al traslado de la demanda. En consecuencia, cabe concluir que la propia torpeza de la parte recurrente es la que le impide ejercer plenamente su defensa dentro de los plazos perentorios e improrrogables previstos por la ley 24.463 y, por ello, corresponde rechazar la excepción de defecto legal opuesta. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Wassner).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67017, 24.10.97
"CEPEDA, EUSEBIO RAMÓN c/ A.N.Se.S."
(F.-W.-L.)

Reajuste. Liquidación. Excepción de defecto legal. Improcedencia.

Aún no compartiendo que la actora se halle imposibilitada para determinar, al menos aproximadamente, el monto del reajuste que reclama, corresponde rechazar la excepción de defecto legal opuesta por el organismo ya que la misma -contemplada en el art. 347, inc. 5) del C.P.C.C.- es procedente cuando nos hallamos frente a defectos de tal gravedad que colocan al demandado en estado de indefensión, impidiéndole oponer las defensas adecuadas o producir las pruebas que considere pertinentes; y en el caso, el organismo ha contestado la demanda y ha podido desarrollar las argumentaciones en las que basa su defensa, proponiendo los medios probatorios tendientes a resguardar su derecho y el patrimonio común de los beneficiarios del sistema que administra. (Del voto del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67017, 24.10.97
"CEPEDA, EUSEBIO RAMÓN c/ A.N.Se.S."
(F.-W.-L.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Acción de amparo. Procedencia.

Procede el ejercicio de la acción de amparo a tenor del art. 43 de la Constitución Nacional cuando el interesado persigue el cobro de un crédito reconocido por sentencia firme. Dicho remedio procesal no puede tener carácter residual sino que debe considerárselo la vía principal y excluyente de otras carentes de celeridad, cuando se advierte la existencia de un accionar arbitrario e ilegítimo.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46022, 02.09.97
"SGHEZZO, IRMA c/ A.N.Se.S."
(E.-H.-F.)

Excepción de defecto legal. Improcedencia. Art. 506 del C.P.C.C.

No corresponde acoger la excepción previa de defecto legal en un proceso de ejecución de sentencia, por no encontrarse contemplada entre las que enumera el art. 506 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45278, 17.11.97
"VON FEHLEISEN, CELESTINO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Excepción de defecto legal. Improcedencia.

En el trámite que corresponde aplicar a las ejecuciones de sentencias previsionales -art. 499 del C.P.C.C.- (Cap. I "Sentencias de Tribunales Argentinos - Resoluciones Ejecutables) las únicas excepciones legitimadas son las que prevé el art. 506, a cuyo respecto, si bien doctrinaria y jurisprudencialmente se amplió el criterio de taxatividad, lo fue solamente frente a las destinadas a controlar la regularidad del contradictorio (capacidad, personería, competencia) así como el defecto de legitimación para obrar (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Concordado, T. II, pág. 626). Por ello, no encontrándose contemplada la excepción previa de defecto legal en el artículo referido, corresponde su desestimación.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45427, 22.12.97
"FERRER, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S."
(M.-D.-Ch.)

Excepción de pago. Prueba. Art. 506, inc. 3) C.P.C.C.

Respecto a la excepción de pago contemplada por el art. 506, inc. 3) del C.P.C.C., la doctrina ha sostenido que la misma se probará por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlo (doct. art. 507). Es decir, el pago debe ser documentado (cfr. Finochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Concordado", T. II, pág. 625). En consecuencia, no surgiendo del expediente constancia alguna que avale los dichos del accionado, la excepción debe ser desestimada.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45278, 17.11.97
"VON FEHLEISEN, CELESTINO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Excepción de pago. Acreditación. Pago total.

Para que proceda la excepción de pago, debe probarse éste por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirla. Es decir, el pago debe ser documentado. Además, cabe destacar que cuando se trata del pago de una condena, el mismo debe ser total, pues de no ser así existirá la insatisfacción del derecho del vencedor. Ello por cuanto la norma de aplicación (art. 506, inc. 3, C.P.C.C.) sólo se refiere al "pago" sin hacer la distinción de "pago total o parcial" como prevé el art. 544, inc. 6) del mismo cuerpo normativo (cfr. C.N.A.Civ., Sala F, sent. del 08.01.81, L.L. 1981-C-359). En consecuencia, no estando acreditado debidamente el pago total que exige el código de rito para la admisibilidad de la excepción, ésta debe ser desestimada, sin perjuicio de tenerse en cuenta los pagos efectuados por la demandada en oportunidad de practicarse la liquidación definitiva.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45427, 22.12.97
"FERRER, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S."
(M.-D.-Ch.)

Liquidación. Intimación. Recursos. Apelación. Efecto diferido.

Intimado el organismo a confeccionar liquidación de lo adeudado al peticionante y rechazada la revocatoria intentada, el recurso de apelación -de ser procedente- deberá concederse con efecto diferido, hasta tanto no haya pro-

nunciamento final del Juez de grado sobre la liquidación ordenada según sentencia (cfr. art. 509, 2do, párrafo, C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45277, 17.11.97

"TORRE, NORMA RAQUEL c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

Liquidación. Consolidación de deuda. Ley 23.982.

La liquidación consiste en realizar el ajuste formal de una cuenta, de modo de hacer apreciable en una cantidad concreta y determinada valores que no tienen tal carácter (Cfr. Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. III, pág. 506 y ss.). En consecuencia, no se advierte que la resolución del "a quo" que intima a la A.N.Se.S. a practicar liquidación del crédito del titular resulte violatoria de la Ley de Consolidación de Deudas del Estado (23.982), ni de sus modificatorias, toda vez que la finalidad perseguida es determinar aquél monto conforme los términos de la sentencia judicial.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Liquidación. Consolidación de deuda. Ley 23.982. Decretos 2140/91 y 1639/93. Res. M.E.y O.S.P. 1463/91.

La Ley de Consolidación de Deudas del Estado (23.982) prevé, junto con las normas que lo integran (Dec. 2140/91, Res. M.E.y O.S.P. n° 1463/91 y Dec. 1639/93) un procedimiento para el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconozcan la existencia de obligaciones alcanzadas por la consolidación. Ello en virtud de que "la aplicación del régimen de consolidación no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales declarados por sentencia firme, sino que sólo limita temporalmente su percepción" (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.05.96, "Luchetta, Rodolfo"; ídem, sent. del 10.12.96, "Antedoro, Antonio"). Dicho procedimiento regula una serie de actos que, concatenados, tiende al efectivo pago de la deuda, y de ellos, la liquidación del crédito resulta ser el primer paso (cfr. art. 5, ley 23.982).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Liquidación. Limitación de recursos. Ley 24.463, arts. 16 y 17.

La defensa de limitación de recursos (arts. 16 y 17 de la ley 24.463) no resulta obstáculo para que la A.N.Se.S. cumpla con la liquidación ordenada en un proceso de ejecución de sentencia, motivo por el cual no corresponde su tratamiento en ese estadio procesal.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46139, 13.10.97

"PÉREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Liquidación. Exigibilidad de pago. Normas eximentes.

No obsta a la prosecución del trámite de ejecución de sentencia el hecho de que la obligada a su cumplimiento invoque normas que la eximan de la exigibilidad del pago de la deuda reconocida por sentencia. Por el contrario, tiene la ejecutante derecho a obtener una liquidación ajustada a los términos de la sentencia, con independencia del momento en que la misma se haga efectiva.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45325, 01.12.97

"GERMAN, ARON c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Nomen juris. Prescendencia.

Cuando lo que se persigue es que la A.N.Se.S. dé cumplimiento a lo decidido por sentencia de la Cámara, la vía apropiada para corregir tal conducta es el proceso de ejecución (arts. 499 y sig. del C.P.C.C.) que permitirá lograr la tutela de los derechos que se dicen vulnerados, y no la acción de amparo. En consecuencia, habiendo tenido la sentencia de marras principio de ejecución, y conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "... para no afectar el objetivo principal del beneficio reconocido, puede aquí prescindirse válidamente del nomen juris utilizado por el jubilado para interponer su acción y atender a la real sustancia de la solicitud mediante la ejecución de sentencia ... máxime cuando el juez a quien se solicitó el amparo es el competente para entender en la ejecución de los créditos previsionales" (Fallos 310:1378).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45247, 03.11.97

"GIRAULT, MARÍA LETICIA c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Prescripción. Plazo aplicable. Art. 4023 Cód. Civil.

Respecto a la prescripción de la ejecutoria, no existiendo un texto legal expreso y tratándose de una pretensión personal, le es aplicable el plazo de diez años establecido por el art. 4023 del Código Civil (conf. Manual de Derecho Procesal Civil, Lino E. Palacio, pág. 683).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45278, 17.11.97

"VON FEHLEISEN, CELESTINO c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

EJECUCIÓN FISCAL

Recursos. Apelación. Improcedencia. Ley 11.683, art. 92. Ley 23.658, art. 34, inc. 11).

Habida cuenta que el art. 92 de la ley 11.683 -a partir de la reforma introducida por el art. 34, inc. 11) de la ley 23.658- establece la inapelabilidad de la sentencia de ejecución, el recurso de apelación ha sido bien denegado por cuanto admitir la revisión del mérito de lo resuelto importaría desconocer la prohibición establecida por la norma de referencia (conf. Podetti, J. Ramiro, "Tratado de las ejecuciones", Edición ampliada y actualizada por Víctor A. Guerrero Leconte, pag. 640; C.N.A.C.A.F., Sala I, in re "F.N. (D.G.I.) c/ Tadenay", sent. del 28-7-93; ídem Sala II, in re "F.N. c/ Mariano Caffiero S.A.", sent. del 19-5-94; "Fisco Nacional -D.G.I.- c/ Apholos S.A.I.C.F.I.", sent. del 19-11-96, entre otros).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45418, 22.12.97

"FISCO NACIONAL -D.G.I.- c/ KAVULAKIAN COMUNICACIONES S.A."

(Ch.-D.-M.)

ESCRITOS

Cargo. Instrumento público. Art. 993 Código Civil.

Dado que el cargo colocado al pie del escrito reviste las características propias de un instrumento público, hace plena fe hasta que sea argüido de falso (art. 993, Código Civil).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67254, 17.12.97

"CO-VI COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

EXCEPCIONES

Inhabilidad de título. Defecto formal. Improcedencia.

No procede la excepción de inhabilidad de título cuando existe un defecto puramente formal o una omisión menor, no habiéndose negado la autenticidad de los documentos (cfr. C.N.A.Com. Sala "A", L.L. 123-999, sum 14143, citado por Falcón, Enrique en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado, Concordado y Comentado", T. III, pág. 686), ni tampoco cuando consiste en la alegación de que median diferencias entre los nombres de las partes y los que figuran en el título, si aquéllas son pequeñas y puede inferirse, sin lugar a dudas, la identidad de la persona y del ejecutante (cfr. C.N.A.Com. en pleno, 27.02.75, L.L. 1975-B-136, citada por Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. II, pág. 768).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45997, 21.04.98

"OBRA SOCIAL DE PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ ALOI, DANIEL Y OTRO"
(M.-D.-Ch.)

Previo y especial pronunciamiento. Art. 347 C.P.C.C. Carácter taxativo.

Las excepciones de pago y prescripción no se encuentran entre las de previo y especial pronunciamiento que, taxativamente, contempla el art. 347 del C.P.C.C. (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 26.09.97, "Mazza, Angela Martina). En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el "a quo" al decidir que tales defensas debían ser tratadas al momento de dictarse la sentencia definitiva, porque era conveniente analizar el resultado de las pruebas ofrecidas por las partes relativas al fondo del reclamo.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45340, 03.12.97

"CURCIO, CELIA c/ A.N.Se.S."

(D.-Ch.-M.)

HONORARIOS

Amparo por mora de la administración. Base regulatoria.

No cabe atender al monto del proceso denunciado a los fines de la base regulatoria de los honorarios, ya que por tratarse de una acción de amparo por mora, la condena sólo puede estar limitada al pronto despacho de las actuaciones administrativas (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala III, sent. del 20.12.94, "Garnica, Angel c/ Director de Contaduría Gral. del Ejército).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46180, 27.10.97

"ARENAS, AURELIO c/ A.N.Se.S."

(H.-F.-E.)

Amparo por mora de la administración. Regulación.

No corresponde a la C.F.S.S. expedirse sobre el pedido de regulación de honorarios formulado por el letrado de la parte actora (en el caso, en un amparo por mora de la administración), aspecto que ha de ser resuelto, en instancia originaria, por el juzgado interviniente.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67310, 29.12.97

"LÓPEZ, DELFINA ROSA c/ A.N.Se.S."

(F.-W.-L.)

Ejecución. Competencia. Ley 24.655.

Habiendo intervenido el Tribunal en el proceso principal, resulta competente para entender en la ejecución de honorarios solicitada por el letrado patrocinante del actor (art. 6, inc. 1 y 501 del C.P.C.C.). No obstante, con el advenimiento de la ley 24.655, y la consecuente creación de la Primera Instancia de la Seguridad Social, es ésta quien debe intervenir en razón del grado.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45315, 27.11.97
"TRABICETT, GLORIA ELISA c/ RUSSO, DANIEL"
(D.-Ch.-M.)

INHABILIDAD DE INSTANCIA

Declaración de oficio. Improcedencia.

La declaración de oficio de la inhabilidad de instancia viola las garantías de los arts. 17 y 18 de la C.N., al alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de una de las partes pues, como lo ha dicho el Alto Tribunal, "la denegación de la instancia contencioso administrativa sólo resulta admisible en aquellos supuestos en que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción sean planteados por la demandada, dentro de los términos y por la vía que a tal efecto dispone el ordenamiento formal" (cfr. "Cohen, Rafael c/ Instituto Nacional de Cinematografía", sent. del 13.0.3.90).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 46099, 24.04.98
"MAGNELLO, JOSÉ ALBERTO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Facultad del organismo. Devolución del escrito. Resolución denegatoria. Demanda. Ley 24.013, art. 15.

El derecho a peticionar es el más absoluto que puede concebirse, porque supone en el que peticiona la convicción de que la autoridad a quien se dirige tiene plena facultad para acordar o negar lo solicitado. Por ello, ante un pedido de reajuste del haber previsional, si bien la A.N.Se.S. tiene competencia para dictar la resolución y para delegar la misma en los jefes de las mesas de entrada (art. 3 del Dec. 2741/91 y art. 36 de la ley 24.241), lo cierto es que la devolución de escrito implica una resolución denegatoria, toda vez que no da curso al reclamo del peticionario. Ahora bien, si en uso de facultades delegadas la Jefa de Mesa de Entradas de la Unidad correspondiente emite una resolución denegatoria -es decir, actuando en el marco de la ley vigente y adoptando conductas jurídicamente relevantes-, no es posible desconocer sus efectos (teoría de los actos propios) y, en consecuencia, corresponde revocar la resolución del "a quo" que declaró inhábil la instancia por no mediar pronunciamiento expreso de la A.N.Se.S., tal como a su entender, exige el art. 15 de la ley 24.463.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 46099, 24.04.98
"MAGNELLO, JOSÉ ALBERTO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Improcedencia. Ley 24.463, art. 15, último párrafo. Ley 24.655.

El último párrafo del art. 15 de la ley 24.463 mantuvo su redacción no obstante la reforma introducida por la ley 24.655, ya que el legislador consideró que la decisión de la A.N.Se.S. es la condición suficiente para habilitar la posibilidad de su impugnación judicial. En consecuencia, existiendo una resolución de la A.N.Se.S. que la accionante entiende le causa agravio, el derecho a reclamar judicialmente contra la misma no está condicionado al cumplimiento de otros requisitos más que los que la propia ley impone (cfr. C.F.S.S., Sala I, "Fernández, Jorge Alfredo c/ A.N.Se.S.", sent. int. 44904).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45296, 27.11.97
"GELOSO, AMELIA c/ A.N.Se.S."
(D.-Ch.-M.)

Reajuste del haber previsional. Ausencia de resolución administrativa.

El hecho de que no haya recaído resolución administrativa ante el reclamo por reajuste del haber previsional, y que el interesado no haya instado la decisión mediante la deducción del amparo por mora al que se encontraba habilitado, impide que la justicia tome intervención en autos, pues de esa manera se estaría permitiendo obviar instancias regulares que han sido establecidas dentro de un modelo que no tolera alteración alguna sin comprometer el adecuado desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Dicho principio no fue alterado por la entrada en vigencia de la ley 24.463, ya que las modificaciones por ella introducidas no hacen sino ratificar aquél por cuanto conforme su art. 15, la demanda a deducir ante la justicia federal presupone el dictado de una resolución expresa en sentido contrario a las pretensiones que se quieren hacer valer. En consecuencia corresponde declarar la inhabilidad de la instancia judicial y devolver las actuaciones al organismo de origen para su agregación al principal.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67063, 30.10.97

"FIGUEROA DE LA VEGA, FRANCISCO MARÍA c/ A.N.Se.S."

(F.-W.-L.)

LEY 24.463

Art. 16. Peritos. Procedencia. Momento oportuno.

La medida pericial requerida por el organismo con sustento en el art. 16 de la ley 24.463, podrá ser objeto de consideración recién ante un eventual proceso de ejecución de sentencia. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45505, 30.12.97

"PIOTTE, OSCAR LEÓN c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Limitación de recursos. Prueba. Peritos. Art. 17. Procedencia. Sentencia definitiva.

No puede dejar de vincularse el art. 17 de la ley 24.463 con lo dispuesto por el art. 22 de la misma normativa, en orden a que las sentencias serán cumplidas dentro de los 90 días de notificadas hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en que venciera dicho plazo. De allí, cabe razonablemente concluir que el referido art. 17 presupone para su aplicación la existencia de una sentencia definitiva que reconozca el crédito reclamado, y que se encuentre firme y consentida, pues sólo en ese momento tendría sentido evaluar si, en las particulares circunstancias del caso, la prueba legal respecto de la limitación de recursos puede o no ser admitida (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 27.02.97, "Gómez, Juan Antonio"). Por ello, la dilucidación del planteo de inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 24.463 en la actualidad deviene abstracto, lo cual está vedado a los jueces (Fallos 263:83; 264:53; 301:991; 304:759). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45505, 30.12.97

"PIOTTE, OSCAR LEÓN c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Limitación de recursos. Prueba. Peritos. Art. 17. Inconstitucionalidad.

La C.S.J.N. ha dicho que los peritos son "auxiliares de la Justicia en el más riguroso sentido", pues "tienen a su cargo la específica misión de ilustrar técnicamente al juez en cuanto concierne al desempeño de su función" (Fallos 208:3311), y que "el perito como auxiliar de la justicia es ajeno a la situación de las partes" (Fallos 291:534). De dicho carácter de auxiliar de justicia se deriva que el perito actúa en el campo de la función pública, siendo al-

canzado por las garantías de independencia e imparcialidad, común a todos los sujetos que integran el órgano jurisdiccional (ver "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado" de Fenochietto-Arazi). Por ello, corresponde confirmar la sentencia del "a quo" en cuanto califica de "intromisión" la imposición de peritos designados fuera de las formas establecidas por el Poder Judicial, y declara la inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 24.463. (Disidencia del Dr. Díaz).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45505, 30.12.97

"PIOTTE, OSCAR LEÓN c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Procedimiento aplicable.

Una interpretación armónica y razonable lleva a concluir que con la sanción de la ley 24.463 y la consecuente federalización de la Cámara de la Seguridad Social, el procedimiento aplicable a esos procesos es el regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aún cuando no haya norma expresa en tal sentido, y no el procedimiento laboral que -además de encontrarse derogado- resulta una regulación de carácter local.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67254, 17.12.97

"CO-VI COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

LITISCONSORCIO

Litisconsorcio activo. Rechazo. Apelación. Improcedencia.

Toda vez que la resolución que rechazó el litisconsorcio activo y fijó un plazo de veinte días para que se promueva demanda por cada uno de los actores bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos del proceso -adaptación para la que deberá procederse de acuerdo con lo dispuesto por el punto II del Acta de Acuerdos Generales de la C.F.S.S. nro. 164 del 5/6/97-, no constituye una cuestión que se encuentre incluida entre los supuestos de apelabilidad contemplados por el art. 496 C.P.C.C. para procesos sumarios -habida cuenta de la expresión "únicamente serán apelables..." con que se inicia su texto-, el recurso ha de ser considerado formalmente no admisible. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66937, 16.10.97

"ABATE, CARLOS MARÍA y OTROS c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Litisconsorcio facultativo. Finalidad. "Hechos comunes". Procedencia.

Si bien, en principio, se puede hablar de autonomía de los sujetos procesales que constituyen el litisconsorcio facultativo (los actos de unos no aprovechan a los demás ni los perjudican), no ocurre así cuando sean "hechos comunes" que tengan que ser examinados respecto de todos, porque no es posible que el juez se convenza de la verdad de un hecho en relación a unos y no con referencia a los otros (cfr. C.N.A.Civ., Sala D, 29.12.78, E.D. 82-150; íd., Sala C, 27.10.69, L.L. 138-937). En consecuencia, cuando la dilucidación del hecho controvertido puede ser determinante para ratificar o rectificar la decisión del organismo administrativo, en la inteligencia de que el fundamento de la acumulación subjetiva de pretensiones es evitar sentencias contradictorias y una actividad jurisdiccional innecesaria (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, 27.05.81, L.L. 1981-D-96; C. 4ta.Civ. y Com. Córdoba, J.A. 17-1973-666), corresponde admitir la acumulación de los procesos solicitada.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46515, 30.12.97

"RIGATTIERI DE REIG, ALICIA ESTELA c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Litisconsorcio. Recursos. Apelación. Improcedencia. Art. 496 C.P.C.C.

El art. 496 del C.P.C.C. enumera taxativamente las resoluciones posibles de apelación, no entrándose entre ellas la que rechaza la oposición a la acumulación de acciones conforme lo dispuesto en los art. 87 y 88 del código citado.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45299, 27.11.97

"CLINGO, MARÍA CRISTINA c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

MEDIDAS CAUTELARES

Acto administrativo. Presunción de legitimidad. Derechos de naturaleza alimentaria.

Si bien en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria -lo que trae aparejado, en principio, que los recursos judiciales mediante los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecución de tales actos-, es posible admitir que en determinados casos y cumplidos ciertos requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentre un adecuado equilibrio en la suspensión cautelar de dichos actos administrativos, como son aquellos en los que el derecho en debate es de naturaleza eminentemente alimentaria (cfr. C.N.Cont.Adm.Fed., Sala V, "Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia de la Nación", sent. del 22.11.96).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45283, 17.11.97

"BRIZUELA CABRAL DE LOZADA, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Proyecto de ley. Cuestión futura. Improcedencia.

Dentro de nuestro sistema positivo, las nuevas leyes que se dicten por el Congreso no pueden afectar un derecho adquirido, so pena de ser calificadas de inconstitucionales (arts. 17 C.N. y 3 Cód. Civil). En consecuencia, el argumento de que habría en trámite ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que podría perjudicar a los recurrentes carece de sustento jurídico, máxime teniendo en cuenta que su pretensión sería la de alterar los efectos de una modificación legal, y sabido es que las medidas cautelares no pueden dictarse para trabar la acción y/o gestión de los Poderes del Estado ejercitados de conformidad con las normas constitucionales.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46027, 02.09.97

"IOVINE, HUMBERTO V. Y OTROS c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro"

(F.-H.-E.)

NOTIFICACIÓN

Plazos procesales. Perentoriedad. Notificaciones por ministerio de la ley. Art. 133 C.P.C.C.

La perentoriedad de los plazos procesales para cumplir con determinados actos de igual naturaleza no está en relación con los montos dinerarios que en ellos se debaten, y quien asume la representación procesal debe afrontar todas las responsabilidades que las leyes le imponen, entre las que se encuentra la carga de asistir al juzgado o tribunal los días en que se tienen por

producidas las notificaciones por ministerio de la ley en los términos del art. 133 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67254, 17.12.97

"CO-VI COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Recepción. Validez.

Carece de sustento fáctico la afirmación de no haber recibido la notificación, si de las constancias de autos se desprende que la cédula fue recepcionada por el encargado del edificio, quien manifestó que la requerida vivía allí y, en virtud de ello, se le entregó copia de aquélla. En consecuencia, no planteada la nulidad en los términos del art. 149 del C.P.C.C., debe tenerse por válida la notificación.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45475, 29.12.97

"FRANCALANCIA, ERNESTO c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

OBRAS SOCIALES

Apremio. Título ejecutivo. Inhabilidad. Ley 23.660, art. 24.

La habilidad del título ejecutivo por cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales en el juicio de apremio, es viable siempre que el título emitido por aquéllas sea el producto de un procedimiento previo de naturaleza publicística, de manera que el mismo tenga en su origen en el acta de inspección y en el procedimiento que se tramita en su consecuencia; es decir que el título no puede ser producto del voluntarismo sino que conlleva una instrucción con fundada pretensión de objetividad (cfr. P.G.T., dictámenes Nros. 11.754 "Obra Social para el Personal de la Industria de la Alimentación c/ El Tibidavo SRL" del 28.02.90; 12.121, "Obra Social para el Personal de Entidades Deportivas y Civiles c/ A. Bergez Villa Club" del 05.07.91 y C.N.A.T., sent. del 19.10.92, "OSPERYHA c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Honduras 3733/37"). En igual sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ha dicho que "procede la excepción de inhabilidad de título ... al no cumplirse con el procedimiento previo bilateral que prevé la ley 18.820, que es necesario para la confección del certificado de deuda..." (sent. del 13.02.95, "A.N.Se.S. -hoy D.G.I.- c/ Millán, Juan J.). En consecuencia, no surgiendo de autos que el título con que se inició la ejecución haya sido el producto final del trámite previsto en el art. 24 de la ley 23.660 y las reglamentaciones pertinentes (ley 18.820; art. 21 del Dec. 576/93, Res. A.N.Se.S. 877/92 -actualmente Res. A.N.Se.S. 1287/97- y Res. Gral. A.F.I.P.-D.G.I. 79/98), cabe concluir que es inhábil para dar sustento a la ejecución intentada.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45997, 21.04.98

"OBRA SOCIAL DE PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ ALOI, DANIEL Y OTRO"

(M.-D.-Ch.)

Apremio. Título ejecutivo. Inhabilidad. Ley 23.660, art. 24. Art. 604 C.P.C.C.

El art. 24 de la ley 23.660 remite a la vía del apremio prevista en el art. 604 del C.P.C.C., constituyendo suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las Obras Sociales o los funcionarios en que aquellas hubieran delegado esa facultad (cfr. Res. I.N.O.S. n° 475). Dicho procedimiento, dentro de la teoría general del juicio ejecutivo, se concibe como un trámite de verificación restringido en el cual, dado su limitado ámbito de conocimiento, se debe excluir todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco,

admitiéndose únicamente como defensas al progreso del juicio, las deficiencias formales del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa (cfr. arts. 544, inc. 4, 605 y conc. C.P.C.C.). No obstante ello, el examen amplio de la excepción de inhabilidad de título en los juicios de apremio fue reconocido desde antiguo por la doctrina y la jurisprudencia (cfr. Podetti, J. Ramiro, "Tratado de las Ejecuciones", 2da. Edición, T. VII-B, pág. 2331).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45997, 21.04.98

"OBRA SOCIAL DE PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ ALOI, DANIEL Y OTRO"
(M.-D.-Ch.)

Encasillamiento. Trabajadores en actividad. Competencia. Justicia laboral.

Desde sus orígenes, el encasillamiento del trabajador en una obra social determinada ha estado vinculada al sindicato con personería gremial firmante del convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad (ley 18.610), principio éste que, con variables, se ha mantenido hasta la actualidad. Ello así, habida cuenta que los afectados serían trabajadores dependientes en actividad, la íntima vinculación existente entre encuadramiento sindical de los trabajadores y el de obra social -sin perjuicio de los derechos de opción que podrían estar convirtiendo en abstracta la presentación-, lo dispuesto en los arts. 29 de la ley 23.660, 62 de la ley 23.551 y 21 de la ley 18.345, la intervención de la C.N.A.T. y el criterio sustentado por la C.S.J.N. en cuanto a que "las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias, cuando de recursos se trata, son indicativos de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta" (cfr. sent. del 01.09.92, "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Martínez Echenique, Benjamín"), lleva a concluir que será la Justicia Laboral ante quien deberá dilucidarse el conflicto.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45303, 27.11.97

"NACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. c/ I.N.O.S."
(D.-M.-Ch.)

Competencia. Ley 24.655, art. 2, inc. f). Ley 23.660, art. 24.

El art. 2, inc. f) de la ley 24.655 establece que los juzgados por ella creados serán competentes para conocer en las causas actualmente asignadas a la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo por el art. 24 de la ley 23.660. En orden a esta última disposición legal ha sentado la doctrina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "O.S.E.C.A.C. c/ Pascaner, Mauricio", sent. del 26/10/93, en el sentido que si bien dicha norma faculta la acción por vía de apremio prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ello no impide la elección de la vía ordinaria por la obra social actora. Se destaca sobre el particular que la competencia del Juez Federal se da en razón de materia -en virtud del citado art. 24 de la ley 23.660- que debe prevalecer en los casos en que se persigue el cobro de aportes y contribuciones (ver Dictamen del 1/9/93 del Procurador General de la Nación).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45160, 30.09.97

"OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA c/ PALADINO, ANGELA AURORA"
(M.-Ch.-D.)

Impugnación de deuda. Recaudación. Centralización. C.U.S.S. Recursos. Revisión judicial.

A partir de la creación de la C.U.S.S. (Dec. 2284/91) se ha centralizado la recaudación de todos los recursos. Actualmente esa responsabilidad la tiene

la D.G.I., quien comparte con las Obras Sociales -por razones que no aparecen claramente explicitadas- tareas de fiscalización y ejecución de los aportes y contribuciones que tienen a estas como sus destinatarias finales, sin perjuicio de estar sometidas en su accionar a la supervisión de aquélla. En el marco de esa singular delegación (dispuesta al margen de las previsiones del Dec. 507/93 -ratificado por ley 24.447-) es ante el "supervisor" que debe plantearse cualquier cuestionamiento en el accionar de la Obra Social. Ello es así habida cuenta que es sobre el mismo universo de obligados y dependientes y sobre idénticas nóminas salariales, que deben efectuarse los procesos de fiscalización que pueden culminar en determinaciones de deudas. Así las cosas, y ante la falta de una específica regulación normativa en la materia, cabe concluir que como etapa previa a una posible intervención judicial revisora, el ente recaudador -delegante y supervisor- deberá resolver los casos de controversia a modo de agotamiento de la vía administrativa (ley 19.549), habida cuenta que son sus resoluciones las pasibles de recurso en el marco de la ley 18.820. En consecuencia, y en cuanto la legislación vigente no prevé la existencia de recursos (en el caso, apelación) contra resoluciones de organismos prestadores de obras sociales, debe desestimarse sin más la vía procesal elegida, y por razones de economía y celeridad procesal, remitir las actuaciones a la D.G.I. para que asuma la intervención que le corresponde.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 44911, 30.06.97

"JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. c/ U.O.C.R.A."
(M.-Ch.-D.)

Servicio asistencial médico. Suspensión. Medida cautelar. Procedencia.

Sin perjuicio de los derechos y obligaciones que puedan existir entre el IOS y el PAMI por aplicación de la ley 19.032, corresponde confirmar la resolución del a quo que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, tendiente a que se le mantuviera el servicio asistencial médico indispensable. No obsta a ello lo sostenido por la accionada en cuanto a que no se demuestra el peligro en la demora porque la prestación del servicio había sido cortada con mucha anterioridad a la fecha del inicio de la acción, ya que ello pudo obedecer a que no fue necesaria la prestación médica permanente, al no sufrir la afiliada alguna enfermedad que le exigiera la pronta atención.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45420, 22.12.97

"CERNA, ELSA c/ I.O.S."
(Ch.-D.-M.)

PRUEBA

Cuestión de puro derecho. Desigualdad entre el administrado y el organismo.

Debe tenerse en cuenta la desigualdad jurídica en que se encuentra el administrado frente al órgano previsional, ya que éste último tiene oportunidad de recabar, sustanciar y valorar las pruebas en la instancia administrativa. Por ello, el Poder Judicial en su actividad de contralor jurisdiccional de las decisiones administrativas, no puede privar al justiciable de ofrecer las pruebas tendientes a reconocer el derecho que invoca. Conforme ello y lo normado por el art. 360 del C.P.C.C., resulta irrazonable la decisión del "a quo" que declaró la cuestión de puro derecho, cercenando el derecho de defensa en juicio que tienen las partes en el proceso consagrado en el art. 18 de la C.N.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46169, 16.10.97

"GARCÍA, ÉLIDA FAUSTINA c/ A.N.Se.S."
(H.-E.-F.)

Limitación de recursos. Ley 24.463. Arts. 16 y 17. Facultad del magistrado.

Sin perjuicio de la facultad que le cabe al magistrado de ordenar las medidas para mejor proveer que estime pertinentes, la prueba tendiente a demostrar la limitación de los recursos (art. 16 y 17, ley 24.463) que el organismo administrativo pretende hacer valer en este estadio procesal, no resulta conducente para dilucidar el derecho de fondo que le puede asistir al accionante, por lo que corresponde su desestimación (conf. art. 360, inc. 1) C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46032, 16.09.97

"LARREA, HÉCTOR c/ A.N.Se.S."

(H.-F.-E.)

Limitación de recursos. Pericial. Cuestión de puro derecho.

A partir de la deducción un pedido de jubilación o de reajuste de haberes y con anterioridad al acto administrativo, el organismo previsional tiene ocasión de preservar los derechos que le asisten y producir de oficio las pruebas conducentes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el trámite administrativo, cuya dirección le compete como órgano encargado de la aplicación y control de las leyes de la Seguridad Social (conf. C.S.J.N. "Hussar Otto c/ A.N.Se.S.", sent. del 10-10-96). Por lo tanto, resulta infundado el agravio referente a las restricciones que dicho organismo tendría para ejercer su derecho de defensa, ante el dictado de la providencia que declara la cuestión de puro derecho.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46032, 16.09.97

"LARREA HÉCTOR c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, arts. 16 y 17. Denegación. Inapelabilidad. Art. 496 C.P.C.C.

El art. 496 del C.P.C.C. expresamente prevé que las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas están sujetas al régimen del art. 379 de dicho cuerpo normativo que dispone la inapelabilidad de tales decisiones, sin perjuicio de la potestad de la parte para requerirlas en la Alzada en oportunidad de recurrir la sentencia definitiva. Por ello, no tratándose de cuestiones que imposibiliten la continuación del proceso, ni existiendo gravamen irreparable alguno, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del "a quo" que no hizo lugar a la prueba pericial contable solicitada por el organismo a los fines previstos por los arts. 16 y 17 de la ley 24.463.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45196, 01.10.97

"MEYER, NÉLIDA EDITH c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Prueba anticipada. Art. 326 C.P.C.C. Improcedencia.

El aseguramiento de pruebas en los términos del art. 326 del C.P.C.C. constituye una vía procesal de excepción (cfr. Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, Tº II, pág. 19), que solo debe admitirse si se comprueba que el proponente se halla expuesto a perder la probanza o que la misma le resultará de imposible o muy difícil realización en una ulterior oportunidad. Por ello, quien la pide debe extremar la explicación de las razones que la hagan viable y acreditar la existencia de los motivos que invoca en su favor. Sólo concurriendo tales recaudos puede acordarse la franquicia legal, pues tratándose de una medida de excepción, debe evitarse un despliegue de inútil actividad jurisdiccional (cfr. C.N.A.Civ. y Com. III, sent. del 26.06.95, "Iguazú Cía. de Seguros S.A."). En consecuencia, resulta improcedente la pretensión de determinar mediante medidas de prueba preliminares, si las diferencias reclamadas en la demanda efectivamente existen, ya que ello sólo se dilucidará al momento de dic-

tarse la sentencia que decida sobre el fondo de la litis, y las pruebas que ahora se ofrecen como "anticipadas" serán las que, en última instancia, deberán producirse para arribar a dicho pronunciamiento.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46554, 30.12.97

"CASTILLO, ZULEMA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

RECURSOS

Aclaratoria. Complemento de la sentencia principal.

La decisión del a quo que, considerando haber incurrido en un error material, modifica la imposición de costas de la sentencia, excede el marco del recurso de aclaratoria. Ello así, en la medida que no se puede decidir lo opuesto a lo declarado en la primera resolución -como en los casos de revocatoria o de apelación- sustituyendo un pronunciamiento por otro, introduciendo, por otra parte, modificaciones sustanciales que alteran la unidad de dirección lógica del juzgamiento. En ese orden de ideas, debe tenerse presente que la aclaratoria constituye un complemento de la sentencia principal, de la cual forma parte, y que constituye el presupuesto necesario de su existencia, por lo que si la sustituye o modifica, la misma es nula en virtud de lo normado por el art. 166 del C.P.C.C. (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial", T. D).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45413, 15.12.97

"ARIAS, MARIANO c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Aclaratoria. Complemento de la decisión principal.

El recurso de aclaratoria no persigue la revisión del acto judicial -como ocurre con los recursos de revocatoria o apelación- sino su complemento, permitiendo que los decisorios sean precisos de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Asimismo, esa posibilidad de complementar o aclarar sólo se refiere a los aspectos accidentales y omisiones que no hacen a la esencia de la resolución. En tal sentido, la doctrina ha expresado que el recurso de aclaratoria no puede "alterar lo sustancial de la decisión", porque los errores, no ya materiales, sino de hecho o de derecho que constituyen el fundamento o los motivos de la sentencia, deben ser corregidos a través de otros recursos (cfr. C.S.J.N., sent. del 12.02.89, L.L. 1980-C-66; Finochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires", T. I, pág. 592 y ss.).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46225, 20.10.97

"JIMÉNEZ, BENITO c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Aclaratoria. Art. 166 C.P.C.C..

No debe admitirse la solicitud de aclaratoria si lo solicitado no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 166 del C.P.C.C., es decir, corregir un error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46225, 20.10.97

"JIMÉNEZ, BENITO c/ A.N.Se.S."

(F.-H.-E.)

Amparo por mora de la administración. Pronto despacho.

El Tribunal desde sus inicios ha expresado que considera requisito esencial para tramitar el amparo por mora -conforme lo dispusiera la resolución N°

25/89 de la C.N.A.S.S., modificada por Acta N° 132/95 de la C.F.S.S.- la necesaria presentación del pronto despacho contra el silencio de la administración. En consecuencia no queda vedada la vía del amparo por mora ante la presentación del pronto despacho en instancia administrativa, ya que dicho pedido no significa necesariamente que se opte por el silencio.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45251, 03.11.97

"CORTINEZ, MODESTO c/ A.N.Se.S."

(D.-Ch.-M.)

Amparo por mora de la administración. Deber del organismo. Ley 19.549, art. 31.

El administrado tiene derecho a obtener una decisión expresa y correctamente fundada que rechace o conceda lo peticionado. Por ello, resulta inadmisibile que el incumplimiento del deber impuesto por el art. 31 de la ley 19.549 -que impone a los organismos administrativos la obligación de expedirse acerca de los reclamos presentados- perjudique a quienes legítimamente pretenden una decisión.

C.F.S.S., Sala II, sent. 71481, 06.11.97

"PAIVA, DELFOR ROMERO c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Amparo por mora de la administración. Ley 19.549, arts. 10 y 28.

En caso de requerirse "pronto despacho" (art. 10, ley 19.549) y no obtenerse respuesta del organismo correspondiente, la misma norma autoriza al interesado a interpretar dicho silencio como negativa. En tal caso, podrá impugnar la decisión ante el organismo jurisdiccional competente (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 01.04.92, "Galbusera, Dante Carlos"); pero ello no significa que el administrado no puede insistir en que el organismo se pronuncie expresamente accionando para ello en los términos del art. 28 de la referida ley 19.549. En ese orden de idas se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener que "el silencio como negativa es, evidentemente, una ficción legal otorgada a favor del administrado y no de la Administración" (Sala II, sent. del 05.04.77, "Goldberg c/ Universidad de Buenos Aires").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71481, 06.11.97

"PAIVA, DELFOR ROMERO c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Amparo por mora de la administración. Silencio. Habilidad de la instancia. Ley 24.463.

Cuando la ley 24.463 se refiere a "resolución", se impone una interpretación que no prescinda de la actitud silente u omisiva de la administración en resguardo del derecho de defensa en juicio, uno de cuyos presupuestos es la tramitación y finalización del proceso en un tiempo razonable, por lo que no cabe sino concluir que ambas categorías resolutivas (manifestación de voluntad "expresa" o "tácita" -arts. 63, 64 y 65 ley 19.549-) guardan analogía conceptual en cuanto adquieren similar grado de virtualidad o eficacia jurídica. Una exégesis contraria condenaría al administrado a un estado de indefensión al quedar desprotegido frente a la inactividad administrativa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46292, 11.11.97

"DELL ACUA, OFELIA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Amparo por mora de la administración. Silencio. Habilidad de la instancia. Ley 24.655, art. 2 inc. d).

Ante el silencio de la administración pública existía una vía legal: el recurso por mora al que hacía referencia el art. 8, inc. f) de la ley 23.473, tendiente

a obtener el dictado de un pronunciamiento administrativo sobre cuya base se pudiese interponer recurso de revisión judicial en sede judicial (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 01.04.92, "Galbusera, Dante Carlos"). Ese recurso se encuentra hoy contemplado en el art. 2, inc. d) de la ley 24.655. En razón de ello, no habiéndose intentado la vía del amparo por mora, no se encuentra configurado el silencio de la administración que pretende la peticionante para la habilitación de la instancia. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46292, 11.11.97

"DELL ACUA, OFELIA c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Amparo por mora de la administración. Demanda. Adecuación. Ley 19.549, arts. 28 y 29. Intimación.

No se ajusta a derecho la sentencia que intima a la parte actora a adecuar su demanda a lo preceptuado por los arts. 28 y 29 de la ley 19.549 -en razón de no ser aplicable lo prescripto por el art. 10 del mencionado cuerpo legal-, toda vez que dichas vías procesales quedan libradas al arbitrio del peticionante. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Laclau-. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67229, 04.12.97

"TORRISI, ALFREDO MIGUEL c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Amparo por mora de la administración. Demanda. Adecuación. Ley 19.549, arts. 28 y 29. Intimación.

Ante la voluntad expresa del titular de continuar la vía procesal elegida originariamente, resulta sobreabundante la intimación dispuesta por el juez "a quo" conforme los arts. 28 y 29 de la ley 19.549. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Wassner-. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67229, 04.12.97

"TORRISI, ALFREDO MIGUEL c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Amparo por mora de la administración. Demanda. Adecuación. Ley 19.549, arts. 28 y 29. Intimación.

No habiendo sido materia de agravios lo resuelto por el "a quo" que intimó a la actora a adecuar la demanda al procedimiento previsto por los arts. 28 y 29 de la ley 19.549 -en razón de no ser aplicable lo prescripto por el art. 10 del mencionado cuerpo legal-, no hay motivos para variar lo decidido, máxime teniendo presente que con ello se ha querido evitarle un inútil dispendio jurisdiccional a la parte interesada. (Disidencia del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67229, 04.12.97

"TORRISI, ALFREDO MIGUEL c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-W.)

Apelación. Acumulación de acciones. Improcedencia.

El art. 496 del C.P.C.C. enumera, taxativamente, las resoluciones pasibles de apelación, no encontrándose dentro de las mismas la que rechaza la acumulación de acciones conforme lo dispuesto por el art. 88 del mismo ordenamiento. En consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45216, 30.10.97

"ABAS, NATALIO Y OTROS c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Apelación. Amparo por mora de la administración. Bono de actuación.

Habida cuenta de la naturaleza de la acción ejercitada (amparo por mora de la administración) y la cuestión que origina la apelación (presentación del

bono de actuación judicial impuesto por la ley 23.187) que en nada impide la continuación de trámite, corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66897, 14.10.97
"RAMÍREZ, ALFREDO c/ A.N.Se.S."
(F.-W.-L.)

Apelación. Ejecución fiscal. Improcedencia. Leyes 11.683 y 23.658.

Habida cuenta que el art. 92 de la ley 11.683 -a partir de la reforma introducida por el art. 34, inc. 11) de la ley 23.658- establece la inapelabilidad de la sentencia de ejecución, el recurso de apelación ha sido mal concedido, por cuanto admitir la revisión del mérito de lo resuelto importaría desconocer la prohibición establecida por la norma de referencia (conf. C.N.A.C.A.F., Sala I, in re "F.N.- D.G.I. c/ Tadenay" sent. del 28.07.93; Sala II, in re "F.N. c/ Mariano Caffiero S.A." sent. del 19.05.94; "F.N. c/ Apholos S.A.I.C.F.I.", sent. del 19-11-96, entre otros).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45314, 27.11.97
"FISCO NACIONAL -D.G.I.- c/ LA INTERNACIONAL EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS S.A.C.I."
(M.-Ch.-D.)

Apelación. Expresión de agravios.

Aunque el memorial en análisis, más que contener una crítica concreta y razonada de la sentencia en crisis sea una reproducción del escrito de contestación de demanda, atento a que debe priorizarse el examen de las cuestiones debatidas en búsqueda de la verdad objetiva por sobre los aspectos formales o deficiencias que se observen en la expresión de agravios, corresponde analizar la queja impetrada (cfr. C.S.J.N., sent. del 29.09.92, "Antoniak, Miguel c/ I.M.P.S."; sent. del 01.04.97, "Femenia, Miguel Ángel c/ Simán Bossio, Ramón Avelino Jaime y Cosecha Coop. de Seguros Ltda.").

C.F.S.S., Sala II, sent. 71671, 30.12.97
"AVALOS DE ARRIBALZAGA c/ A.N.Se.S."
(F.-H.-E.)

Apelación. Proceso sumario. Art. 496 C.P.C.C.

Los tribunales deben ceñirse estrictamente a las reglas establecidas por el art. 496 del C.P.C.C. respecto a las resoluciones apelables en el proceso sumario. Las disposiciones especiales sobre apelabilidad dispuesta en el código referido, como por ejemplo el art. 96, son inaplicables en estos juicios (cfr. Roland Arazi y Carlos Fenochietto; "Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación").

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66933, 16.10.97
"RUIZ, JOSEFA Y OTROS c/ A.N.Se.S."
(W.-F.-L.)

Nulidad. Apelación. Proceso sumario. Art. 496 C.P.C.C.

Toda vez que la denegatoria de un pedido de nulidad no se encuentra incluida entre los supuestos contemplados por el art. 496 del C.P.C.C. para procesos sumarios, la apelación ha de ser considerada formalmente no admisible según el enunciado que aquél contiene -y que debe considerarse taxativo-, habida cuenta de la expresión "únicamente serán apelables ..." con que se inicia su texto.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67172, 21.11.97
"GARABOA, RICARDO c/ A.N.Se.S."
(F.-W.-L.)

Queja. Apelación denegada. Improcedencia. Art. 496 C.P.C.C.

Habiéndose denegado el recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el art. 317 del C.P.C.C., debe desestimarse la queja interpuesta por no encontrarse la resolución en recurso dentro de los supuestos previstos en el art. 496 del mismo ordenamiento.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45309, 27.11.97

"ROJAS, GLADYS ZULMA c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Recurso extraordinario. Acción de amparo. Desestimación.

La sentencia recaída en una acción de amparo no es revisable por la vía del recurso extraordinario cuando el fundamento autónomo de la desestimación reside en que la demandante cuenta con otras vías para la tutela de sus eventuales derechos (cfr. Fallos 311:60).

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 66905, 14.10.97

"FERRERI, GLADYS ETELVINA c/ A.N.Se.S."

(W.-F.-L.)

Reposición. Acción de amparo. Rechazo "in límine". Efectos.

La providencia que rechaza "in límine" la acción de amparo es asimilable a una sentencia definitiva por sus efectos, pero no por ello deja de ser una resolución simple que, aunque la ley 16.986 no lo prevea expresamente, admite el recurso de reposición establecido por el art. 238 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45947, 19.08.97

"CABRERA, OSCAR VIRGILIO c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

SANCIONES CONMINATORIAS

Amparo por mora en la administración. Procedencia. Ley 24.463, art. 23.

Dada la naturaleza previsional de la cuestión debatida y atendiendo a la expresa mención que realiza el art. 23 de la ley 24.463 en cuanto autoriza la imposición de astreintes en los "amparos por mora en la administración", corresponde confirmar la sentencia que fijó una multa para el caso de incumplimiento de la orden de pronto despacho.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 45991, 28.08.97

"SIMON, JOSÉ ROBERTO c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Imposición. Organismos Públicos. Procedencia.

Resulta alejado de toda realidad que el hecho de ser un Organismo Público, conlleve el derecho a que no le sean aplicadas sanciones conminatorias cuando éste incumple con las obligaciones que legalmente son de su incumbencia.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45238, 03.11.97

"CUBELLI, HORACIO c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

SORTEO DE EXPEDIENTES

Adjudicación de expedientes. Acumulación. Conexidad.

El art. 5 del Reglamento para Sorteo y Adjudicación de expedientes - aprobado por Acta nº 135, pto. 1, inc. a) del 01.11.95- dispone que en el supuesto de actuaciones promovidas entre las mismas partes - cualquiera haya sido

el objeto del reclamo -, la iniciada con posterioridad automáticamente quedará radicada en el Juzgado donde hubiese quedado radicada la anterior. En consecuencia, si por error el expediente fue asignado a otro juzgado, aunque el magistrado no se haya inhibido - y sin perjuicio de la decisión que en definitiva proceda respecto a la acumulación por conexidad-, corresponde por razones de orden y economía procesal, tenerlo por radicado en el juzgado donde tramita la primera causa iniciada.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45302, 27.11.97

"FISCH, ENRIQUE c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

TASA DE JUSTICIA

Cuestionamiento. Oportunidad. Ley 23.898, art. 11.

La ley 23.898 (art. 11) establece una mecánica propia en orden a la posibilidad de cuestionar la aplicación, determinación y pago de tasa de justicia, la cual no podrá tenerse por llevada a cabo cuando el recurrente no cuestionó la sentencia y sí el auto dictado en consecuencia.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45327, 01.12.97

"COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD Ltda. c/ FISCO NACIONAL"

(M.-D.-Ch.)

Exenciones. Interpretación. Criterio restrictivo.

Las exenciones tributarias deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador, correspondiendo la interpretación estricta de la norma. En ese sentido, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha expresado que "la inclusión en las normas que contemplan excepciones al pago de la tasa de justicia debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo" (cfr. sent. del 22.02.94, "Markich, José Raúl").

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46248, 30.10.97

"OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ D.G.I."

(F.-E.-H.)

Exigibilidad. Beneficio de litigar sin gastos.

La tasa de justicia se genera y es exigible al actor a partir del momento en que se requiere la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional (cfr. art. 9, inc. a, ley 23.898; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 14.05.93, "Sanym S.A."; ídem sent. del 15.10.93, "Cía. Integral de Alimentos"). En consecuencia, en aquellos casos en los que el beneficio de litigar sin gastos es pedido con posterioridad a ese momento, no resulta eximido el demandante del cumplimiento de esa obligación porque sus efectos no serán retroactivos, y en virtud del principio de preclusión, no alcanza a los gastos de justicia devengados con anterioridad a su solicitud (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 17.08.95, "Zotello Alvarado, Aristóbulo" citada en C.F.S.S., Sala I, sent. del 15.04.97, "Fundación Argentina de Lucha contra el mal de Chagas").

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67254, 17.12.97

"CO-VI COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/ D.G.I."

(W.-F.-L.)

Fallo sin costas. Impugnación de deuda. Ley 23.898, art. 3, inc. g) y art. 4, inc. f).

Si bien la tasa de justicia integra las costas del juicio y debe ser soportada en la misma proporción en que dichas costas deberán ser satisfechas, como la

impone el art. 10 de la ley 23.898, ello no significa que cuando el fallo ha sido dictado sin costas, la parte actora no deba abonar la tasa de justicia que generó su recurso de apelación. Sin costas significa para la parte actora que no debe pagar las costas del vencedor pero sí debe afrontar las propias como, por ejemplo, los honorarios de quienes la hayan asistido y las comunes por mitades. En consecuencia, tratándose de una impugnación de deuda, la actora deberá abonar el 0,75% del monto apelado -conf. arts. 3 inc. 9) y 4 inc. j) de la ley citada-.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67114, 05.11.97

"SIDERCA S.A.I.C. c/ D.G.I."

(F.-W.-L.)

Hecho imponible. Sujeto obligado..

El hecho imponible que origina la obligación de abonar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional a quien lo requiere, más allá de que el sujeto obligado pueda repetir de su contraria el reintegro de las sumas pagadas, si el resultado del juicio lo autorizara.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46116, 30.09.97

"COOPERATIVA DE TRABAJO PAIDOS LIMITADA c/ D.G.I."

(F.-H.-E.)

Incidente de impugnación. Ley 23.898, art. 11.

Conforme lo dispuesto por la parte pertinente del art. 11 de la ley 23.898, corresponde revocar el auto por el que se suspendió el dictado de la sentencia, a las resultas del incidente sobre impugnación del pago de tasa de justicia.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45468, 29.12.97

"OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE PARANÁ 955/59/61"

(M.-D.-Ch.)

Impugnación de deuda. Desistimiento.

La tasa de justicia grava el instrumento -en sentido amplio- en cuya virtud se pone en movimiento el aparato jurisdiccional. De allí que es deudor o contribuyente la persona física o jurídica que inicia la actuación, y ello así aún cuando luego no se impulse el procedimiento y el servicio de justicia puesto en marcha no se efectivice, salvo que existan exenciones expresamente establecidas. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de exención aún cuando la titular haya desistido del recurso interpuesto (en el caso, por haberse acogido a una moratoria ante la D.G.I. que incluye el pago de aportes y contribuciones que fuera materia de dicho recurso).

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46237, 23.10.97

"LUPPI, OSVALDO OSCAR c/ D.G.I."

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Exención. Ley 23.898, art. 9 inc. h). Acordada 19/92 C.S.J.N.

El art. 9 inc. h) de la ley 23.898 y la Acordada 19/92 de la C.S.J.N. fijan y determinan una tasa reducida a ser oblada al radicarse las actuaciones ante el Tribunal interviniente y previa intimación. Dichas disposiciones fijan la oportunidad de su devengamiento desde que el titular interpone el recurso para su consideración por el juzgador. Por ello, si pretendía obtener una exención a esa obligación, debió promover el beneficio de litigar sin gastos con el recurso, o con antelación suficiente a la intimación que se le cursara.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46237, 23.10.97

"LUPPI, OSVALDO OSCAR c/ D.G.I."

(F.-E.-H.)

Monto imponible. Determinación de oficio.

Conforme con lo dispuesto por el art. 4, inc. j) de la ley 23.898, el monto imponible para la tasa judicial será el que surja de la resolución que se apela o se cuestiona. Por ello, tratándose de una determinación de oficio, el monto así determinado constituye el contenido económico del proceso y resulta la base para el cálculo del tributo.

C.F.S.S., Sala II, sent. 75517, 27.11.97

"COOPERATIVA DE TRABAJO CERRO CRISTO LTDA. c/ D.G.I."
(F.-H.-E.)

Obras sociales. Apremio. Exenciones. Leyes 23.898 y 23.966.

Si bien la vía del apremio importa adoptar un medio tutelar específico, cuya característica es la de facilitar la celeridad de la recaudación de aportes y contribuciones de las obras sociales, no puede deducirse de ello que sea procedente convertir a estos juicios en ejecuciones fiscales cuando el Estado Nacional no es parte. Además, las exenciones al pago de la tasa de justicia establecidas por el art. 13 de la ley 23.898, no pueden ser desvirtuadas por la incorporación dispuesta por el art. 34 de la ley 23.966, la cual constituye una exención expresa referida al ex Instituto Nacional de Previsión Social que no comprende a las obras sociales; y cuyo art. 1, al enumerar las actuaciones que se encuentran exentas de oblar tasa judicial, no incluye a las obras sociales sindicales.

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 45997, 21.04.98

"OBRA SOCIAL DE PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ ALOI, DANIEL Y OTRO"
(M.-D.-Ch.)

Obras sociales. Eximición. Improcedencia.

El Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario no se encuentra incluido entre las personas exentas mencionadas en el art. 13 de la ley 23.898, pues la incorporación dispuesta por el art. 34 de la ley 23.966 se trata de una exención expresa referida al ex Instituto Nacional de Previsión Social, que no alcanza a las obras sociales. (De la opinión del Representante del Fisco al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala I, sent. int. 44538, 05.05.97

"TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL PERSONAL FERROVIARIO"
(M.-Ch.-D.)

Obras sociales. Eximición. Improcedencia.

Si bien las leyes 23.660 y 23.661 estipulan a su respecto la exención del pago de tasas en general, resultaron modificadas en lo pertinente por la ley 23.898 -sancionada con posterioridad-, ya que el objetivo de ésta no fue otro que legislar específicamente sobre el pago de la tasa judicial, determinando su art. 13 las exenciones en forma taxativa. En consecuencia, la condición de obra social no exime de la obligación del pago de tasa de justicia.

C.F.S.S., Sala II, sent. int. 46248, 30.10.97

"OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ D.G.I."
(F.-E.-H.)

Organismo recaudador. Eximición. Ley 24.073, art. 13, incs. f) y j).

Más allá de la evolución legislativa habida en torno a la ejecución de los aportes y contribuciones adeudados con destino a los sistemas de seguridad social, ha sido la voluntad histórica del legislador eximir del pago de la tasa de justicia a los sucesivos entes que tuvieron a su cargo la recaudación de aquellos, como se desprende de los incs. f) y j) del art. 13 de la ley 24.073.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67220, 04.12.97
"FISCO NACIONAL ~ D.G.I. c/ LAS PIEDRITAS AGROPECUARIA S.A."
(F.-L.-W.)

Organismo recaudador. Apelación. Procedencia. Ley 11.683, art. 92.

Deviene formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto por el organismo recaudador contra la providencia por la que se lo intima al pago de la tasa de justicia, por no encontrarse comprendida dicha cuestión en los supuestos de inapelabilidad del art. 92 de la ley 11.683.

C.F.S.S., Sala III, sent. int. 67220, 04.12.97
"FISCO NACIONAL ~ D.G.I. c/ LAS PIEDRITAS AGROPECUARIAS S.A."
(F.-L.-W.)

Pago. Costas a la demandada.

El pago de la tasa de justicia, en principio, debe ser efectivizado por el accionante (conf. ley 23.898, art. 9). Sin perjuicio de ello, cuando el tributo no fue ingresado por el demandante antes de la sentencia que hizo lugar a la ejecución y se impuso las costas del proceso a la demandada, es esta última quien debe hacerse cargo de su pago. Lo contrario importaría adoptar una decisión gravosa y antieconómica, dado que se impondría al accionante pagar para que luego repitiera contra la ejecutada (cfr. C.N.A.Com., Sala C, sent. del 30.12.93, "Giganti, Amado c/ Exportadora del UCO S.A.").

C.F.S.S., Sala II, sent. 75517, 27.11.97
"COOPERATIVA DE TRABAJO CERRO CRISTO LTDA. c/ D.G.I."
(F.-H.-E.)

Pago. Costas a la demandada.

La obligación del actor de pagar el impuesto de justicia es eficaz siempre que no exista condena en costas. Así, si no se lo intimó oportunamente, la resolución posterior que le exige el pago deviene tardía, puesto que el contribuyente de iure será el accionado condenado en costas, no resultando razonable ni justo exigir la oblación del impuesto a quien ya no está obligado al pago (cfr. C.N.A.Com., Sala B, sent. del 25.08.95, "Ediciones Arani S.R.L. c/ NOP S.R.L."). Dicha conclusión rige igualmente cuando la intimación de pago fue previa al decisorio, si la resolución de la incidencia planteada a su respecto se resuelve junto con la sentencia que determina expresamente quien es el condenado en costas.

C.F.S.S., Sala II, sent. 75517, 27.11.97
"COOPERATIVA DE TRABAJO CERRO CRISTO LTDA. c/ D.G.I."
(F.-H.-E.)

CORTE SUPREMA

JURISPRUDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA C.S.J.N.
(Sumarios no oficiales)

HABERES PREVISIONALES

REAJUSTE.

Las cuestiones planteadas en orden a la vigencia del art.53 de la ley 18.037, la incidencia de lo dispuesto por las leyes 23.928 y 24.463 sobre el tema de reajuste y la validez constitucional del sistema de topes máximos previsto por el art.53 de la ley 18.037, resultan sustancialmente análogas a las examinadas por el Tribunal en la causa "Chocobar" (Del voto de la mayoría. En autos se decidió extender esta última doctrina a los casos regidos por la ley 14.473).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, "Cordaro, Pascual c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos", sentencia del 17-3-98.

No se justifica mantener al presente fórmulas de reajuste que ya habían sido abandonadas por el legislador para establecer un régimen común que asegurase de modo razonable un incremento de haberes similar al obtenido por los activos, por lo que corresponde resolver la cuestión dentro del marco legal aplicable, según lo dispuesto por el art.53 de la ley 18.037, mientras tuvo vigencia dicho régimen (Del voto de la minoría).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Cordaro, Pascual c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos", sentencia del 17-3-98.

PENSION

CONCURRENCIA.

Cabe concluir que entre 1982 y 1983 se interrumpió el plazo de convivencia que requería la ley 23.226 -similar al de la ley 23.570- por lo que a la fecha del deceso del causante -producida en 1986- la relación de aparente matrimonio no reunía la antigüedad de cinco años inmediatamente anteriores al deceso del "de cuius", necesaria para reconocer el derecho a pensión a la conviviente.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Reinolds, Diana Elizabeth c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ pensiones", sentencia del 14 de noviembre de 1997.

SEGUNDO MATRIMONIO.

Sobre la base de los fines que tuvo en cuenta el legislador para el dictado de la ley 22.611 -alentar la realización de uniones matrimoniales y eliminar o modificar las normas que directa o indirectamente conspiran contra ese objetivo esencial- se puede concluir que el art.3 de dicha ley alcanza a las viudas de los militares que hayan contraído nuevas nupcias, sin que constituya obstáculo a ello el régimen específico de retiros y pensiones militares.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Harvey, Margarita c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa", sentencia del 10 de diciembre de 1996, D.T.1998-A-595.

La rehabilitación de la pensión en general a las viudas vueltas a casar deben tener los límites que surgen de la ley que la estableció, toda vez que no sería válido desarticular la norma para ejercer ese derecho por sobre la medida en que fue otorgado, particularmente cuando ello importaría vulnerar el espíritu de la ley 22.611 -modif.por ley 23.570- de cuyo mensaje surgen los fundamentos por los cuales aquél se instituyó en modo limitado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Harvey, Margarita I. c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa", sentencia del 10 de diciembre de 1996, D.T.1998-A-595.

PRESTACIONES

EXTINCION.

La facultad que tiene el organismo previsional para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios, se halla condicionada a que la nulidad resulte de hechos o actos "fehacientemente probados" (art.48, ley 18.037) y presupone que se haya dado a los interesados participación adecuada en debida forma en los procedimientos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Matas Marti, Juana c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles", sentencia del 25 de noviembre de 1997, D.T.1998-A-779.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL

COMPETENCIA.

En virtud de los términos de la ley 24.655 y de la Acordada 75/96, no corresponde que se giren a la Cámara Federal de la Seguridad Social las causas que no hayan sido promovidas sobre la base del art.15 de la ley 24.463. Por consiguiente, las causas previsionales que versen sobre aplicación del régimen de retiros, jubilaciones y pensiones de las fuerzas armadas y de seguridad en trámite ante el fuero contenciosoadministrativo federal, pese a haber obtenido sentencia de primera instancia, deben continuar su tramitación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal hasta su completa terminación (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, al que adhiere la C.S.J.N.).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Carli de Romanutti, Aida B. y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa", sentencia del 25 de septiembre de 1997, D.T.1998-A-388.

Si bien la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente no se encuentra comprendida en los supuestos enumerados en el art. 2 de la ley 24.655, a falta de una norma que determine el tribunal competente para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra sus decisiones, habida cuenta de que ella administra un régimen de previsión de alcance nacional, resulta de aplicación por analogía los citados preceptos legales que atribuyen jurisdicción a los juzgados federales de primera instancia de la seguridad social, dado su especialidad. (Del dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, que la Corte comparte).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "García, Inés c/ Caja Complementaria de la Actividad Docente", sentencia del 14-10-97, D.T. 1998-A-603.

LEY 24.463.

No se advierte de qué modo la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social podría afectar el funcionamiento actual del sistema previsional o los fondos destinados al pago de las prestaciones a cargo de la demandada y no reconocidas todavía, por lo que su tratamiento resulta improcedente por prematuro.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Ciampagna, Rodolfo Nicolás c/ Administración Nacional de la Seguridad Social", sentencia del 23 de diciembre de 1997, D.T.1998-A-599, J.A. 1 de abril de 1998, p.27.

RECURSOS.

Habilitada la posibilidad del "certiorari" en el caso del recurso extraordinario (art.280 C.P.C.C.N.), instituido como el instrumento genérico de la función jurisdiccional más alta de la Corte Suprema, resulta razonable extender la aplicación del criterio selectivo al ámbito de los recursos ordinarios de apelación ante el más Alto Tribunal (Del voto en disidencia del Dr.Antonio Boggiano).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Reinolds, Diana Elisabeth c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ pensiones", sentencia del 14 de noviembre de 1997.

RECURSO EXTRAORDINARIO.

En determinadas condiciones cabe hacer excepción a la jurisprudencia de la C.S.J.N. según la cual las resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia tendientes a hacerla efectiva, así como también las que interpretan o determinan el alcance de lo decidido con posterioridad a su dictado, no son eficaces para habilitar la vía del art.14 de la ley 48.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, "Blanco, Héctor Benedicto c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles", sentencia del 25 de septiembre de 1997.

LEGISLACIÓN

TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-1997

LEYES

LEY N° 24.884
SANCIÓN: 5-11-1997 , PROMULGACIÓN: 25-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 28-11-1997.

Modificación de los artículos 3°, 7° y 15 de la Ley 24.540-RÉGIMEN SOBRE IDENTIFICACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS.

LEY N° 24.901
SANCIÓN: 5-11-1997; PROMULGACIÓN: 2-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 5-12-1997.

Título: Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad.

LEY N° 24.892
SANCIÓN: 5-11-1997; PROMULGACIÓN: 2-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 9-12-1997; PAG. 5.

Extiéndese el beneficio establecido por las leyes 23.848 y 24.652 (beneficio de una pensión vitalicia a los ex-soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur) al personal de oficiales y suboficiales que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria y no gocen de derecho a pensión. Extiéndese el citado beneficio a los derechohabientes mencionados en el art. 53 de la Ley 24.241.

DECRETOS

1010/97
FECHA: 26-9-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 1-10-1997.

Modifica el art. 1° del Decreto 2627/92, modificado por Decreto 1524/94. (Subsidio a Jubilados y pensionados. Agrega inciso c), referido a jubilados y pensionados nacidos entre 1928 y 1930 que posean como único ingreso una jubilación inferior a PESOS DOSCIENTOS).

1037/97
FECHA: 2-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 8-10-1997.

Apruébanse Convenios suscriptos por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social con el Gobernador de la Provincia de RÍO NEGRO, a través de los cuales se ha acordado la cooperación en materia de empleo y Capacitación Laboral, Inspección del Trabajo y Relaciones Laborales.

* * * * *

1087/97
FECHA: 16-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 21-10-1997.

Otorga una pensión vitalicia, intangible e inembargable a la viuda e hijos menores del Dr. Alfredo Pochat.

* * * * *

1093/97
FECHA: 22-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 27-10-1997; PAG. 3.

Al personal cuyos cargos se hubieren suprimido en el marco de la Ley 24.629 y que fuese incorporado al Fondo de Reconversión del Sector Público Nacional y reingresara a las plantas permanentes del Sector Público Nacional habiendo recibido indemnización con motivo de su egreso, no le serán computados los años de servicios considerados a ese fin en los casos de ulterior separación, aunque sí para los otros beneficios provenientes de su nuevo nombramiento.

* * * * *

1104/97
FECHA: 22-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 28-10-1997; PAG. 3.

Designa director del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares al Señor Capitán de Navío Carlos Alberto JARRIGE LIMA.

* * * * *

1129/97
FECHA: 30-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 4-11-1997; PAG. 2.

Aprueba el régimen retributivo para el personal extraconvencionado de Conducción Superior.

* * * * *

1283/97
FECHA: 25-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 28-11-1997; PAG. 2.

Adóptanse medidas en relación del ejercicio de la facultad otorgada en el segundo párrafo del art. 15 de la Ley 24.241 (competencia de la ANSES para suspender, revocar, modificar o sustituir por razones de ilegitimidad en sede administrativa, resoluciones otorgantes de prestaciones previsionales).

* * * * *

1301/97
FECHA: 28-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 3-12-1997; PAG. 3.

Modifica el art. 1° del Decreto 9/93 (Excluye de la Desregulación de Obras Sociales a las incluidas en el inciso f) del art. 1° de la Ley 23660).

1325/97
FECHA: 5-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 10-12-1997.

Acéptase la renuncia presentada por el Doctor José Armando CARO FIGUEROA, al cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

1421/97
FECHA: 23-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 30-12-1997; PAG. 7.

Deja sin efecto la reducción de retribuciones del personal del Sector Público Nacional dispuesta por el Decreto 290/95.

1424/97
FECHA: 23-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 30-12-1997.

Establece la aplicación obligatoria del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MEDICA en todos los establecimientos Nacionales de Salud, en los Sistemas Nacionales del Seguro de Salud y de Obras Sociales, en el Instituto Nacional de Servicios sociales para Jubilados y Pensionados, en los establecimientos incorporados al Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

RES 644/97
FECHA: 30-9-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 8-10-1997.

Resuelve que las Empresas de más de 100 trabajadores deberán abonar las remuneraciones de su personal permanente y contratado bajo cualquiera de las modalidades previstas en la legislación vigente, en cuentas abiertas a nombre de cada trabajador. Dichas cuentas deberán ser abiertas en entidades Bancarias habilitadas que posean cajeros automáticos en un radio de influencia no superior a 2 kilómetros del lugar de trabajo.

* * * * *

RES 658/97
FECHA: 3-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 7-10-1997.

Determinase la forma de acreditación de la personería de quien comparezca por la organización representativa de empleadores para ejercer la asistencia del empleador en el procedimiento de CONCILIACIÓN LABORAL establecido por la Ley 24.635.

* * * * *

RES 662/97
FECHA: 7-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 14-10-1997.

Apruébase el Programa "PROEMPLEO", que se ejecutará a través de la SECRETARÍA DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL en colaboración con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo establece la presente Resolución y las disposiciones reglamentarias.

* * * * *

RES 691/97
FECHA: 15-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 21-10-1997; PAG. 4.

Establece que el retiro transitorio por invalidez y la pensión por fallecimiento previstas en el Decreto 866/97 (derecho a Retiro por Invalidez o a la Pensión por Fallecimiento para los ex-agentes de la Administración Pública Nacional que se hayan acogido a regímenes de retiro voluntario) se harán efectivos a partir de la fecha de la respectiva solicitud.

* * * * *

RES 819/97
FECHA: 26-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 4-12-1997; PAG. 13.

Aprueba la estructura organizativa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Designa a la Dra. Liliana Alejandra Torres para el Cargo de Gerente de Legal y Técnica.

* * * * *

RESOLUCIONES DE SECRETARÍAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
RES 499/97
FECHA: 21-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 28-11-1997; PAG. 3.

Establécese que el Banco de la Nación Argentina transferirá con fecha 25 de noviembre de 1997 fondos correspondientes a las cuotas de programación de la ejecución asignadas a la ANSSAL.

* * * * *

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

RES 61/97

FECHA: 19-8-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 17-10-1997; PAG. 31.

Resuelve tener al SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ODONTÓLOGOS Y BIOQUÍMICOS administrado por la Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos de la Provincia de Salta por comprendido en el Convenio de Reciprocidad ratificado por Resolución de la ex-Subsecretaría de Seguridad Social 363/81.

* * * * *

RES 78/97

FECHA: 2-10-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 8-10-1997.

Amplía los plazos fijados en los art. 1° y 2° de la Resolución SSS 56/97 (Sistema de registración de expedientes judiciales con sentencia).

* * * * *

RES 80/97

FECHA: 7-10-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 13-10-1997; PAG. 6.

DEROGADO.

Normas para la asignación de AFJP a los trabajadores indecisos.

* * * * *

RES 84/97

FECHA: 24-10-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 29-10-1997; PAG. 8.

La constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) expedida por la ANSES, por su carácter de documentación identificatoria del trabajador no podrá ser retenida en ningún caso por el empleador y/o demás entidades y organismos que intervienen en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

* * * * *

RES 88/97

FECHA: 29-10-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 03-11-1997; PAG. 8.

Modifica el cuerpo de normas complementarias y aclaratorias del Régimen de Asignaciones Familiares, aprobado por Resolución SSS 112/96 y modificado por Res. SSS 16/97.

* * * * *

RES 89/97

FECHA: 31-10-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 6-11-1997; PAG. 3.

Resuelve que las disposiciones del decreto 136/97 (reglamentación del art. 95 de la Ley 24.241; requisitos necesarios para considerar a un afiliado aportante regular o irregular con derechos) serán aplicables a las solicitudes de pensión cuando el fallecimiento del causante o la solicitud de beneficio fuere posterior a su vigencia.

* * * * *

RES 91/97

FECHA: 4-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 27-11-1997; PAG. 29.

Aclaración acerca de la obligación de efectuar retenciones y abonar contribuciones de seguridad respecto de las prestaciones dinerarias establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Aclaración de la normativa referente al pago de asignaciones familiares a los beneficiarios de las prestaciones dinerarias establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Prestaciones del INSSJP para beneficiarios de la prestación por incapacidad permanente total mientras dure la provisionalidad de la misma.

* * * * *

RES 93/97

FECHA: 10-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 14-11-1997; PAG. 9.

Los trámites de beneficios iniciados al amparo y en vigencia de la Ley 18.037, en los que se encuentre acreditado el derecho a la prestación serán otorgados por el Régimen Previsional Público, aún cuando el afiliado hubiere continuado o reingresado a la actividad en relación de dependencia con posterioridad al 14 de julio de 1994 y sus aportes derivados al Régimen de Capitalización. Si el beneficio solicitado fuere por causa de invalidez y se determinare la existencia de incapacidad sobreviniente a dicha fecha, se procederá de acuerdo a lo previsto en los arts. 1° y 2° de la Resolución de la SSS 44/97, remitiéndose las actuaciones a la AFJP a la que se encontrare adherido el beneficiario, si correspondiere.

* * * * *

RES 95/97

FECHA: 21-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 4-12-1997; PAG. 16.

Autoriza a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para allanarse respecto de aquellas demandas en que se solicite el reajuste de haberes previsionales en las que resulte aplicable el módulo de movilidad establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en el precedente "CHOCOBAR" para el período 1 de abril de 1991 - 31 de marzo de 1994.

* * * * *

RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y REPARTICIONES DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

RES GRAL 27/97

FECHA: 30-09-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 02-10-1997; PAG. 17.

Establece un régimen de facilidades de pago, no automático, permanente y sujeto a las características de cada caso, aplicable a la cancelación total o parcial de deudas por obligaciones impositivas y de los recursos de Seguridad Social.

RES GRAL 38/97

FECHA: 29-10-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 30-10-1997; PAG. 18.

Determinación e Ingreso de aportes de TRABAJADORES AUTÓNOMOS, JUBILADOS QUE REINGRESEN A LA ACTIVIDAD y AMAS DE CASA que opten por el régimen de la Ley 24.828 para el período abril-septiembre de 1997. (Montos de las Cotizaciones).

RES GRAL 46/97

FECHA: 11-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 13-11-1997; PAG. 3.

Resuelve que los establecimientos educativos deberán ingresar los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social en los términos de la Resolución General DGI 3834/94.

RES GRAL 50/97

FECHA: 12-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 17-11-1997; PAG. 6.

Régimen especial de facilidades de pago para las Obras Sociales, de deudas por Recursos de la Seguridad Social.

RES GRAL 54/97

FECHA: 27-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 28-11-1997; PAG. 4.

Modifica la Res. Gral. DGI 3834/94 (Determinación e ingreso de aportes y contribuciones). Modifica la versión del programa de computación a utilizar.

RES GRAL 58/97

FECHA: 9-12-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 11-12-1997; PAG. 12.

Fechas de vencimiento de Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social para el año 1998.

* * * * *

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RES 982/97
FECHA: 1-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 7-10-1997; PAG. 9.

Extiéndese el Sistema de Pago Directo a todos los trabajadores que se desempeñen en empresas de la actividad privada de la Industria de la Construcción en la Provincia de Santiago del Estero.

* * * * *

RES 983/97
FECHA: 1-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 7-10-1997; PAG. 9.

Extiéndese el Sistema de Pago Directo a todos los trabajadores que se desempeñen en empresas de la actividad privada de la Industria de la Construcción en la Provincia de Tucumán.

* * * * *

RES 1001/97
FECHA: 3-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 8-10-1997; PAG. 13.

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente al mes de octubre de 1997.

* * * * *

RES 1071/97
FECHA: 21-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 28-10-1997; PAG. 9.

Establece normas que regirán los descuentos que se practican sobre los haberes de jubilados y pensionados a favor de terceras entidades. Deróganse las Resoluciones ANSES 157/97 y 451/97.

* * * * *

RES 1049/97
FECHA: 16-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 11-11-1997; PAG. 16.

Pone a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos el registro centralizado de empresas presuntamente deudoras al 31/12/1991 para con las Ex Cajas de Subsidios y Asignaciones Familiares.

* * * * *

RES 1166/97
FECHA: 4-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 7-11-1997; PAG. 2.

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente al mes de noviembre de 1997.

RES 1188/97

FECHA: 11-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 13-11-1997; PAG. 7.

DEROGADO.

Procedimiento para la distribución de afiliados que no hubieran efectuado la opción del art. 30 de la Ley 24.241 ni elegido AFJP en los plazos previstos en la misma.

* * * * *

RES 1286/97

FECHA: 26-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 2-12-1997; PAG. 10.

Delega en los Gerentes o jefes de Unidades de Atención Integral y en el jefe del Área de Verificaciones de la Gerencia Unidad Central de Apoyo el dictado de actos dispositivos mediante los que se resuelvan solicitudes de reintegro de asignaciones familiares. (Publicado sin Anexos en Boletín Oficial).

* * * * *

RES 1287/97

FECHA: 26-11-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 2-12-1997; PAG. 6.

Adécuase la Resolución 877/92, en relación a la regulación de un procedimiento recursivo de las denegatorias a los pedidos de reintegros y a las multas por infracciones tipificadas en las leyes 17.250 y 22.161 impuestas por la ANSES.

* * * * *

RES 1341/97

FECHA: 12-12-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 17-12-1997; PAG. 2.

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente a la segunda cuota del Haber Anual Complementario de 1997.

* * * * *

RES 1348/97

FECHA: 15-12-1997.

BOLETÍN OFICIAL: 31-12-1997; PAG. 11.

Establece la fecha en que vencerán los plazos para suscribir el convenio base y para formular las adhesiones a que hacen referencia los arts. 12 y 13 de la Resolución ANSES 1071/97 (Normas que regirán los descuentos que se practican sobre los haberes de jubilados y pensionados a favor de terceras entidades).

RES 1355/97
FECHA: 17-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 22-12-1997; PAG. 19.

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente al mes de Diciembre de 1997.

RES 1357/97
FECHA: 19-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 26-12-1997; PAG. 3.

Establece un orden operativo de afectación para las deducciones de los haberes de las prestaciones previstas por el artículo 17 de la Ley 24.241.

RES 1373/97
FECHA: 23-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 30-12-1997; PAG. 10.

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente a la segunda cuota del Haber Anual Complementario de 1997, de los grupos de pago 11 a 15.

RES 1374/97
FECHA: 23-12-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 30-12-1997; PAG. 10.

Fija la fecha inicial de pago de las prestaciones Básica Universal, Complementaria, de Permanencia y por Edad Avanzada.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES

RES 494/97
FECHA: 3-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 8-10-1997; PAG. 30.

Modifica la Resolución SAFJP 352/97 (Procedimiento Sumarial).

RES 495/97
FECHA: 6-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 9-10-1997; PAG. 3.
FE DE ERRATAS: BOLETÍN OFICIAL.: 16-10 1997

Introduce reformas reglamentarias en el régimen de capitalización individual contenido en el SIJP. Modificación de las Resoluciones SAFJP 767/95, 768/95 y 422/96 (t.o. Res 727/96).

RES 565/97
FECHA: 12-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 17-11-1997; PAG. 9.

Normas sobre atención de reclamos y solución de anomalías. Cumplimiento de dictámenes. recurso. Registros. Falsificación de firma. Notificación a la Superintendencia. Especificaciones Generales.

RES 567/97
FECHA: 13-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 18-11-1997.

Información periódica sobre Comisiones que deberán enviar las AFJP a sus afiliados.

RES 572/97
FECHA: 19-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 27-11-1997; PAG. 43.

Listado de requisitos a presentar para la obtención de prestaciones previsionales.

RES 581/97
FECHA: 25-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 1-12-1997; PAG. 14.

Información periódica de las AFJP acerca de Capitales recibidos de ANSES, Capitales Integrados al Fondo, Capitales de Recomposición Integrados al Fondo, Capitales Integrados Ley 24.557, Capitales de Recomposición recibidos e integrados.

RES 582/97
FECHA: 25-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 1-12-1997; PAG. 17.

Establece el régimen informativo a cumplir por las AFJP en la designación, desempeño y baja de los agentes oficiales.

RESOLUCIONES CONJUNTAS

RES CONJ ANSES 970/97 Y SAFJP 493/97 Y
FECHA: 1-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 15-10-1997; PAG. 28.

Procedimiento para los trámites en que deban intervenir las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central (dictámenes sobre retiros de invalidez).

RES CONJ ANSES 1085/97 Y SAFJP 524/97
FECHA: 26-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 7-11-1997; PAG. 31.

Delega en la Superintendencia de AFJP la evaluación médica de los trabajadores autónomos que se incorporen al SIJP de conformidad a las disposiciones del Decreto 300/97, art. 4º.

RES CONJ ANSES 1183/97 Y SAFJP 556/97
FECHA: 05-11-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 13-11-1997; PAG. 8.

Modifica la Resolución Conjunta SAFJP 290/97 y ANSES 450/97 (intervención exclusiva de las Comisiones Médicas de la Ley 24.241, para la determinación de la disminución de la capacidad laborativa que presenten los afiliados que aspiren a obtener el derecho al beneficio de jubilación por invalidez, con cese de actividad laboral con anterioridad a la entrada en vigencia del Libro I de la Ley 24241).

RES CONJ ANSES 1028/97 Y SRT 71/97
FECHA: 9-10-1997.
BOLETÍN OFICIAL: 20-10-1997; PAG. 2.

Implementación del REGISTRO NACIONAL DE INCAPACIDADES LABORALES.

LEYES

Ley 24.914

Sanción: 3-12-97 y vetada por Decreto 12/98.

Boletín Oficial: 12-1-1998

Régimen de retiro compensatorio solidario para los trabajadores que se desempeñaron en Gas del Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales que no pertenecieron en las empresas que se reestructuraron por las leyes 24.076 y 24.145.

Ley 24.927

Sanción: 9-12-97; Promulgación: 9-1-98

Boletín Oficial: 4-1-1998

Aportes y contribuciones. Exenciones. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Estatuto legal de la Delegación Regional para el Cono Sur de la Federación en la Argentina.

Ley 24.933

Sanción: 9-12-97; Promulgación: 9-1-98

Boletín Oficial: 15-1-1998

Tratados internacionales. Convenio con el Reino de los Países Bajos. Doble imposición y prevención de la evasión fiscal. Impuestos sobre la renta y el capital. Seguridad social. Fondos de pensiones.

Ley 24.936

Sanción: 9-12-1997; Promulgación de hecho: 9-1-1998

Boletín Oficial: 8-1-1998

Tratados internacionales. Organismos internacionales. Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Supresión del régimen jubilatorio.

Ley 24.937

Sanción: 10-12-97; Promulgación: 30-12-98

Boletín Oficial: 6-1-98

Ley del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.

Ley 24.938

Sanción: 9-12-97; Promulgación : 9-1-98

Boletín Oficial: 15-1-1998

Presupuesto Nacional para el ejercicio 1998. Pago de deudas previsionales. Límite de colocación de instrumentos. Uso del crédito. Financiamiento de beneficios militares. Contribución estatal por el servicio militar voluntario. Transferencias al Instituto de Jubilados y Pensionados. Condonación de deudas. Pago de sentencias. Pago de sumas atrasadas. Pensiones graciabiles. Ley complementaria permanente de presupuesto. Aplicación del art. 111 de la ley 11.683. Riesgos del Trabajo. Financiamiento. Prestaciones no contributivas. Prestaciones médicas y sociales.

Ley 24.939

Sanción: 18-12-97; Promulgación: 2-1-98

Boletín Oficial: 6-1-98

Ley Correctiva del Consejo de la Magistratura.

Ley 24.946

Sanción: 11/3/98; Promulgación parcial: 18-3-98 por Decreto 300/98.

Boletín Oficial: 23-3-1998.

Ministerio Público. Organización e integración. Funciones y actuación. Reglas especiales para los fiscales ante la justicia de primera instancia de la seguridad social.

DECRETOS

12/98

Fecha: 6-1-1998

Boletín Oficial: 12-1-1998; PÁG. 9

Observa totalmente el Proyecto de Ley sancionado bajo el n° 24.914 (Régimen de retiro compensatorio solidario para los trabajadores que se desempeñaron en Gas del estado y en Yacimientos Petrolíferos Fiscales que no quedaron en las empresas privatizadas).

106/98

Fecha: 26-1-1998

Boletín Oficial: 30-1-1998

Aprueba el texto ordenado de la Ley 18.345 (Organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo).

256/98

Fecha: 9-3-1998

Boletín Oficial: 11-3-1998; PÁG. 2

Agrega el inciso d) al art. 15 de la Ley 24.714 (Asignaciones Familiares). Establece la asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal para los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

259/98
Fecha: 9-3-1998
Boletín Oficial: 11-3-1998; PÁG. 2

Modifica el art. 1° del Decreto 2627/92, modificado por Decreto 1524/94 y 1010/97 (Subsidio a Jubilados y pensionados. Agrega inciso d), referido a jubilados y pensionados nacidos entre 1930 y 1932 que posean como único ingreso una jubilación inferior a PESOS DOSCIENTOS). Incluye para todas las categorías alcanzadas los casos de beneficiarios con cónyuge o conviviente con beneficio previsional.

336/98
Fecha: 26-3-1998
Boletín Oficial: 31-3-1998; PÁG. 2

Aclara que la transformación del Instituto de Servicios Sociales Bancarios en una Obra Social, realizada por el Decreto 240/96 importó la supresión total del Instituto y la creación de un nuevo ente que no es su continuador.

478/98
Fecha: 30-4-98
Boletín Oficial: 7-5-98

SIJP. Normas para la evaluación, calificación, y cuantificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al mencionado sistema.

DECISIONES ADMINISTRATIVAS

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DEC. ADM.- JGM 6/98
Fecha: 6-1-1998
Boletín Oficial: 8-1-1998; PÁG. 5

Distribución del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1998, aprobado por la Ley 24.938.
(Publicado en B.O. sin las planillas anexas).

RESOLUCIONES MINISTERIALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

39/98

Fecha: 15-1-1998

Boletín Oficial: 27-1-1998

Resuelve que los trabajadores embarcados a la pesca, en cualquier tipo de flota, cuya modalidad de percepción de ingresos fuera mediante el sistema denominado "retribución a la parte", deberán presentar su Clave Única de Identificación CUIL como requisito para su embarque y despacho del buque, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 701/97 (que deroga las normas que categorizan a los trabajadores marítimos remunerados "a la parte", como trabajadores autónomos).

* * * * *

RESOLUCIONES DE SECRETARÍAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

4/98

Fecha: 6-2-1998

Boletín Oficial: 10-2-1998; PÁG. 2

Resuelve que la ANSES procederá a la distribución de los aportes de los afiliados que no hubieran ejercido la opción prevista en el art. 30 de la Ley 24.241 ni elegido Administradora asignando un número igual de casos de aportantes indecisos a cada una de las AFJP. Declara la vigencia de la Res. SSS 83/96 a efectos de su aplicación en los casos de transferencias de sistemas previsionales provinciales y/o municipales.

* * * * *

10/98

Fecha: 27-2-1998

Boletín Oficial: 5-3-1998; PÁG. 9

Resuelve que los afiliados al régimen de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores autónomos establecido por la ley 18038 (t.o. 1980) que continuaron realizando aportes con posterioridad al mes de julio de 1994, utilizando las boletas de pago anteriores a la vigencia del SIJP, serán encuadrados en el Régimen de Reparto. Los pedidos de beneficio serán tramitados por la ANSES.

* * * * *

14/98

Fecha: 18-3-1998

Boletín Oficial: 24-3-1998; PÁG. 6

Pautas para la efectivización del subsidio previsto por el Decreto 2627/92 y sus modificatorios 1524/94, 1010/97 y 259/98.

* * * * *

16/98

Fecha: 20-3-1998

Boletín Oficial: 20-3-1998; PÁG. 5

Resuelve que la Ayuda Escolar Anual se otorgará a los beneficiarios del SIJP que acrediten tener derecho a la percepción de asignación por hijo o hijo con discapacidad. Normativa sobre el monto de la Asignación.

RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y REPARTICIONES

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DISPOSICIONES

Disp. 36/98

Fecha: 23-1-98

Boletín Oficial: 30-1-98

Ejecuciones Fiscales. Unificación de la representación judicial.

Disp. 128/98

Fecha: 9-3-1998

Boletín Oficial: 27-3-1998; (SUPLEMENTO).

Aprueba la estructura organizativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

RESOLUCIONES GENERALES

RES GRAL AFIP 67/98

Fecha: 5-1-1998

Boletín Oficial: 8-1-1998; PÁG. 16

Incorpora entre los beneficiarios del plan de facilidades de pago establecido por Resolución general 50/97 (plan para Obras Sociales y Asociaciones de Obras Sociales) a las entidades sin fines de lucro que presten servicios médico asistenciales.

RES GRAL AFIP 70/97

Fecha: 19-1-1998

Boletín Oficial: 21-1-1998; PÁG. 12

Sustituye el art. 8° de la Resolución General AFIP 27/97 (Régimen de facilidades de pago, no automático, permanente y sujeto a las características de cada caso, aplicable a la cancelación total o parcial de deudas por obligaciones impositivas y de los recursos de Seguridad Social).

RES GRAL AFIP 72/98

Fecha: 22-1-1998

Boletín Oficial: 26-1-1998; PÁG. 11

Régimen de presentación espontánea para los recursos de la seguridad social previsto por art. 72 de la Ley 24.938. Norma Complementaria.

* * * * *

RES GRAL AFIP 79/98
Fecha: 27-1-1998
Boletín Oficial: 30-1-1998; PÁG. 11

Procedimiento para determinación e impugnación de deudas con relación a los recursos de la seguridad social.

* * * * *

RES GRAL AFIP 81/98
Fecha: 4-2-1998
Boletín Oficial: 5-2-1998; PÁG. 8

Determinación e Ingreso de aportes de TRABAJADORES AUTÓNOMOS, JUBILADOS QUE REINGRESEN A LA ACTIVIDAD y AMAS DE CASA que opten por el régimen de la Ley 24.828 para el período ENERO-DICIEMBRE de 1998. (Montos de las Cotizaciones).

* * * * *

RES GRAL AFIP 82/98
Fecha: 6-1-1998
Boletín Oficial: 10-2-1998; PÁG. 8

Norma Complementaria del Plan de Facilidades de Pago de Obligaciones Tributarias y Previsionales (Res. Gral. AFIP 27/97).

* * * * *

RES GRAL AFIP 89/98
Fecha: 20-2-1998
Boletín Oficial: 24-2-1998

Norma Complementaria de las Resoluciones Generales DGI 4157/96 y 4291/97 (Sistema opcional para el ingreso de obligaciones previsionales de los empleadores que se encontraban comprendidos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial aprobado por Resolución MBS 2528/74, que desarrollan actividad tabacalera en las provincias de Salta y Jujuy).

* * * * *

RES GRAL AFIP 96/98
Fecha: 6-3-1998
Boletín Oficial: 10-3-1998; PÁG. 3

Modifica la Resolución General DGI 4241 (Régimen de facilidades de pago para contribuyentes y responsables con acuerdos preventivos).

* * * * *

RES GRAL AFIP 106/98

Fecha: 19-3-1998
Boletín Oficial: 24-3-1998; PÁG. 9

Norma Complementaria de la Res Gral. AFIP 96/98 (Régimen de facilidades de pago para contribuyentes y responsables con acuerdos preventivos).

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1380/97
Fecha: 30-12-1997
Boletín Oficial: 2-1-1998; PÁG. 2

Declara comprendidos en el Régimen de Asignaciones Familiares para Beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y pensiones a los menores de edad titulares de beneficio de pensión.

26/98
Fecha: 3-2-1998
Boletín Oficial: 6-2-1998; PÁG. 7

Fíjense las pautas de aplicación del Decreto 1010/97, que creó una nueva categoría de beneficiarios en el régimen del Decreto 2627/92 (Subsidio para jubilados y pensionados).

27/98
Fecha: 3-2-1998
Boletín Oficial: 6-2-1998; PÁG. 7

Modalidad de presentación de las declaraciones juradas de Certificación de servicios para empleadores que operan en el sistema de Pago Directo.

116/98
Fecha: 25-2-1998
Boletín Oficial: 2-3-1998; PÁG. 2

Establece la emisión de una nueva norma de procedimiento destinada a la distribución de los aportes de afiliados indecisos y determinase la operatoria de distribución de aquellos trabajadores en condición de indecisos que surjan de las transferencias de regímenes previsionales provinciales de la Nación, acordadas en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

121/98
Fecha: 27-2-1998
Boletín Oficial: 4-3-1998; PÁG. 5

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente al mes de Febrero de 1998.

142/98
Fecha: 23-3-1998
Boletín Oficial: 18-3-1998; PÁG. 11

Aprueba el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente al mes de Marzo de 1998.

154/98
Fecha: 31-3-1998
Boletín Oficial: 6-3-1998; PÁG. 3

Suspéndense los trámites en cursos y la recepción e iniciación de nuevas solicitudes para la operatoria vigente para los descuentos que se practican sobre los haberes de jubilados y pensionados a favor de terceras entidades.

226/98
Fecha: 28-4-98
Boletín Oficial: 5-5-98

Modifícase la Res. N° 1287/97, referida a las disposiciones que reglan el procedimiento recursivo contra las Resoluciones o Disposiciones dictadas que deniegan reintegros y/o imponen multas frente a las infracciones tipificadas en las Leyes 17.250 y 22.161.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES

1/98
Fecha: 2-1-1998
Boletín Oficial: 7-1-1998; PÁG. 14

Prorroga la fecha de entrada en vigencia del Anexo II de la Res. 565/97, que reglamenta el procedimiento para la atención de los reclamos que efectúen los afiliados al régimen de capitalización.

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

13/98
Fecha: 11-2-1998
Boletín Oficial: 19-2-1998; PÁG. 3

Suspende la aplicación de la Resolución SRT 43/97 (exámenes preocupacionales) por parte de las empresas de servicios eventuales y los empleadores que contraten trabajadores agrarios.

15/98
Fecha: 11-2-1998
Boletín Oficial: 19-2-1998; PÁG. 10

Crea el "Registro de Siniestros". Mecanismos y procedimientos a seguir para efectuar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

* * * * *

28/98
Fecha: 13-3-1998
Boletín Oficial: 19-3-1998; PÁG. 3

Determina que los sujetos indicados en la Res SRT 43/97 como responsables de los exámenes médicos en salud deben hacerse cargo del costo de los mismos sin perjuicio de que las Aseguradoras y los empleadores acuerden otra modalidad de pago.

* * * * *

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

25660/98
Fecha: 6-3-1998
Boletín Oficial: 13-3-1998; PÁG. 19

Reemplaza el ANEXO I de la Res. 25269 (fórmulas para el cálculo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial).

* * * * *

RESOLUCIONES CONJUNTAS

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RES CONJ MTSS 54/98 Y MEYOSP 124/98
Fecha: 29-1-1998
Boletín Oficial: 4-2-1998; PÁG. 9

Fija en OCHENTA PESOS (\$ 80) el valor del MÓDULO PREVISIONAL (MO-PRE) correspondiente al ejercicio anual 1998.

* * * * *

MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RES CONJ MSAS 170/98 Y MEYOSP 334/98 Y MTSS 241/98
Fecha: 18-3-1998
Boletín Oficial: 25-3-1998; PÁG. 5

Normas complementarias para la implementación de la opción prevista en el Decreto 638/97 (que otorga a los beneficiarios de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios la libre elección de obra social).

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RES CONJ SAFJP 620/96 Y SSN 25530/97

Fecha: 19-12-1997

Boletín Oficial: 5-1-1998; PÁG. 10

Aprueba la PÓLIZA DE SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL y su nota técnica.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RES CONJ SAFJP 55/98 Y SSN 25637/98

Fecha: 20-2-1998

Boletín Oficial: 25-2-1998; PÁG. 5

Establece disposiciones que serán de aplicación para los casos comprendidos en la Resolución SSS 33/97, reglamentaria de la Ley 24.733 (Sobre pensión por fallecimiento. Cálculo del beneficio de los derechohabientes).

DOCTRINA

(TRIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1997)

CONSTITUCIÓN NACIONAL

- Bidart Campos, Germán J.
La legitimación procesal activa de los legisladores. La Ley Supl. Const. del 5-12-97.
- Carnota, Walter F.
La acción declarativa de certeza constitucional previsional.- D.T. 1997-B p. 2250.
- Corti, Horacio G.-
Crítica y defensa de la supremacía de la Constitución.- La Ley 1997-F p. 1032.
- Guisado, Héctor C.
Cuestiones constitucionales que provoca la imposición de instancias administrativa de conciliación en conflictos individuales de trabajo. E.D. 174 p. 1067.

- Herrero, Luis R.

El amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional: ¿Amparo nuevo o amparo reciclado? ¿ Pretensión “urgente” o “mandato protectorio”? “Tobogán” de los derechos o “esclusa” regulatoria?. J.A. 1997-IV p. 947. (Semanario: N°6066 del 3-12-97).

FINANCIACIÓN (Deudas con las cajas -previsionales-)

- Condoleo, Roberto O.

Vía recursiva para impugnar resoluciones de las obras sociales determinando deudas y facultades reglamentarias e interpretativas de la Dirección General Impositiva en materia de obras sociales. D.L.E. 147 1997 p. 1109.

HABERES PREVISIONALES (Movilidad)

- Carnota, Walter F.

¿Es la movilidad previsional un concepto constitucionalmente indeterminado? (Lecciones de la Teoría Constitucional después de Chocobar).- E.D. N° 9409 del 29-12-97 p. 1.

- Hernández, María del Carmen

Del AMPO al MOPRE hay mucho trecho. R.J.P. T.VII, N° 41 p. 701.

- Waissbein, Edgardo J.

La Corte Suprema modifica su doctrina sobre el artículo 55 de la Ley 18.037. R.J.P. T.VII N° 41 p. 720.

JUBILACIÓN DE MINUSVÁLIDOS

- Jaime, Raúl C.

La minusvalía o discapacidad en las leyes jubilatorias argentinas. R.J.P. T.VII N° 41, p. 713.

JUBILACIÓN POR INVALIDEZ

Pericias médicas

- Rubinstein, Santiago

Evaluación de la pericia médica. D.T. 1997-B p. 2374.

Porcentaje de incapacidad

- Jaime, Raúl C.-

Apuntes procesales. Un caso de renuncia consciente a la verdad. R.J.P. T.VII N°40 p. 542.

OBRAS SOCIALES

- Rodríguez Mancini, Jorge.

Obras sociales y desregulación. Por Lorenzo P. Gnecco.- Comentario de J. Rodríguez Mancini.- D.T. 1997-B p. 2465.

PENSIÓN

- Carnota, Walter F.
La ultraactividad de los derechos pensionarios. D.T. 1997-B p. 2578.

Concubina

- Couttulenc, Elsa C.
Nueva orientación jurisprudencial respecto del derecho a pensión de la conviviente. R.J.P. T.VII N°40 p. 499.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL

Acto administrativo

- Cassagne, Juan C.
Sobre el sistema de invalidez y los vicios del acto administrativo (a propósito de la doctrina que pretende borrar la distinción entre nulidad y anulabilidad).- E.D. 174, p. 960.

Acción de amparo

- Carnota, Walter F.
El amparo colectivo previsional. D.T. 1997-B p. 2146.
- Schafrik, Fabiana H. y Barraza, Javier I.
El amparo: Estudio de su naturaleza. Acción ordinaria o de excepción. Condiciones de admisibilidad. Reflexión en torno de un pronunciamiento judicial. La Ley 1997-F p.247 (Supl. Adm. p. 6. del 24-11-97).

Caducidad

- Arrabal de Canals, Olga P.
Caducidad y silencio de la administración.- J.A. 1997-IV p. 1120.
- Pawlowski de Pose, A L.
El plazo de caducidad de la acción amparista en materia previsional. D.T. 1997-B p.2143.
- Pose, Carlos
Inaplicabilidad de la figura de la caducidad de instancia en el marco del proceso previsional.- D.T. 1997-B p. 2333.

Competencia

- Moreno, Gustavo D.
Reclamos por diferencias de haberes previsionales municipales: ¿Competencia de la justicia civil o de la justicia federal de la seguridad social?. R.J.P. T.VII N° 41 p. 725.
- Pawlowski de Pose, A L.
Prórroga de la jurisdicción federal en materia de seguridad social.- D.T. 1997-B p. 2140.

Cosa juzgada

Amadeo, José L. (Reseña)

- La cosa juzgada administrativa. (Según la Corte Suprema). J.A. 1997-IV p. 1190 (Semanaario N°6061 del 29-10-97. p. 37).

Ley 24.463

- Nieva, Adolfo, S.
Una propuesta relativa al procedimiento previsional. R.J.P. T.VII N°40 p. 543.
- Vázquez Vialard, Antonio
La “defensa” de la “limitación de recursos” para atender el mayor gasto provocado por la sentencia, en el proceso judicial de Seguridad Social. E.D. N° 9382 del 18-11-97. p.1.

Medidas cautelares

- De los Santos, Mabel A.
Resoluciones anticipatorias y medidas autosatisfactorias.- J.A. N°6060 del 22-10-97. p.17.

Recursos:

Amparo por mora de la Administración

- Agustín
El incumplimiento del plazo del artículo 25 no puede resolverse de oficio.- La Ley, Supl. Adm. del 3-10-97 p. 39.
- Agustín
El órgano institución y no la persona estado como parte demandada en el amparo por mora. La Ley 1997-F p. 288.- (Supl.Adm. del 24-11-97.p. 37.)

Apelación

- Milano, Rodolfo M.
El recurso de apelación del artículo 28 del decreto ley 15.943/46, convalidado por ley 13.593, frente a la sanción de la ley 24.655.- D.T. 1997-B p. 2252.

Aclaración

- Chiappini, Julio
El recurso de aclaración.- E.D. 174 p. 1132.

Casación

- Morello, Augusto M.
La casación: ¿realidad o ilusión?.- E.D. 174 p. 1138.

Certiorari

- Albretch, Paulina
El “certiorari”: la concesión del recurso por el tribunal de la causa y el depósito previo en la queja. D.J. 1997-3 p. 366. (Publicación que no se encuentra en biblioteca).

REGÍMENES PROVINCIALES

- Couttelenc, Elsa C.
Régimen Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Texto Ordenado 1996.-
R.J.P. T.VII N°40 p. 514.

RETIROS Y PENSIONES MILITARES

- Capparelli, Julio C.
¿Hacia una equiparación del concubinato con el matrimonio?.- E.D. N°
9394 del 4-12-97.p. 1.
- Jaime, Raúl C.
Histórico fallo de la Corte Suprema sobre trabajadores con estado militar.
R.J.P. T.VII N°40, p. 506.

RIESGOS DEL TRABAJO

- Gaetán, Julio C.
Ley de riesgos del trabajo. Análisis crítico.- D.T. 1997-B p. 1935.

SEGURIDAD SOCIAL ~EN GENERAL~

- Giordano, Osvaldo; Torres, Alejandra y Clutterbuck, Nicolás
Nuevos modelos de gestión de la seguridad social. Reflexiones a partir de la
experiencia argentina.- T.y S.S. 1997 p. 967.
- Livellara, Carlos A.
Ventajas y desventajas de la privatización de la Seguridad Social.-T.y .S.S.
1997 p. 1061
- Morandi, Juan C. y Piaggi, Ana I.
Cúmulo de prestaciones. La Ley 1997-F p. 1218.

SERVICIOS

Dependientes y autónomos

- Favret, Carlos M.
Cálculo de las prestaciones para servicios sucesivos y/o simultáneos en rela-
ción de dependencia y autónomos.- D.T. 1997-B p. 1991.

SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PEN- SIONES

- Pawlowski de Pose, A. L.
Configuración de la figura delictiva prevista por el artículo 135 de la Ley
24.241. D.T. 1997-B p. 2337.
- Wassner, Roberto A.
La litigiosidad y los efectos prácticos de las reformas en seguridad social.
D.L.E. N°147 1997. p. 1083.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Aportante regular e irregular

- Sauqué, I. Raúl

La crisis del afiliado previsional ante el problema de desocupación. R.J.P. T.VII N°40 p.511.

ABREVIATURAS DE LAS PUBLICACIONES CATALOGADAS

L.L.: Revista Jurídica La Ley. -diario-.

SUPL.ADM.: Suplementos de derecho administrativo publicado por La Ley.

SUPL.CONST.: Suplemento de derecho constitucional publicado por La Ley.

E.D.: El Derecho (Universitas). -diario-.

D.T.: Derecho del trabajo. (La Ley) -mensual-.

D.L.E.: Doctrina Laboral Errepar. -mensual-.

T. y S.S.: Trabajo y Seguridad Social (Universitas) -mensual-.

J.A.: Jurisprudencia Argentina. -semanario-.

R.J.P.: Revista de Jubilaciones y Pensiones. -trimestral-.

ANEXO

ACCION DE AMPARO

DOCTRINA (Incluye Notas a Fallo)

REVISTA JURÍDICA LA LEY

- AGUSTÍN.-
Amparo: nunca jamás.- (Nota al Fallo “Deutz Argentina S.A. c/DGI” CN Fed. Contencioso Adm. Sala V del 15 de abril de 1996).- LA LEY 1997-A p.83
 - CARATTINI, Marcelo G.-
El amparo en la Reforma Constitucional de 1994 (Una novísima jurisprudencia).- LA LEY 1995-A p. 874.-
 - CASSAGNE, Juan C.-
De nuevo sobre la legitimación para accionar en el amparo.- LA LEY 1995-E p. 469 (Nota al Fallo “Consumidores Libres Coop. Ltda. c/Estado Nacional” C.N. Fed. Contencioso Adm. Sala I del 20-10-95.
 - GAMBIER, Beltrán.-
El peligro en la demora en la medida cautelar en el juicio de amparo.- (Nota a Fallo: “A.P.E. Enterprises Inc. c/Comisión Nac. de Telecomunicaciones” C.N. Cont.Adm.Fed. Sala III del 19 de julio de 1996).- LA LEY 1997-A p. 69.
 - GELLI, María Angélica.-
La silueta del amparo después de la reforma constitucional.- LA LEY 1995-E p. 978.
 - GORDILLO, Agustín.-
Un día en la justicia: los amparos de los artículos 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.- LA LEY 1995-E p. 988.
- GOZAÍNI, Osvaldo A.-
El derecho de amparo creado por la Constitución Nacional.- LA LEY 1995-E p. 1112.
- GOZAÍNI, Osvaldo A.-
La noción de “afectado” a los fines de acreditar la legitimación procesal en el amparo. LA LEY del 6-8-96 p.1-
 - GOZAÍNI, Osvaldo.-
La subsidiariedad del amparo.- LA LEY Suplemento de Derecho Constitucional del 16-8-96.- p.6.
 - MERTEHIKIAN, Eduardo.-
Compre nacional y regulación de los servicios públicos (Dos aspectos de un problema).- (Nota a Fallo “Servotron S.A.C.I.F.I.c/METROVIAS y otros” C.N.Cont.Adm.Fed., Sala III del 13 de julio de 1995.- LA LEY 1996-B p. 473.

- MORELLO, Augusto M.-
Las garantías del proceso justo y el amparo, en relación a la efectividad de la tutela judicial.- LA LEY 1996-A. p.1477.
- PALACIO, Lino E.-
La pretensión de amparo en la Reforma Constitucional de 1994.- LA LEY 1995-D p. 1237.
- SAGÚES, Néstor P.-
Nuevamente sobre el rol directo o subsidiario de la acción de amparo (A propósito de la voluntad del constituyente).- LA LEY 1995-D p.1517.

EL DERECHO

- CARNOTA, Walter F.-
De cronogramas, amparos y medidas cautelares.- EL DERECHO 162 p. 67 (Nota al Fallo “Anastasi de Leone, B. E. c/A.N.Se.S.” C.N. Seguridad Social, la Sala III del 1-3-95).
- DALLA VÍA, Alberto R.-
¿Amparo o desamparo? (En la Reforma Constitucional de 1994).- EL DERECHO 163 p. 790.
- PANCALLO D’AGOSTINO, Martín R.-
Nuevas motivaciones y ámbitos para el amparo.- EL DERECHO 160 p. 996.
- RIVAS, Adolfo A.-
Pautas para el nuevo amparo constitucional.- EL DERECHO 163 p. 702.
- ROSALES CUELLO, Ramiro.-
Nueva etapa en la vida del amparo.- EL DERECHO 161 p.956.
- SPOTA, Alberto A.-
Análisis de la acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.- EL DERECHO 163 p. 767.